

EL RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA REPARACIÓN
INTEGRAL EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

OSCAR ANDRÉS MOSQUERA CÓRDOBA

FELIPE SANMIGUEL ORTIZ

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICAS

2019

EL RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA REPARACIÓN
INTEGRAL EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

OSCAR ANDRÉS MOSQUERA CÓRDOBA

FELIPE SANMIGUEL ORTIZ

Trabajo de Grado para optar al título de Abogado

ÁNGELA MARÍA HENAO MEJÍA

Asesora

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICAS

2019

NOTA DE ACEPTACIÓN

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

“La guerra nunca desaparece porque ha presidido el nacimiento de los Estados: el derecho, la paz y las leyes han nacido en la sangre y el fango de batallas y rivalidades que no eran precisamente —como imaginaban filósofos y juristas— batallas y rivalidades ideales. La ley no nace de la naturaleza, junto a las fuentes a las que acuden los primeros pastores. La ley nace de conflictos reales: masacres, conquistas, victorias que tienen su fecha y sus horroríficos héroes; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; la ley nace con los inocentes que agonizan al amanecer”.

Michel Foucault, “Genealogía del racismo. De la guerra de razas al racismo de Estado”.

Este trabajo es un reconocimiento a miles de mujeres y hombres anónimos, que a lo largo y ancho de nuestro país, han sacrificado su vida y libertad, por la conquista de la esquivada pero necesaria paz con justicia social.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, a nuestras familias por su respaldo moral y material en estos años de formación académica y profesional; sin su acompañamiento permanente e incondicional no hubiese sido posible terminar nuestros estudios.

En segundo lugar, a la Profesora Ángela María Henao Mejía, que como asesora de este trabajo de grado, en todo momento nos brindó su conocimiento, dedicación y apoyo; igualmente queremos agradecer a la Profesora Carolina Rodríguez Bejarano, ya que con sus precisiones y aportes en la etapa de la formulación del anteproyecto nos encamino por la ruta correcta; sin el concurso de ustedes no hubiese sido posible la culminación de este proyecto.

En tercer lugar, al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas y a su Director David Andrés Moncayo, por la diligencia y respaldo en esta etapa formativa, ya que a través del nombramiento de las asesoras, nos permitió profundizar y fortalecer nuestras capacidades investigativas.

Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la decana Dra. Luisa Fernanda Hurtado, por brindarnos en estos años de estudio, las herramientas teóricas y prácticas que nos permitieron emprender y concluir de la mejor manera este proyecto investigativo; a los profesores, funcionarios administrativos, empleados y demás autoridades de la Universidad Libre Seccional Pereira, mil gracias por su colaboración.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
2. JUSTIFICACIÓN.....	16
3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.....	18
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	18
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. MARCO REFERENCIAL.....	19
4.1 MARCO HISTÓRICO	19
4.2 MARCO TEÓRICO	31
4.3 MARCO JURÍDICO	35
4.3.1 Internacional.....	35
4.3.2 Constitucional.....	41
4.3.3 Legal.....	43
4.3.4 Jurisprudencial	44
4.4 MARCO CONCEPTUAL.....	48
4.5 ESTADO DEL ARTE	50
5. DISEÑO METODOLOGICO.....	60
5.1 FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	60
5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN	60
5.3 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN.....	61
5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS.....	62
5.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS CATEGORIAL	63
5.6 CATEGORÍAS	63

5.6.1 Categorías de análisis matriz # 1	63
5.6.2 Categorías de análisis matriz # 2	66
5.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	72
5.7.1 Matriz de análisis categorial # 1	72
5.7.2 Matriz de análisis categorial # 2	75
6. HALLAZGOS	77
6.1 Conductas no amnistiabiles y límites del Derecho Internacional.....	77
6.2 El régimen de condicionalidad y la reparación integral de las víctimas	92
7. CONCLUSIONES	107
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	111
8.1 PERSONAL INVESTIGATIVO.....	111
8.2 RECURSOS MATERIALES.....	111
8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES	111
8.4. RECURSOS FINANCIEROS.....	112
9. CRONOGRAMA	113
BIBLIOGRAFÍA.....	114
ANEXOS.....	120
1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN.....	121
1.1 Matriz de análisis categorial # 1.....	121
1.2 Matriz de análisis categorial # 2.....	158

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado está centrado en el régimen de condicionalidad emanado de las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, fundamentalmente en lo concerniente con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y de su relación con las obligaciones de los responsables de conductas no amnistiabiles de reparar integralmente a sus víctimas.

Para ello se profundizó en el desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional en relacionado con el régimen de condicionalidad al que se deben acoger los responsables de conductas no amnistiabiles que comparezcan ante la Jurisdicción especial para la Paz para acceder a los tratamientos especiales, teniendo en cuenta los principios de gradualidad y proporcionalidad, así como del enfoque diferencial, a la hora de evaluar su cumplimiento, en especial, la relación de este régimen con la obligación de reparar integralmente a las víctimas.

En tal sentido se definió un diseño metodológico fundamentado epistemológicamente en el paradigma histórico hermenéutico ya que de acuerdo a lo planteado anteriormente, se realizó una interpretación y análisis del desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional de la justicia transicional en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo concerniente con su régimen de condicionalidad y la relación con la reparación integral.

El enfoque planteado para esta investigación se centró en los aspectos cualitativos y tuvo un alcance descriptivo, exploratorio y proyectivo, lo que a partir de la aplicación de 2 instrumentos de análisis con sus respectivas categorías, permitió la

recolección de datos que tuvieron como unidad de análisis el estudio de la normatividad y jurisprudencia, instrumentos internacionales y el acuerdo de paz, entre lo que se destacan actos legislativos, leyes, jurisprudencia de la Corte Constitucional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tratados internacionales, entre otros.

Lo que nos permitió en materia de hallazgos identificar cuales son las obligaciones que deberán asumir aquellos responsables de conductas no amnistiables que comparecerán a la jurisdicción especial para la paz frente a los derechos de las víctimas del conflicto armado en lo referente a la verdad, justicia, reparación y garantía no repetición, en que consiste el régimen de condicionalidad y los límites señalados por el derecho internacional a la hora de conceder amnistías, indultos y tratamientos especiales, además de dilucidar la relación integral existente entre el régimen de condicionalidad y la obligación que tienen los responsables de conductas no amnistiables comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz de cumplir con la reparación integral de las víctimas.

La aplicación del régimen de condicionalidad, de los tratamientos especiales y de la relación de estos con la obligación de reparar integralmente a las víctimas, en el marco de la implementación de la justicia transicional mediante los mecanismos judiciales y extrajudiciales propios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es un reto de gran relevancia ya que dilucidar su funcionamiento conforme a la normatividad nacional e internacional sobre la materia, permite entender la importancia y papel fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la hora de superar el actual estado de impunidad reinante frente a las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos por los diferentes actores del conflicto armado en las últimas 5 décadas de conflicto armado.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Después de 5 décadas de conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP; y de varios intentos fallidos de ponerle fin por la vía de la solución política y negociada, en el 2012 se instaló oficialmente la mesa de negociaciones de la Habana para abordar una agenda de 6 puntos sobre reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación y verificación¹.

En agosto de 2016, las dos delegaciones anunciaron la clausura de la mesa de negociaciones y la existencia de un acuerdo de paz². Conforme se había definido, el acuerdo debió someterse a refrendación por medio de plebiscito y la guerrilla de las FARC-EP consultó a sus integrantes en la X Conferencia³, máximo órgano de decisión de esa organización. El resultado desfavorable en el plebiscito del 2 de octubre, implicó reabrir la negociación de lo acordado con los sectores que impulsaron el NO en el plebiscito, incluyéndose en el acuerdo importantes modificaciones en los puntos de reforma rural integral, participación política y víctimas⁴. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón en Bogotá, por fin se

¹ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Comunicado conjunto de Gobierno y FARC-EP: acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones. Disponible en: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Documentos%20compartidos/2012/comunicado18octubre12VEsp.pdf> [Con acceso el 25/04/2019].

² OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Comunicado conjunto de Gobierno y FARC-EP: anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo. Disponible en: <http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-firma-acuerdo-final-paz-gobierno-farc-colombia.aspx> [Con acceso el 25/04/2019].

³ FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA. Declaración Política X Conferencia Guerrillera: ¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz! Disponible en: <http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/24/declaracion-politica-x-conferencia-guerrillera-se-acabo-la-guerra-vamos-todos-y-todas-a-construir-la-paz/> [Con acceso el 25/04/2019].

⁴ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Declaración de Humberto de la Calle tras la reunión con voceros del No. Disponible en:

suscribió el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” por el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos Calderón, en representación del Estado colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP⁵.

En el marco de este proceso, el Estado colombiano adelantó esfuerzos para la adecuación de su ordenamiento jurídico a este nuevo reto de superar la violencia y transitar por los caminos de la construcción de la paz estable y duradera, entre los que se destacan la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2012⁶, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, que establece una reforma constitucional para incluir mecanismo judiciales y extrajudiciales de la justicia transicional, siendo objeto de control por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-579 de 2013⁷.

A raíz de las dinámicas de la mesa de negociación de la Habana y de los acuerdos parciales que se iban llegando, especialmente en materia de víctimas y justicia, el gobierno nacional y el congreso de la república, se vieron en la obligación de trascender lo propuesto en un primer momento en el Marco Jurídico para la Paz y tramitar un conjunto de normas más acordes con lo acordado por las partes, entre

<http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/declaracion-humberto-calle-tras-reunion-voceros-no-acuerdo-paz-farc-.aspx> [Con acceso el 25/04/2019].

⁵ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Publicado el 24 de noviembre de 2016. Disponible en: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-yconversaciones/Documentos%20compartidos/24-112016NuevoAcuerdoFinal.pdf> [Con acceso el 25/04/2019].

⁶ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 01 de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1000074> [Con acceso el 25/04/2019].

⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579/13. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 2013. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm> [Con acceso el 25/04/2019].

las que se destacan, el Acto Legislativo 01 de 2016⁸, reforma constitucional para incluir un Procedimiento Legislativo Especial para la Paz con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria, en la sentencia C-699 de 2016⁹ se realizó el estudio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y se declaró su exequibilidad.

Asimismo, se tramitó en el congreso la Ley 1820 de 2016 o Ley de amnistía¹⁰, indulto y tratamientos penales especiales, mecanismo propio de la justicia transicional, donde se fijaron las condiciones para otorgar este tratamiento de justicia y otros equivalentes para quienes hayan cometido delitos susceptibles de dichos tratamientos especiales por causa o con ocasión del conflicto armado, siendo objeto de revisión automático por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-007 de 2018¹¹.

Por otra parte, durante el 2017 se impulsó en el Congreso de la República el Acto Legislativo 01¹² por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de

⁸ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021746> [Con acceso el 25/04/2019].

⁹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699/16. Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa. 2016. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-699-16.htm> [Con acceso el 25/04/2019].

¹⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 25/04/2019].

¹¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007/18. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm> [Con acceso el 25/04/2019].

¹² CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la

la constitución en la Constitución Política, donde se le da rango constitucional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y se contemplan los distintos mecanismos judiciales y extrajudiciales, las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como el régimen de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. La sentencia C-674 de 2017¹³ declaró la exequibilidad de este Acto Legislativo, salvo algunos apartes normativos.

En esta misma ruta, se tramita la ley 1922 de 2019¹⁴ por medio de la cual se adoptan las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, que materializan el mecanismo judicial de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, reglas de procedimiento que permitirán la investigación, el juzgamiento y la sanción de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, además de regular los parámetros que deberán ser utilizados por la Jurisdicción Especial para la Paz para evaluar si se han presentado o no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos acarreen, así como la Ley Estatutaria 1957 de 2019, siendo objeto de control constitucional por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-080 de 2018¹⁵.

construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 25/04/2019].

¹³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-674/17. Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2017. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm> [Con acceso el 25/04/2019].

¹⁴ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1922 de 2018. Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1922_2018.html [Con acceso el 25/04/2019].

¹⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 25/04/2019].

Revisado todo lo anterior, se percibe la importancia del desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional de la implementación del punto 5 de “Víctimas” del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, en especial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales de la justicia transicional, por medio de los cuales se busca lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como que los responsables de conductas no amnistiables comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para que asuman sus responsabilidades, ofrezcan verdad plena y reparen integralmente a las víctimas y cuando esto no se dé conforme al régimen de condicionalidad, sean investigados, juzgados y sancionados, dependiendo de la gradualidad del incumplimiento, por la Jurisdicción Especial para la Paz o por la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación

¿Cómo ha sido la aplicación del régimen de condicionalidad y su relación con la obligación de los responsables de conductas no amnistiables de reparar integralmente a las víctimas en el marco de la aplicación de la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz?

Hipótesis de investigación:

La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz implicó unas adecuaciones de tipo normativo y constitucional del ordenamiento jurídico interno,

donde se debió ponderar la justicia y la paz, sin sacrificar ni la una ni la otra, con el objetivo de transitar de un escenario de conflicto armado hacia un nuevo escenario de construcción de paz, por medio del cual se garantizará el cumplimiento, tanto de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, así como de las obligaciones adquiridas a partir del sometimiento al régimen de condicionalidad por parte de los responsables comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz por sus conductas no amnistiables, su cumplimiento o no, determinará que estos gocen o no de los tratamientos especiales en el marco de la justicia transicional, teniendo como límites los impuestos por el derecho internacional, tales como las prohibiciones de amnistiar graves violaciones a los DDHH, crímenes de guerra y lesa humanidad; la obligación de reparar integralmente a las víctimas; así como el deber estatal de investigar, juzgar, sancionar, entre otros.

2. JUSTIFICACIÓN

La firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” implica la implementación y puesta en marcha del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, el cual llevará necesariamente a la aplicación de la justicia transicional en sus diferentes mecanismos extrajudiciales y judiciales como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta nueva jurisdicción transicional, implica un nuevo paradigma para la administración de justicia, tanto para la magistratura, como para quienes acudan ante esta, en la calidad que fuere, ya que al tener como centro los derechos de las víctimas, se propone la humanización real del proceso penal, garantizado un equilibrio adecuado entre las necesidades y los intereses de las víctimas, garantizar plenamente los derechos de los actores partícipes de la confrontación armada, así como del respeto de los instrumentos y compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de DDHH y DIH. Igualmente se pretende superar la estrecha mirada de la aplicación de justicia como sanción y confinamiento en cárceles ordinarias, lo que contempla la aplicación de medidas de alternatividad penal, las cuales irían de la mano de las acciones destinadas a la búsqueda de la verdad, la reparación y la reconstrucción de los tejidos sociales destruidos en los territorios a razón del conflicto, lo que evidencia que este enfoque sobre la justicia no se agotaría en los recintos judiciales, magistrados y abogados en ejercicio, es decir, el ejercicio social y comunitario que brindan estos instrumentos, contribuirán a la socialización y democratización al acceso a la justicia.

De lo anterior se desprende la necesidad de conocer a profundidad, no solo por parte de la comunidad jurídica, sino por la sociedad en su conjunto, las

implicaciones de la existencia y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, de ahí la importancia de poder contar con los fundamentos legales, jurisprudenciales y constitucionales que estructuran y guiaran la administración de justicia transicional en lo concerniente a la investigación, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado, que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.; brindar esos elementos, es en últimas, lo que pretendemos con el presente trabajo de grado.

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Analizar el régimen de condicionalidad y su relación con la obligación de los responsables de conductas no amnistiabiles de reparar integralmente a las víctimas en el marco de la aplicación de la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar las conductas no amnistiabiles y los límites impuestos por el derecho internacional en la aplicación de la justicia transicional.
- Establecer en que consiste el régimen de condicionalidad aplicable a los responsables de conductas no amnistiabiles que comparecen a la jurisdicción especial para la paz.
- Identificar las obligaciones que asumen los responsables de conductas no amnistiabiles que comparecen a la jurisdicción especial para la paz frente a la reparación integral de las víctimas.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO HISTÓRICO

Desde los primeros intentos de constitución y consolidación de un Estado-nación en nuestro país durante el siglo XIX, nuestra historia ha estado atravesada por una serie de conflictos políticos, sociales, económicos y culturales, que han sido resueltos en la mayoría de ocasiones en términos bélicos¹⁶. Dan cuenta de lo anterior, las numerosas guerras civiles, tanto de orden nacional como regional, que se presentaron en la segunda mitad del siglo XIX en el territorio nacional, originadas por múltiples causas, tales como, la abolición de la esclavitud, el papel de la iglesia, la forma del Estado y su régimen político (Centralismo-Federalismo), la defensa de la producción nacional frente a la apertura mercantil, entre otras¹⁷. Guerras civiles que abrirían el siglo XX con la que sería una de las más importantes confrontaciones bélicas en costos humanos y materiales, entre ellos la pérdida de Panamá, como lo fue la “Guerra de los mil días”. A la par de cada una de estos conflictos armados internos, también se iba desarrollando en el país una tradición de armisticios, amnistías e indultos, que buscaban ponerle fin a la confrontación, así como la de realizar cambios constitucionales, con la intención de realizar transformaciones político-sociales que permitieran la superación de las causas generadores de la violencia¹⁸.

Para ejemplificar lo señalado anteriormente, se pueden señalar las amnistías e indultos que se dieron durante la etapa de guerras civiles del siglo XIX y principios

¹⁶ ARIAS MEJIA, Juan Camilo. Entre la sangre de las armas y los gritos en la plaza. Una breve mirada al conflicto colombiano. En: Revista Kabái, número 17. Universidad Nacional De Colombia. Medellín. Pág. 33. 2008.

¹⁷ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Pág. 25. 1993.

¹⁸ AGUILERA PEÑA, Mario. Refundemos la Nación: Perdonemos a delincuentes Políticos y comunes. En: Revista Análisis Político, número 76. Bogotá, Págs. 5-40. 2012.

del XX, tales como el indulto concedido en 1819¹⁹ por el Congreso de Angostura para los responsables de delitos comunes y políticos, presos o arrestados en las cárceles públicas o cuarteles y a todos los desertores del ejército de la república y los españoles europeos que además conservarán sus distinciones y clases; El indulto concedido en 1854²⁰ por José María Melo. Jefe del Gobierno Provisorio, durante la República artesana, a todos los miembros del ejército o particulares del bando de los Gólgotas que enfrentaron su mandato; o el indulto concedido durante los primeros años del siglo XX, por la Asamblea Constituyente y Legislativa, que aprobó la Ley 27 de 1907 que suspendía “la pena ó la acción criminal á que se hayan hecho creedores los militares que al servicio del Gobierno ó de la revolución hayan cometido delitos comunes ó políticos en las últimas guerras civiles”²¹.

En la década del 20 del siglo XX, con los últimos años de la hegemonía conservadora y con el regreso al poder del liberalismo a partir de 1930, se hacen más visibles dos factores claves que se asocian, hasta la fecha, a los diferentes ciclos de violencia que se han desarrollado en nuestro país: el control sobre la tierra y sobre el Estado. El auge de luchas agrarias, el surgimiento de organizaciones sociales y políticas inspiradas por la ideología socialista, así como una serie de reformas impulsadas por el partido liberal en el poder, generaron una respuesta violenta del partido conservador en muchas regiones del país, lo que desencadenaría un periodo que ha sido denominado como “La Violencia”, el sociólogo e investigador Alfredo Molano, señala que este periodo inicia en 1925 y va hasta 1955, teniendo como punto álgido el año 1946, en el cual la violencia en los campos se generaliza. El 7 de febrero de 1948 Jorge Eliecer Gaitán organizó la “Marcha del silencio” para denunciar las masacres de campesinos liberales y pedir el cese de la violencia oficial, congregando a cien mil ciudadanos en la plaza de

¹⁹ Ibid. Pág. 12.

²⁰ Ibid. Pág. 13.

²¹ ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LEGISLATIVA. Ley 27 de 1907. Por la cual se declaran prescritas ciertas penas. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1787317> [Con acceso el 25/04/2019].

Bolívar de Bogotá, meses después, el 9 de abril de 1948, es asesinado Jorge Eliecer Gaitán, lo que generaría un levantamiento popular conocido como “el Bogotazo”, donde según cifras de la época, entre 2500 a 4000 personas fallecieron a causa de la asonada. En otras regiones del país se replicó la respuesta popular ante el asesinato del candidato presidencial, en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Ibagué, entre otras, los acontecimientos fueron casi tan violentos como en la capital, incluso en Barrancabermeja, ciudad petrolera con fuerte presencia del movimiento obrero sindical, se organizó la “Comuna de Barranca” durante 14 días²².

Por su parte el profesor investigador Darío Fajardo Montaña²³, señala que a partir de 1949 la confrontación bipartidista llegó a su punto más crítico con el desconocimiento por parte del ejecutivo de la victoria del partido liberal en las elecciones, sumado a la persecución desatada meses atrás en campos y ciudades contra los seguidores de Gaitán, lo que profundizaría la violencia que se extendió a varias regiones del país, principalmente Valle, Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá, Santanderes y Cundinamarca. Fajardo Montaña señala que:

“Esta etapa de expansión de las acciones represivas habrían de llevar a la crisis política de finales de la década y comienzos de la de 1950, en las cuales confluían las expulsiones de campesinos y el exterminio de los opositores, en particular, de las filas gaitanistas. Estas acciones así como la profundización de la confrontación entre los partidos por la hegemonía en el control del Estado condujeron a una situación política inédita en la cual ya no se trataba de una “guerra entre las élites” a semejanza de las ocurridas en el siglo XIX sino a un escenario en el que el Estado confrontaba la resistencia cada vez más organizada y masiva de sectores populares”²⁴.

²² MOLANO BRAVO, Alfredo. Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. Págs. 151-202. 2015.

²³ FAJARDO MONTAÑA, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. Págs. 95-149. 2015.

²⁴ FAJARDO MONTAÑA, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En: Conflicto social y

Es decir, la masificación, fortalecimiento y organización de núcleos de civiles armados, la mayoría con filiación liberal pero también otros con influencias del partido comunista, que asumieron la resistencia armada frente a las agresiones oficiales y de grupos paramilitares conocidos como “pájaros” y “chulavitas”, fundamentalmente en el sur y el oriente de país, y sus propósitos programáticos y demandas relacionadas con la cuestión agraria²⁵, constituyó un riesgo para la dominación, lo que obligó a las elites de los dos partidos, a pactar el golpe militar de Rojas Pinilla del 13 de junio de 1953, con el objetivo de lograr la pacificación: “La entrega de las guerrillas a cambio de meras garantías políticas fue masiva y rápida. En seis meses sólo quedaban resquicios armados en el sur de Tolima y Sumapaz, grupos influidos por el Partido Comunista, que desconfiaba del jefe Supremo de las Fuerzas Armadas por sus tendencias conservadoras”²⁶.

Este periodo conocido como “la Violencia”, no fue ajeno a los procesos de diálogo y negociación, ni a las amnistías e indultos, durante el régimen militar del General Rojas Pinilla, fueron cobijados por estos instrumentos jurídicos tanto las fuerzas armadas como los civiles. Es el caso del decreto 2184 del 21 de agosto de 1953 que concedió una: “amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas procesados o condenados por Consejos de Guerra Verbales, con anterioridad al 9 de abril de 1948, como responsables de delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, y los conexos que se hubieren cometido, con ocasión o motivo de los primeros”²⁷. A los beneficiarios se les reconoció el derecho

rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. Pág. 116. 2015.

²⁵ BOLAÑOS ALCANTARA, José Víctor. Problema agrario y lucha armada en Colombia: El caso de las FARC-EP. Universidad Nacional Autónoma De México. Pág. 22. 2018.

²⁶ MOLANO BRAVO, Alfredo. Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. Pág. 176. 2015.

²⁷ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto-Ley 2184 de 1953. Por el cual se concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas. Disponible en: [http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dli/Decretos/1414889?fn=document-frame.htm\\$f=templates\\$3.0](http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dli/Decretos/1414889?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0) [Con acceso el 24/04/2019].

a recuperar los grados militares y a devengar los salarios dejados de pagar desde el momento de la condena. Fueron excluidos los militares desertores y a quienes se les comprobara que habían combatido contra las fuerzas armadas, tampoco cobijaba a los responsables de delitos atroces.

Frente a la amnistía a civiles, esta se dividió en dos etapas, la primera se centró en un proceso de diálogo y negociación con cada uno de los grupos alzados en armas con el fin de lograr su desarme, desmovilización y reincorporación, luego el gobierno en la segunda etapa les concedería un año más tarde la amnistía²⁸.

Se llevaron procesos de diálogo, negociación y entrega en los llanos orientales, Antioquia, Tolima, Tequendama y Sumapaz, con resultados dispares ya que influyó en su desarrollo el grado de organización militar y orientación política de cada grupo, lo que si fue homogéneo fue el incumplimiento y desconocimiento de lo acordado, el asesinato a los guerrilleros desmovilizados como el de Guadalupe Salcedo el 1 de junio de 1957, el de Jacobo Prias Alape y Hermógenes Vargas en 1960, el encarcelamiento y posterior asesinato del “Capitán Franco” en Medellín en 1957, la declaración del Sumapaz como “zona de operaciones militares”, el surgimiento de grupos paramilitares como los “contrachusmas”, las “guerrillas de paz” o los “pájaros”, no permitió que cesara el conflicto armado²⁹.

En la segunda etapa de pacificación consistente en la implementación de una amnistía a civiles, el Decreto-Ley 1823 del 13 de junio de 1954, concedió “amnistía para los delitos políticos cometidos con anterioridad al 1 de enero del presente año” entendiendo por delitos políticos “todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al Gobierno, o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a este, o por aversión o sectarismo

²⁸ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Págs. 33-56. 1993.

²⁹ SANCHEZ GÓMEZ, Gonzalo. Raíces históricas de la amnistía o de las etapas de la guerra en Colombia. En: Ensayos de historia social y política del siglo XX. Bogotá. El Ancora. Pág. 275. 1985.

políticos”³⁰. La amnistía del 54 beneficio en primer lugar a los ciudadanos colombianos responsables de la ejecución de delitos políticos, En segundo lugar, a los alzados en armas contra el gobierno, así como a los integrantes de grupos paramilitares denominados en la época como “chulavitas” y “guerrillas de paz”, por ultimo a las guerrillas comunistas, que no se acogieron a la amnistía. La condición para beneficiarse de la amnistía era la entrega de las armas, requisito cumplido por la mayoría de los alzados en armas el año anterior. En esta amnistía también se excluyeron los delitos considerados como atroces. La calificación del delito entre político o atroz le correspondió al Tribunal Superior Militar, lo que resulto arbitrario ya que la interpretación resultaba bastante subjetiva. El profesor investigador Eduardo Umaña Luna afirma “que pudieron ser 20.000 los detenidos, entre procesados y condenados, liberados gracias a la amnistía”.

El fin de “la Violencia” y la pacificación del General Rojas Pinilla no implico la paz y la concordia en el territorio nacional, sino la transformación de los nuevos conflictos armados, con algunas continuidades de la etapa anterior como la cuestión agraria pero también con algunas discontinuidades como el surgimiento de grupos guerrilleros de carácter socialista-comunista con el objetivo de la toma del poder y el derrocamiento del orden constitucional y legal vigente en ese momento. A las causas señaladas anteriormente como origen de la violencia, se suman en este periodo el pacto político entre las elites de los partidos conservador y liberal, conocido como “Frente Nacional” que implico la repartición del botín burocrático y la alternancia en los diferentes niveles del poder público, lo que implicó la exclusión política de importantes sectores de la sociedad colombiana y por ende, un cerramiento democrático. Así mismo, un contexto internacional convulsionado a partir de los diferentes procesos de descolonización del tercer mundo y de las luchas de liberación nacional y social, como es el caso del triunfo de la revolución cubana,

³⁰ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto-Ley 18234 de 1954. Por el cual se conceden amnistía e indulto por los delitos políticos cometidos hasta la fecha, y una rebaja de pena. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1356824> [Con acceso el 24/04/2019].

genero las condiciones para el desarrollo y persistencia de este nuevo periodo de conflicto armado que hasta la fecha sigue vigente³¹.

En 1964, a raíz de las operaciones militares contra lo que fue denominado por el senador Álvaro Gómez Hurtado como “repúblicas independientes” de El Pato, Riochiquito, Marquetalia, entre otras, el 27 de mayo de ese año, se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia -FARC-³²; el 7 de enero de 1965, un grupo de estudiantes, intelectuales y campesinos se toman Simacota, Santander, anunciando la creación de lo que sería el Ejército de Liberación Nacional -ELN-³³; por su parte, sectores provenientes de una escisión del Partido Comunista Colombiano, organizados posterior a la ruptura en el Partido Comunista de Colombia (M-L) fundan el 17 de julio de 1967 el Ejército Popular de Liberación -EPL-³⁴; Por su parte, como consecuencia del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 entre Misael Pastrana y Rojas Pinilla, sectores radicalizados del movimiento Alianza Nacional Popular -ANAPO-, partido político de Rojas Pinilla, organizan una guerrilla urbana que se da a conocer el 17 de enero de 1974 con la toma de la Quinta de Bolívar en Bogotá y el robo de su espada³⁵. Se referencian estos 4 grupos por su importancia en la vida política y por sus alcances militares, sin obviar que también existieron en el país otros grupos, como el Movimiento Quintín Lame, la Autodefensa obrera -ADO- o el Partido Revolucionario de Trabajadores de Colombia -PRT-, entre muchos otros³⁶.

³¹ VEGA CANTOR, Renán. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. Págs. 373-442. 2015.

³² MEDINA GALLEGU, Carlos. FARC-EP Notas para una historia política (1958-2008). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 67-78. 2009.

³³ MEDINA GALLEGU, Carlos. FARC-EP Y ELN Una historia política comparada (1958-2006). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 170-218. 2010.

³⁴ CALVO OCAMPO, Fabiola. EPL Diez hombres, un ejército, una historia. Ecoe Ediciones. Bogotá. Pág. 25. 1985.

³⁵ NARVÁEZ JAIMES, Ginneth Esmeralda. La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 97-98. 2012. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/9917/1/468440.2012.pdf> [Con acceso el 24/04/2019].

³⁶ Véase el Centro de Documentación de los Movimientos Armados de América Latina. Disponible en: <http://www.cedema.org/index.php?ver=mostrar&pais=7&nombrepais=Colombia> [Con acceso el 24/04/2019].

La lucha armada de estos grupos se fue desarrollando entre flujos y reflujos durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX, a la par del crecimiento de la protesta urbana y del descontento popular generado por las políticas económicas y la exclusión política, lo que nos ubica en la administración del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). El resurgimiento de las huelgas, los paros cívicos, el auge de las acciones político-militares de las guerrillas, así como la fuerte respuesta represiva y legal del gobierno, enmarcada en lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad³⁷ y de la aplicación permanente del estado de sitio, recurso contemplado en el artículo 121 de la Constitución Nacional³⁸, significó una masiva persecución contra la oposición, la judicialización y criminalización de la protesta social, el aumento de los presos por delitos políticos, las desapariciones, torturas y asesinatos³⁹.

Durante este convulsionado periodo, a pesar de la profundización y generalización del conflicto armado interno, se empieza a discutir por primera vez una salida diferente a la solución militar, igualmente desde la sociedad civil se impulsaron iniciativas como el primer “Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas” celebrado en Bogotá durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1.979, que dio lugar a la creación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH-, con el objetivo de la defensa y

³⁷ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1923 de 1978. Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1870140> [Con acceso el 24/04/2019].

³⁸ Véase la Constitución Política de la Republica De Colombia de 1986. Disponible en: <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153> [Con acceso el 24/04/2019].

³⁹ GRUPO MEMORIA HISTORIA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Imprenta Nacional. Bogotá. Págs. 59,131-135, 200, 207-210. 2013. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf> [Con acceso el 24/04/2019].

promoción de los derechos humanos en el país⁴⁰. Es así como desde las acciones políticas y militares del M-19, en especial la que se conoce como la toma de la embajada de la Republica Dominicana, se lanza la propuesta de un “El Gran Dialogo Nacional” para buscar la paz. Entre las exigencias de esta guerrilla para liberar a los embajadores retenidos, estaba la de una amnistía incondicional de todos los presos políticos. Luego del desalojo pacífico de la embajada, el gobierno presentó el 23 de julio de 1980 el proyecto de ley 01 por el cual se otorgaría a los grupos guerrilleros una amnistía por sus delitos políticos, pero no sería incondicional y excluiría la mayoría de los delitos conexos a los políticos.

Por su parte, en el parlamento también se impulsó un proyecto alternativo al gubernamental derivado de las propuestas presentadas por el segundo foro por los derechos humanos que propuso una amnistía condicional para todos los responsables de delitos políticos, incluso para quienes encontrasen fuera del país. Un tercer proyecto ofrecía amnistía para los delitos de rebelión, sedición y asonada y los conexos con estos excepto los delitos de secuestro, extorsión, contra las mujeres y menores, Etc. Como conclusión de este debate, se aprobó la Ley 37 del 23 de marzo de 1981⁴¹, por la cual el estado concedía una amnistía condicional por delitos políticos. Se cobijaba a los responsables de delitos de rebelión, sedición y asonada y sus conexos con este, exceptuando el secuestro, la extorsión, homicidio fuera de combate y en general con cualquier acto de ferocidad o barbarie. La ley era dirigida para los guerrilleros en armas que debían entregarse individualmente o en grupo ante las autoridades, ante quien deberían suscribir un acto reconociendo sus delitos. Frente a los presos por delitos políticos, solo sí el gobierno consideraba que la ley producía resultados positivos, se extenderían sus beneficios a estos. Las organizaciones guerrilleras rechazaron la amnistía ya que estaba diseñada para

⁴⁰ COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Historia del CPDH. Disponible en: <https://www.comitepermanente.org/index.php/quienes-somos/historia> [Con acceso el 25/04/2019].

⁴¹ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 37 DE 1981. Por la cual se declara una amnistía condicional. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1593156> [Con acceso el 25/04/2019].

unas guerrilleras derrotadas, que no era el caso, y no facilitaba una solución dialogada y negociada del conflicto. Durante el último año de mandato, el 19 de febrero de 1982, mediante el Decreto-Ley 474 del 19 de febrero de 1982⁴², el presidente Turbay ofreció la suspensión de actividades militares por 30 días y un indulto para quienes se entregara, el cual fue rechazado. El fin de la administración del presidente Turbay Ayala y sus resultados, obligó el cambio de estrategia gubernamental de las próximas administraciones frente al conflicto armado y la paz.

La presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) estaría marcada por la búsqueda de la paz, reconocería “la existencia de unas causas objetivas y otras subjetivas de la violencia”⁴³. Las primeras exigirían acabar con la pobreza y las segundas, la creación de clima favorable de concertación y de apertura democrática. En este periodo presidencial se impulsan diferentes estrategias para abrir escenarios de diálogo y negociación como la comisión de paz, la aplicación de una amplia e incondicional amnistía y la tregua bilateral. A pesar de los tímidos avances, el conflicto armado seguía desarrollándose con sus altos costos humanos y materiales, en este punto surge un nuevo actor contrainsurgente que entraría a participar del conflicto armado, impulsado bajo la coordinación del Estado, por ganaderos, políticos, militares y narcotraficantes, asumiría diferentes nombres, entre los más conocidos en ese periodo Muerte a Secuestradores -MAS-. Durante ese periodo las FARC-EP suscriben el acuerdo de tregua de la Uribe, Meta⁴⁴. El M-19 y el EPL, hicieron lo mismo en Corinto, Cauca y en Medellín, Antioquia, respectivamente⁴⁵. Igualmente otros sectores también suscribieron acuerdos de tregua. Estos acuerdos permitieron un debate permanente en el seno de la sociedad

⁴² PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 474 DE 1982. Por el cual se dictan medidas tendientes al pronto restablecimiento del orden público interno. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1104313> [Con acceso el 25/04/2019].

⁴³ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Págs. 87-88. 1993.

⁴⁴ ARANGO ZULUAGA, Carlos. FARC Veinte años: De Marquetalia a la Uribe. Ediciones Aurora. Bogotá. Págs. 279-283. 2016.

⁴⁵ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Págs. 118-121. 1993.

sobre la necesidad de ponerle fin al conflicto armado interno y de solucionar las causas que lo generaron, a la par surgieron del seno de las organizaciones guerrilleras y de los sectores comprometidos con la paz, movimientos políticos tales como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A luchar, quienes lograron importante protagonismo y participación de la vida política y social del país. La ofensiva oficial y paramilitar contra estos grupos no se hizo esperar, son conocidas las cifras sobre el alto número de víctimas de homicidio, desaparición, tortura, etc., que padecieron⁴⁶.

En este periodo fue sancionada la Ley 35 de 1982⁴⁷ que otorgó perdón y olvido, automática e incondicionalmente, para todos los alzados en armas y la cesación de todo procedimiento judicial con la consecuente libertad inmediata para todos los presos políticos. Cobijó a todos los responsables de delitos políticos y conexos con ellos excepto cuando se tratara de homicidios cometidos fuera de combate o delitos atroces ejecutados con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión. Esta ley buscaba también la reinserción de los exguerrilleros a la vida civil y económica del país lo que implicaba ofrecerles una serie de programas sociales. Como un reimpulso en la búsqueda de la paz, se aprobó la Ley 49 de 1985⁴⁸ por la cual se autorizó al presidente de conceder un indulto a quienes hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o estuvieren siendo procesados o requeridos por la justicia por delitos políticos, igualmente se exceptuaron el secuestro, la extorsión y el homicidio fuera de combate, además se exigía el compromiso de no retornar a la lucha armada.

⁴⁶ ROMERO OSPINA, Roberto. Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bogotá. Págs. 127-140. 2012.

⁴⁷ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 35 de 1982. Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525> [Con acceso el 25/04/2019].

⁴⁸ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 40 de 1985. Por la cual se concede una autorización al Presidente de la República, se regula el ejercicio de la facultad de conceder indultos y se dictan otras disposiciones. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1603446> [Con acceso el 25/04/2019].

La administración de Virgilio Barco (1986-1990) estuvo entre el recrudecimiento del conflicto armado, la ruptura de las treguas, la violencia contra la oposición política y los sectores democráticos, así como por nuevos intentos de dialogo, negociaciones e indultos, que permitieron al finalizar el mandato la firma del acuerdo de paz que significo la desmovilización del M-19⁴⁹ y las bases para la posterior desmovilización del EPL, Quintín Lame y PRT, durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994)⁵⁰.

Se aprobó la ley 77 de 1989⁵¹ que autorizó al presidente a conceder indulto a todos los miembros de organizaciones guerrilleras que manifestaran su voluntad de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil independientemente de que su organización estuviera o no vinculada al proceso de paz. La única condición era pertenecer a un grupo guerrillero. En esta ley se mantuvo la tradición de excluir del indulto, las conductas que significaran actos de sevicia, ferocidad o barbarie. En la administración de Gaviria expidió el Decreto 213 de 1991⁵² cobijó los delitos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, y los conexos con estos, cometidos antes del 22 de enero de 1991, beneficiando a los militantes de las guerrillas que se desmovilizarían en ese periodo, los beneficiados debían demostrar su deseo de reincorporarse a la vida civil y comprometerse a responder por los perjuicios causados a particulares.

⁴⁹ NARVÁEZ JAIMES, Ginneth Esmeralda. La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 117-129. 2012. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/9917/1/468440.2012.pdf> [Con acceso el 24/04/2019].

⁵⁰ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Pág. 157. 1993.

⁵¹ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 77 de 1989. por la cual se faculta al Presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1624153> [Con acceso el 25/04/2019].

⁵² PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 213 de 1991. Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1048146> [Con acceso el 25/04/2019].

Los procesos de paz de inicios de la década del 90, las desmovilizaciones del M-19, EPL, PRT y Quintín Lame, la Asamblea Nacional Constituyente, la promulgación de la Constitución Política de 1991, no se tradujeron en el fin del conflicto armado interno, los años siguientes estuvieron marcados por la persistencia de la violencia, el incremento de las víctimas del conflicto armado y de una apuesta por la salida militar, a pesar de los intentos de diálogo y negociación política de Tlaxcala⁵³ durante el año 1993 y los sostenidos por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) en el Caguán⁵⁴, que fracasaron, solo fue posible y después de cerca de 5 años de discusiones que se desarrollaron durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), lograr en octubre de 2016 la firma de un nuevo acuerdo de paz para el fin del conflicto armado interno con las FARC-EP, que implicó la construcción de una nueva institucionalidad en materia de justicia y víctimas, para que los diferentes responsables de conductas delictivas cometidas en el desarrollo del conflicto armado, comparezcan y ofrezcan verdad, reparen a sus víctimas, asuman las respectivas sanciones y se comprometan con la no repetición. Nuevamente se acudió a instrumentos jurídicos como la amnistía y el indulto, con la novedad de un amplio Sistema Integral de Víctimas, que tiene los derechos y a las víctimas mismas, como centro, cuestión obviada históricamente de los anteriores intentos de paz que se han dado en el país.

4.2 MARCO TEÓRICO

Los orígenes de la justicia transicional moderna, según Ruti G. Teitel⁵⁵, se remontan a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la justicia transicional comienza a ser entendida como extraordinaria e internacional en el período de la posguerra

⁵³ ARANGO ZULUAGA, Carlos. Los diálogos de paz: De Cravo Norte a Tlaxcala. Bogotá. Págs. 286. 1992.

⁵⁴ MEDINA GALLEGOS, Carlos. FARC-EP Notas para una historia política (1958-2008). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 172-175. 2009.

⁵⁵ TEITEL, Ruti. Genealogía de la Justicia Transicional, Harvard Human Rights Journal, Cambridge. 2003.

después de 1945, a partir de la apertura de los procesos de Núremberg. Ruti G.Teitel⁵⁶ clasifica en tres fases el desarrollo de la justicia transición, la primera la denominada como fase de la posguerra, la segunda fase o fase de la posguerra fría, se asocia con la ola de transiciones hacia la democracia y modernización que comenzó en la década de 1980 a 1990, que se caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. La tercera fase, o estado estable, de la justicia transicional, está asociada con las condiciones contemporáneas de conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho de la violencia, es decir, la justicia transicional se traslada desde la excepción de la norma, para convertirse en un paradigma del estado de derecho⁵⁷.

Para Paul Van Zyl, la justicia transicional puede entenderse como:

“El esfuerzo por construir una paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los Derechos Humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio los perpetradores, revelar la verdad acerca de los crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación. Lo anterior exige un conjunto incluyente de estrategias diseñadas para enfrentar el pasado así como para mirar hacia el futuro con el fin de evitar la recurrencia del conflicto y las violaciones. Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de la justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.⁵⁸

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ VAN ZYL, Paul. Promoviendo la justicia transicional en sociedades post conflicto. En Justicia transicional: manual para América Latina / Editor Félix Reátegui. Brasília: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia transicional. 2011.

Lo anterior se enmarca perfectamente y describe en términos generales la tarea que surgió a raíz del acuerdo de paz y de su componente integral de justicia, que implicó para el Estado colombiano, poner en marcha una serie de adecuaciones constitucionales, legales e institucionales para así situarse en el camino de superar el conflicto armado interno y transitar hacia la construcción de paz. Este enfoque de la justicia transicional, como el escenario propicio para la superación de la violencia y de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, superándola mediante la lucha contra la impunidad, garantizando los derechos de las víctimas, así como respetando las exigencias de justicia, permitirá entender el estudio de lo concerniente a un régimen de condicionalidad para los responsables de los delitos cometidos en el conflicto interno, y la relación de este con la reparación integral de las víctimas, como una herramienta que brinde elementos jurídicos para superar la persistente tensión que surge a raíz de este tipo de escenarios de dialogo y de aplicación de mecanismos y medidas transicionales, entre el derecho a la paz y el derecho a la justicia, superación que debe ser favorable a los interés de las víctimas y de los fines constitucionales de concreción de la paz y la reconciliación nacional.

Las obligaciones que se asumen cada uno de los responsables de delitos presentados en el marco del conflicto armado interno, a la hora de asumir un compromiso ante la jurisdicción para la Paz, tales como ofrecer verdad plena, reparar integralmente a las víctimas o comprometerse con la no repetición, en palabras de Pablo De Greiff, “lejos de ser componentes de una lista al azar, estas medidas son partes de la justicia transicional en virtud de compartir dos objetivos o fines “mediatos”, a saber, proporcionar reconocimiento a las víctimas y promover la confianza cívica”.⁵⁹ Es decir, que todo esfuerzo que se realiza en un proceso transicional debe tener en el centro a las víctimas y sus derechos, ya que superando

⁵⁹ DE GREIFF, Pablo. “Theorizing Transitional Justice”, *Transitional Justice*. Nomos vol. LI. New York University Pres. 2012.

ese estado marcado por la impunidad, invisibilidad de estas y la inexistencia de reparación de los daños, se pueden avanzar en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la justicia, es por ello que clarificar y visibilizar la relación existente entre la reparación integral de las víctimas y las obligaciones a las que se someten quienes comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es de suma importancia.

En el mismo sentido, Kai Ambos señala que el éxito de un proceso de justicia transicional:

“Depende del grado en que contribuya a la verdadera reconciliación y a la consolidación de la democracia y del sistema judicial interno. La experiencia muestra que la lucha por la justicia a menudo confluye con los esfuerzos, en su mayor parte oficiales, por la paz. En efecto, la justicia de transición busca asegurar al mismo tiempo justicia y paz, pero abstenerse de una persecución penal y/o del castigo es a veces necesario para facilitar una transición pacífica, y el dictado de una amnistía es la técnica más importante de exención de una persecución penal. En todo caso, si la ausencia de una persecución penal contribuye a la reconciliación, ello depende del contenido de este concepto y de las circunstancias de cada caso”.⁶⁰

De lo anterior, se infiere nuevamente la necesaria superación de la tensión existente entre paz y justicia, lo que obliga a brindar mediante esta investigación, claridades de lo que se debe entender cuando se acude a instrumentos jurídicos que implican, por ejemplo, amnistiar a responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno, y que esto no se traduzca en ausencia de justicia y de privilegiar la impunidad, sino como esfuerzos encaminados a la superación de un escenario de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, aplicando un paradigma distinto al aplicado en la jurisdicción ordinaria, en el cual se

⁶⁰ AMBOS, Kai. Justicia de Transición. Bogotá, Temis. 2010.

deberá superar esa asimilación tan generalizada de justicia como sinónimo de cárcel o castigo.

4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 Internacional

El Derecho Internacional impone la obligación a los Estados de investigar las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, así como de juzgar y sancionar a los autores y demás partícipes de estos crímenes. Estas obligaciones están consagradas expresamente en numerosos tratados de derechos humanos y otros instrumentos internacionales, algunos de ellos serán abordados en esta investigación.

El *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*⁶¹ tienen por objeto servir de directrices para ayudar a los Estados a elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad. En este compendio de principios encontramos una serie de definiciones claves para el desarrollo de esta investigación, en donde señala que se debe entender la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria”⁶², es decir, como la ausencia de requerimientos, investigaciones o procesamiento por parte del ente encargado por el Estado para este fin, así como en el caso de existir una sentencia ejecutoriada donde se señale la responsabilidad, no existan condenas ajustadas con los

⁶¹ COMISIÓN DERECHOS HUMANOS ONU. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=e/cn.4/2005/102/add.1 [Con acceso el 25/04/2019].

⁶² Ibid. Pág. 6.

estándares internacionales ni la reparación de los perjuicios causados a particulares.

Igualmente, frente a las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, se deben entender como los contenidos en “los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977”⁶³, entre los que se destacan la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.

Asimismo, señala la obligación de todo esfuerzo que busque el restablecimiento de la paz o de su transición sobre ella “las partes interesadas conviene en tomar medidas contra la impunidad y la repetición”⁶⁴.

Este catálogo de principios es una herramienta fundamental en lo concerniente a la reparación integral de las víctimas, especialmente en lo referente al derecho a la verdad, entendida como una salvaguarda fundamental contra la repetición de las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra.

Frente a la consideración de los amnistías, señala una serie de restricciones que se deben tener en cuenta a la hora de acudir a este instrumento jurídico, incluso cuanto se busque con esta generar las condiciones propicias para concretar la paz y avanzar en la reconciliación, los derechos a las víctimas no pueden ser

⁶³ Ibid. Pág. 6.

⁶⁴ Ibid. Pág. 6.

desconocidos, en el mismo sentido, se excluyen de este recurso a los “autores de delitos graves conforme al derecho internacional”⁶⁵.

Frente a la reparación este instrumento es claro en señalar que toda violación a un derecho humano genera un derecho para las víctimas, creándose la obligación “del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”⁶⁶. Es por ello, que se le deberá garantizar a la víctima en todo momento el acceso a los recursos e instrumentos para hacer exigible su derecho. El ámbito de la reparación comprenderá “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”⁶⁷.

Por su parte, la Resolución 60/147⁶⁸ aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 conocida como *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* nos ofrece unos elementos clave en lo referente a la definición de víctimas, los derechos de las víctimas, la responsabilidad internacional y obligación del Estado en las áreas de prevención, investigación, pena, recursos y reparación.

Esta resolución es reiterativa en señalar que en los casos de graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, los “Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas

⁶⁵ Ibid. Pág. 14.

⁶⁶ Ibid. Pág. 17.

⁶⁷ Ibid. Pág. 17.

⁶⁸ ASAMBLEA GENERAL ONU. Resolución 60/147 de diciembre de 2005. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx> [Con acceso el 25/04/2019].

suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas”⁶⁹. Además, señala en concordancia con lo expuesto anteriormente, que las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, deberán gozar de “acceso igual y efectivo a la justicia; reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”⁷⁰.

El *Estatuto de Roma*⁷¹ consagra en su artículo 5 su competencia y los crímenes calificados como “más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”, en los que se señala los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y el crimen de genocidio. En los artículos 6, 7 y 8, el Estatuto, profundiza y desmenuza, una a una las conductas propias de cada crimen, lo que nos permite identificar, cuáles son esas conductas calificables por el derecho internacional como no amnistiabiles.

Por otra parte, la *Convención Americana Sobre Derechos Humanos*⁷² en su artículo 63, determina el fundamento convencional para establecer la obligación estatal de la reparación integral, la Corte cuando determine que se lesione un derecho o libertad, mandatará “que se reparen las consecuencias de la medida o situación que

⁶⁹ Ibid. Pág. 5.

⁷⁰ Ibid. Pág. 6.

⁷¹ CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html [Con acceso el 25/04/2019].

⁷² CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm [Con acceso el 25/04/2019].

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”⁷³.

Es significativo en este apartado referenciar dos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como los son los casos conocidos como Caso Barrios Altos vs. Perú⁷⁴, con sentencia de 14 de marzo de 2001, y el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador⁷⁵, con sentencia de 25 de octubre de 2012, en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia la aplicación de leyes de amnistía, la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, así como de la exclusión de responsables de graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, de amnistías e indultos.

En el Caso Barrios Altos vs. Perú, la Corte IDH es clara en señalar la incompatibilidad de leyes de amnistía con la convención, en el sentido que al concederle a responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, beneficios judiciales que impidan la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, así como el acceso a la justicia, conocer la verdad y la reparación de las víctimas, se incurre por parte de los Estados en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

⁷³ Ibid. Pág. 18.

⁷⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf [Con acceso el 25/04/2019].

⁷⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf [Con acceso el 25/04/2019].

Por su parte, el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, reitera la línea jurisprudencial de la Corte, al señalar que una ley que cobija conductas relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, es contraria con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados. La Corte IDH adiciona al análisis de este caso, por las características especiales de los hechos enmarcados en el desarrollo de un conflicto armado interno, lo contemplado por “el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 así como de los términos específicos en que se acordó el cese de las hostilidades que puso fin al conflicto en El Salvador”⁷⁶.

La Corte IDH señala que según el Derecho Internacional Humanitario es aplicable a estas situaciones, la promulgación de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz, Sin embargo, este postulado no es absoluto, en tanto que existe en el Derecho Internacional Humanitario, como se ha señalado, la obligación de los Estados de investigar y juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Por consiguiente, puede entenderse que es posible conceder amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra⁷⁷.

⁷⁶ Ibid. Pág. 113.

⁷⁷ Ibid. Pág. 114.

4.3.2 Constitucional

Nuestra carta magna, consagra en su artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”⁷⁸, lo que implica para el Estado la obligación de asumir las estrategias, mecanismo o instrumentos tendientes a buscar la satisfacción de este derecho fundamental, lo que en términos prácticos significaría la superación de la violencia generalizada, lo que se lograría mediante la realización de los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del Estado social de derecho y la reconciliación nacional⁷⁹. Lo anterior se inscribe en este nuevo intento que emprendió el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, de ponerle fin al conflicto armado interno, con la suscripción de un acuerdo de paz, lo que significó la necesidad de realizar una serie de adecuaciones en materia constitucional.

En este sentido, el Acto Legislativo 01 de 2012 significó el primer esfuerzo que implicó introducir en la Constitución Política dos nuevos artículos transitorios, el primero el artículo 66 que determina que los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizar los derechos de las víctimas, así como la posibilidad de aplicar un tratamiento diferenciado, tanto para los grupos armados al margen de la ley como para los agentes del Estado. Igualmente en esta reforma constitucional, se contempla la posibilidad de implementar los mecanismos judiciales y extrajudiciales, contemplados por la justicia transicional, entre lo que se destaca la comisión a la verdad. Este acto legislativo, advierte de la imposibilidad de dejar sin juzgamiento y sanción las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y dejó abierta la posibilidad de la selección

⁷⁸ ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991. Disponible en: <<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>> [Con acceso el 25/04/2019]. Artículo 22.

⁷⁹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 26/04/2019]. Pág. 286.

y priorización frente a los máximos responsables. Asimismo contempló la posibilidad de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena, lo que implica contemplar un régimen de condicionalidad para acceder a este tratamiento penal especial consistente en requisitos tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, entre otros. El artículo 67 consagró la necesidad de tramitar una ley estatutaria que fijara cuáles serían los delitos conexos al delito político para efectos de la participación política, de ante mano se exceptúan de ante mano los delitos calificados como graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra⁸⁰.

Por su parte, la reforma constitucional contemplada en el Acto Legislativo 1 de 2017, incluyó un título transitorio con las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, en la que el capítulo I disecciona una a una las características, composición, principios, fines, etc., del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El capítulo III se enfoca en la Jurisdicción Especial para la Paz. En los siguientes capítulos de este Acto Legislativo, se insiste en la obligación estatal de reparar integralmente a las víctimas; se consagra la prohibición de la extradición respecto de hechos o conductas objeto del conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; lo concerniente a la participación política de quienes comparezcan ante el sistema y sea merecedores de sanciones; asimismo se contemplan las normas aplicables a

⁸⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 01 de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1000074> [Con acceso el 26/04/2019].

los miembros de la fuerza pública que comparezcan ante la Jurisdicción⁸¹, todos estos temas, serán profundizados posteriormente en la investigación.

4.3.3 Legal

En la Ley 1820 de 2016 o de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales se fijan las condiciones para otorgar este tratamiento de justicia y otros equivalentes para quienes hayan cometido delitos susceptibles de dichos tratamientos especiales por causa o con ocasión del conflicto armado. A su vez, al señalar las consecuencias jurídicas de los tratamientos especiales de justicia -amnistías, indultos y otros-, esta Ley prevé que tengan impacto en los procesos que estuviesen en curso, en las condenas en firme, en la imposibilidad de abrir nuevas investigaciones futuras por las conductas que fueron objeto de dichos tratamientos especiales, y en el régimen de libertades. Esta ley nos ofrece un catálogo de conductas susceptibles de amnistía, indulto y de tratamientos penales especiales, los criterios de conexidad y sus efectos. Igualmente, estipula cuales son los delitos frente a los cuales no procede la amnistía, el indulto, tratamiento penales especiales. Por último, es clara en señalar el régimen de libertades que concede tanto para los agentes del estado como para los integrantes de grupos armados al margen de la ley⁸².

Por su parte, la Ley 1922 de 2018, contempla las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales serán trascendentales en la

⁸¹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 26/04/2019].

⁸² CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 26/04/2019].

administración de justicia transicional, especialmente para las víctimas, como quiera que permitirán la investigación, el juzgamiento y la sanción de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en aras de avanzar en la lucha contra la impunidad. Estas normas procesales garantizaran en todo momento los principios de:

“Imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, debido proceso, contradicción, derecho a la defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, participación de las víctimas como intervinientes según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el Acuerdo Final y doble instancia en el marco de un modelo adversarial. También regularán los parámetros que deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se han presentado o no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos acarrearán, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final”⁸³.

4.3.4 Jurisprudencial

La Corte Constitucional en la Sentencia C-080 del 2018, aprobó, con varios condicionamientos e inexequibilidades, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, de 162 artículos, con temas como: amnistías, tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado, derechos de las víctimas, extinción de investigaciones y sanciones, estructura general de la Jurisdicción Especial para la Paz, reconocimiento de responsabilidad, sanciones, dosificación, suspensión de órdenes de captura y extradición. La Corte fundó su estudio en el marco

⁸³ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1922 de 2018. Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1922_2018.html [Con acceso el 26/04/2019].

constitucional general que rige la estructura, objetivos, funciones y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017⁸⁴.

La Sentencia C-007/18 fue la consecuencia del control automático y definitivo aplicado a la ley que implementó lo relacionado con la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. La Sala encontró que se cumplieron las condiciones que delimitaban la competencia del Congreso de la República para aprobar normas al amparo del procedimiento legislativo especial regulado en el Acto Legislativo 01 de 2016, relacionadas con el respeto del criterio de conexidad. Igualmente, declaró que la formación de la Ley 1820 de 2016 se ajustó a la Constitución Política, al cumplirse los tres debates requeridos y observarse las condiciones referidas a la publicidad, al quórum deliberatorio y decisorio, así como a las mayorías exigidas para una ley especial de amnistía, en los términos previstos por el artículo 150 numeral 17 de la Constitución. Destacó la Corte, entre otras cosas, que en virtud del complejo de normas constitucionales relevantes (que incluyen los artículos 150 numeral 17, 66 transitorio y el Acto Legislativo 01 de 2016), se concluía que el procedimiento que debía dársele a la previsión de tratamientos diferenciados en materia penal podía ser el establecido por el artículo 150 numeral 17 de la Constitución, que fue el trámite finalmente escogido por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para el procedimiento de formación de la Ley 1820 de 2016. Una vez realizado el control material de constitucional, la Corte declara exequible la mayor parte de sus normas, salvo algunos aspectos que fueron objeto de declaración de exequibilidad condicionada o inexequibilidad parcial⁸⁵.

⁸⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 26/04/2019].

⁸⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007/18. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm> [Con acceso el 26/04/2019].

En la sentencia C-674/17, la Corte Constitucional se declaró competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, en virtud de lo dispuesto en el literal k) del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual establece un control automático y único de constitucionalidad, en relación con los actos legislativos adoptados en desarrollo del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con posterioridad a su entrada en vigencia. En la presente decisión, la Corte divide en dos partes el juicio de constitucionalidad. En la primera parte, se aborda el examen del procedimiento de formación del Acto Legislativo 01 de 2017, a partir, tanto de los requisitos especiales de forma previstos en el Acto Legislativo 01 de 2016, como de las reglas básicas de trámite que rigen el procedimiento legislativo consagradas en la Carta Política y en la Ley 5ª de 1992. Para ello, se procede a (i) reiterar la naturaleza y el alcance del control de constitucionalidad de los actos legislativos proferidos en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz; (ii) se señalan las características especiales que el mencionado acto legislativo fijó para su expedición; (iii) se identificaron los parámetros que permiten realizar el juicio de constitucionalidad, incluyendo no solo los generales y especiales de forma, sino también los relacionados con la sujeción a las reglas de competencia vinculadas con el cumplimiento de los criterios de habilitación temporal, habilitación competencial, conexidad material y conexidad teleológica. En la segunda parte, como regla básica de competencia se adelanta el juicio consistente en establecer, si los contenidos del Acto Legislativo 01 de 2017 implican una reforma constitucional o si, por el contrario, dan lugar a una sustitución o un quebrantamiento de la misma. Luego de realizar el correspondiente examen, la Corte declara la exequibilidad del acto legislativo 01 de 2017, salvo algunos apartes normativos, que se declaran inexecutable⁸⁶.

⁸⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-674/17. Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2017. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm> [Con acceso el 26/04/2019].

La Sentencia C-579/13, es el estudio que hace la Corte sobre la demanda contra el Acto Legislativo 01 de 2012, en lo concerniente a las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los” acusadas, sustituyen un pilar fundamental de la Constitución Política, que es el deber del Estado Colombiano de garantizar los derechos humanos. En primer lugar, la Sala consideró que si bien la demanda se dirigía contra algunas expresiones, contenidas en el inciso 4° del artículo 1°, éstas se encontraban estrechamente vinculadas a un sistema integral de justicia transicional, por lo cual se pronunció sobre la totalidad del precitado inciso. La Corte determinó que existe un pilar fundamental de la Constitución que consiste en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas y, que en virtud de este mandato existe la obligación de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) garantizar la reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Constató que la reforma introducida mediante el Acto Legislativo demandado partió de la base de que para lograr una paz estable y duradera era necesario adoptar medidas de justicia transicional. Partió de reconocer la necesidad de efectuar una ponderación entre diferentes principios y valores como la paz y la reconciliación y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia la reparación y la garantía de no repetición. Se pronunció sobre la posibilidad de centrar esfuerzos en la investigación penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y de imputar estos delitos sólo a los máximos responsables y analizó la renuncia condicionada a la persecución penal. Finalmente, consideró necesario fijar algunos parámetros de interpretación del Acto Legislativo, para que estos sean observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el “Marco Jurídico para la Paz”⁸⁷.

⁸⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579/13. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 2013. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm> [Con acceso el 26/04/2019].

4.4 MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de complementar lo escrito en los diferentes apartados del marco referencial, así como con la intención de establecer su relación entre estos y el marco conceptual, abordaremos una serie de definiciones de algunos conceptos que permitirán clarificar la investigación; es por ello que palabras clave de la investigación, que se pueden observar en el título o en los objetivos, a renglón seguido serán conceptualizadas para garantizar una mayor comprensión del tema, ya que en las siguientes etapas del proceso investigativo, serán claves.

En primer lugar, señalar que son el Acto Legislativo 1 de 2017 y las Sentencias C-674 de 2017 y C-080/18, las fuentes que nos permiten definir el RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD como una serie de requisitos y obligaciones que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la paz, deben cumplir para así acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, tales como los beneficios relacionados con el régimen de libertad, el régimen de sanciones, así como la no pérdida de los derechos civiles y políticos, etc. En esencia, este régimen de condicionalidades:

“Apunta a permitir la flexibilización en los estándares regulares y ordinarios de justicia, pero sobre la base de que esto tiene como contrapartida una ganancia en términos de acceso a la verdad, de la reparación integral a las víctimas, y de implementación de garantías de no repetición de los hechos que dieron lugar a la vulneración de derechos. Esta lógica que subyace al acto legislativo se traduce en una regla de condicionalidad, en virtud de la cual el acceso y el mantenimiento de todos los componentes del régimen penal especial para el escenario transicional, se encuentran supeditados a la contribución efectiva y proporcional a la reconstrucción de la verdad, a la reparación de las

víctimas del conflicto armado, y a la implementación de garantías de no repetición”⁸⁸.

Lo anterior quiere decir, que siempre y cuando el beneficiario de este régimen de condicionalidad se comprometa y cumpla con su aporte exhaustivo en materia de verdad plena, repare integralmente a las víctimas, cumpla con las sanciones propias del sistema y garantice la no repetición, permanecerá cobijado por este.

En segundo lugar, se entenderá como CONDUCTAS NO AMNISTIABLES, aquellas en que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz hayan incurrido y sean calificadas tanto por la legislación nacional como internacional como graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Según el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto, las siguientes conductas:

“Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiabiles”⁸⁹.

⁸⁸ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 26/04/2019]. Pág. 270.

⁸⁹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Disponible en:

En tercer lugar, se entenderá como REPARACIÓN INTEGRAL, aquella obligación del Estado y de los particulares, de reparar todos los daños causados a las víctimas por las conductas que implicaron la afectación de sus derechos humanos o libertades. La reparación integral debe abarcar tanto los daños y perjuicios materiales como morales sufridos por las víctimas. La reparación debe ser proporcional a los daños sufridos y a la naturaleza del derecho violado. Las modalidades y el ámbito de aplicación de la reparación comprenden medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción⁹⁰.

En otras palabras, según la Unidad de para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas:

“La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales”⁹¹.

4.5 ESTADO DEL ARTE

La justicia transicional, las amnistías y los derechos de las víctimas son temas de estudio, que desde las últimas tres décadas aproximadamente, han sido muy

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 26/04/2019]. Artículo 23.

⁹⁰ COMISIÓN DERECHOS HUMANOS ONU. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=e/cn.4/2005/102/add.1 [Con acceso el 27/04/2019].

⁹¹ UNIDAD DE PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Reparación integral individual. Disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-integral-individual/286> [Con acceso el 27/04/2019].

abordados desde diferentes enfoques y disciplinas del conocimiento, por su actualidad, ya que alrededor del mundo, las experiencias de solución de conflictos armados, de transiciones de dictadura a democracia, los tribunales internacionales, Etc. brindan un objeto de estudio y un nuevo campo para escrudiñar. Colombia no es ajena a esa dinámica mundial, sin desconocer los trabajos previos sobre estos temas anteriores al inicio del siglo XXI, es abundante el material bibliográfico al que se puede acceder, desde trabajos de grado de pregrado, tesis de posgrado, compilaciones de conferencias de eventos académicos, artículos en revistas científicas, libros, etc. lo que facilita las averiguaciones sobre el estado en que se encuentra la materia. A raíz del proceso de diálogo y el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, en el país se ha ido profundizado en las investigaciones, en este sentido, consideramos a la hora de rastrear el estado del arte, averiguar las producciones académicas, en pregrado y posgrado, de nuestra universidad, posteriormente ampliamos el perímetro a Colombia, hallando cientos de tesis, artículos, libros, etc, finalmente consultamos las investigaciones realizadas en Latinoamérica y el mundo, para tener una visión más amplia del fenómeno a investigar. Es importante señalar que por la novedad de nuestro tema de investigación, el régimen de condicionalidad aplicado a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la materia no se encontraron trabajos que se centraran en este asunto, pero si unos más generales que permiten acercarse al tema, a continuación se referenciará algunas de estas investigaciones.

En primer lugar, encontramos la tesis de especialización de Derecho Penal de nuestra universidad, del año 2016, denominada “Alcance del modelo de justicia transicional, en las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”⁹², de los autores Jonathan Ramírez, Luz Ángela

⁹² RAMÍREZ RAMÍREZ, Jonathan; PIEDRAHITA BOTERO, Luz Ángela y RAMÍREZ GARCÍA, Carmenza Adriana. Alcance del modelo de justicia transicional, en las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Universidad Libre Seccional Pereira. 2016.

Piedrahita y Carmenza Adriana Ramírez, en la cual se hace una conceptualización de lo que significa la justicia transicional y su aplicación en un contexto de graves vulneraciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trabajo plantea que “la justicia transicional aparece como un modelo de justicia alterna y diferente al modelo de justicia ordinaria”⁹³ con el objetivo de garantizar el tránsito hacia la paz. Igualmente esta tesis hace énfasis en el gran reto de la justicia transicional, que es lograr la paz sin sacrificar la justicia, en este sentido, es deber de las medidas y mecanismos de la justicia transicional buscar una solución que permita “encontrar un punto medio entre los polos de justicia retributiva plena, por un lado, y de impunidad absoluta, por el otro”⁹⁴.

Por su parte la tesis de especialización en Derecho Constitucional denominada “Posibles retos de la sociedad civil y el gobierno en la aplicación al proceso de paz y el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”⁹⁵, en este trabajo se insiste en la tensión existente entre la justicia y la paz, haciendo referencia que así como las víctimas tienen sus derechos, los procesados también, además de existir unas obligaciones internacionales en materia relativas a las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, asimismo es interesante este trabajo ya que atiende la cuestión de la reincorporación de los “agentes del conflicto”.

⁹³ Ibid. Pág. 22.

⁹⁴ Ibid. Pág. 27.

⁹⁵ RESTREPO MARTÍNEZ, Alex Fermín. Posibles retos de la sociedad civil y el gobierno en la aplicación al proceso de paz y el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Universidad Libre Seccional Pereira. 2015.

En segundo lugar, encontramos que el artículo “Justicia restaurativa: construyendo un marco englobador para la paz”⁹⁶ de Alejandro Carvajal Pardo, plantea una serie de cuestionamientos bastante interesantes que permiten enfocar y darle la vuelta a la tensión que se ha señalado entre justicia y paz, como una posibilidad que desde este nuevo paradigma que implica la aplicación de la justicia transicional y la justicia restaurativa, sea posible la reconstrucción del tejido comunitario y entendida la aplicación de la justicia como parte integral de la construcción de la paz. El autor enfatiza en que:

“A través de la justicia restaurativa, las víctimas se empoderan políticamente porque se sienten menos atemorizadas, lo que transforma el ciclo del miedo en una oportunidad para la democracia. De igual forma, la comunidad también se empodera ya que deja de estar aislada y alienada. Igualmente, el victimario también es empoderado al dejar de ser tratado como una persona desalojada o desterrada de la misma comunidad...La justicia, concebida como un asunto de la comunidad que se reconstruye tras la violencia y no como la fuerza agregada que reproduce la violencia a través de la venganza organizada, es, por lo menos, un concepto a tener en cuenta para la construcción de la paz”⁹⁷.

Esta visión sobre los procesos transicional es interesante, ya que a la hora de buscar cuál será la relación entre un régimen de condicionalidad aplicable a responsables de delitos en el marco del conflicto armado y la reparación integral para las víctimas, se tiene una perspectiva muchas más amplia, ya que no se verá lo primero como unos simples beneficios para criminal y lo segundo como unos derechos para un actor pasivo y victimizado, sino como la oportunidad para profundizar en esas causas que generan esos hechos victimizantes, buscar la forma de reconstruir lo dañado y construir la paz y la reconciliación.

⁹⁶ CARVAJAL PARDO, Alejandro. Justicia restaurativa: construyendo un marco englobador para la paz. Criterio Jurídico. 2010.

⁹⁷ Ibid. Pág. 31.

En la investigación de la Universidad Católica de Colombia, coordinada por Jairo Becerra, denominada “Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia”⁹⁸ abordaron la justicia transicional desde la perspectiva del Estado social de derecho y su relación con las víctimas, el derecho internacional en sus diferentes niveles y el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aportando luces sobre los límites ya establecidos por el derecho internacional, en especial por lo señalado por la Corte IDH, en lo referente a la utilización de las amnistías y demás instrumentos que conduzcan hacia la impunidad. La investigación señala que “las sentencias de la Corte IDH son órdenes inderogables para el Estado; el deber de acatamiento y ejecución no puede ser suspendido ni negociado en un proceso de justicia transicional”⁹⁹, lo que significa que a la hora de determinar una sanción o la reparación, los antecedentes y precedentes jurisprudenciales propios del SIDH, siguen teniendo plena vigencia y por ende, son de obligatorio cumplimiento. Igualmente la investigación hace énfasis en lo que un proceso de aplicación de justicia transicional, de sus medidas y mecanismos, debe ser frente a los derechos de las víctimas y las obligaciones de los responsables de los delitos cometidos en el conflicto armado y a lo que debe conducir:

“El tema de las víctimas y la transición se requiere la estructuración de un modelo de justicia transicional consciente de los hechos que generó el conflicto, capaz de reconocer un modelo judicial que brinde seguridad jurídica, que garantice los derechos de las partes, buscando el fin del odio de la guerra, que pueda separarse de pretensiones políticas y que sea capaz de pensar el modelo transicional desde la realidad colombiana, para que, con los intereses de la Nación y las víctimas, permita un proceso de paz exitoso en el cual se proyecte la existencia en la realidad

⁹⁸ BECERRA, Jairo (Editor). Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia. Universidad Católica de Colombia. 2016.

⁹⁹ Ibid. Pág. 180.

de verdad, justicia, reparación y no repetición y, a su vez, una transición equilibrada y efectiva”¹⁰⁰.

Por su parte, la publicación de Rodrigo Uprimny Yepes, Luz María Sánchez Duque y Nelson Camilo Sánchez León, denominada “Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada”¹⁰¹, insiste sobre el álgido debate entre la manera de compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con los escenarios propios de la búsqueda de la paz a través de la negociación política, trascendiendo el análisis de lo concerniente a los mecanismos jurisdiccionales propios de justicia transicional sino ampliándolo a las grandes reformas estructurales que se deben implementar en la sociedad y el estado colombiano para la superación democrática del conflicto armado interno. Igualmente se reitera en las restricciones en materia de obligaciones estatales impuestas por tratados e instrumentos internacionales a la hora de conceder amnistías, tratos especiales, sanciones alternativas, etc, en este sentido señalan que:

“Esos límites jurídicos no pueden ser eludidos con el argumento de que la paz es un derecho superior y que todos los otros derechos, incluyendo los de las víctimas, deben ceder ante ella. Es indudable que la paz es trascendental y que es necesario armonizar el respeto de los derechos de las víctimas con la búsqueda de la misma; incluso la búsqueda genuina de la paz permite ciertas limitaciones proporcionadas a los derechos de las víctimas. Pero la paz no puede legitimar jurídicamente un arrasamiento de las víctimas y de sus derechos, como ya lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, que examinó la Ley de Justicia y Paz, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el reciente fallo sobre la Masacre de El Mozote en El Salvador”¹⁰².

¹⁰⁰ Ibid. Pág. 181.

¹⁰¹ UPRIMNY YEPES, Rodrigo; SÁNCHEZ DUQUE, Luz María y SÁNCHEZ LEÓN, Nelson Camilo. Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. 2014.

¹⁰² Ibid. Pág. 181.

En tercer y último lugar, referenciamos la investigación realizada en el 2014, denominada “Justicia de transición y constitución: análisis a la sentencia C-579 de 2013”¹⁰³, en la cual se hace un profundo estudio sobre la sentencia C-579 de 2013 sobre el “Marco Jurídico para la Paz”. Esta sentencia evaluó la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2012 que, al incorporar a la Constitución colombiana el artículo transitorio 66, otorgó rango constitucional a mecanismos de justicia transicional. El libro analiza diversos aspectos de esta importante sentencia que determinó la exequibilidad del inciso 4º del artículo 1º de dicho Acto Legislativo. La investigación señala la importancia de este pronunciamiento constitucional ya que implicó para nuestro ordenamiento jurídico que la justicia transicional fuese elevada a rango constitución, en este sentido se señala que:

“La elevación a rango constitucional de la JT no solo es aceptada por la Corte, sino que en la sentencia analizada se establecen algunos aspectos fundamentales para la comprensión de la categoría JT en el modelo constitucional. Por un lado, la declaración de los derechos de las víctimas como derechos constitucionales y, por otro lado, el concepto de JT conforme a la idea de un modelo holístico en donde el juez constitucional debe encontrar un balance entre los intereses y valores enfrentados”.¹⁰⁴

El hilo conductor que acompaña todas estas investigaciones sobre nuestra temática, es lo referente frente a la tensión justicia y paz, así como las restricciones existentes para el Estado frente a sus obligaciones frente a la investigación, juzgamiento y sanciones de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos el de la reparación integral.

¹⁰³ AMBOS, Kai, (Coord.). Justicia de transición y constitución: análisis a la sentencia C-579 de 2013 de la corte constitucional. Editorial Temis. 2014.

¹⁰⁴ Ibid. Pág. 10.

Finalmente, el libro “Justicia transicional y Derecho Penal Internacional”¹⁰⁵ incluye las ponencias del simposio internacional Justicia transicional y Derecho Penal Internacional llevado a cabo en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) durante los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017, las cuales versan alrededor de la justicia transicional colombiana y las recientes negociaciones de paz, con el fin de enriquecer el debate y la formación jurídica y política, así como mostrar que en el ámbito de la justicia penal en sociedades en transición de la guerra a la paz, no es viable tratar la criminalidad masiva con una persecución penal estricta e individualizada, propia de la jurisdicción ordinaria.

Esta publicación nos ofrece una serie de ponencias que abordan desde el fin de la pena en el marco de la justicia transicional, la justicia transicional y el derecho penal internacional, la justicia transicional desde una perspectiva comparada y una última parte referente a la reparación, las responsabilidades y las posibilidades de concretar la reconciliación.

Una de las ponencias, a cargo de Kai Ambos, aborda la Ley de amnistía en clave del marco jurídico internacional, lo que permite comprender los alcances y los límites de este instrumento transicional a la hora de aplicarse, asimismo señala que a pesar de las críticas existentes frente a estos instrumentos:

“La actual situación legislativa en Colombia se caracteriza por una alta complejidad. Colombia es tal vez el país con la legislación más sofisticada en el tema de justicia de transición y procesos de paz. Esto se puede afirmar con base no solamente en las reformas constitucionales y legales

¹⁰⁵ AMBOS, Kai; CORTÉS RODAS Francisco y ZULUAGA, Jhon, (Coord.). Justicia transicional y derecho penal internacional. Siglo del Hombre Editores, Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (cedpal) de la Georg-August-Universität Göttingen, Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Fundación Konrad Adenauer-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica y Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation. 2018.

que implementan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) e incluso en otros procesos de indulto, como los que tuvieron lugar con relación a grupos guerrilleros como el M-19 y el EPL en las décadas de 1980 y 1990”¹⁰⁶.

Lo que en términos prácticos se traduce a que existe en nuestro ordenamiento unas garantías solidas que permitirán que los compromisos adquiridos por el estado en materia de justicia y derechos de las víctimas, no serán desconocidos, ya que la serie de instrumentos transicionales, son compatibles, desde el punto de vista normativo con el derecho internacional. En este mismo sentido, Kai Ambos señala:

“El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, junto con la Ley 1820 y sus dos Decretos Reglamentarios 277 y 700, forman un marco normativo altamente sofisticado en materia de amnistías, prohibiendo amnistías absolutas en concordancia con el derecho (penal) internacional. De acuerdo con el DPI, las amnistías condicionadas son admisibles siempre y cuando la legislación nacional correspondiente cumpla con ciertos requisitos. En particular, se debe exigir a los beneficiarios de la amnistía condicionada la revelación de los hechos, el reconocimiento de su responsabilidad y el arrepentimiento con el fin de contribuir a una verdadera reconciliación, sin cobijar crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, los cuales no deben quedar impunes”¹⁰⁷.

En concordancia con lo anterior, es evidente que la existencia de un régimen de condicionalidad que cobija a aquellos responsables de conductas no amnistiables y amnistiables que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con sus respectivas obligaciones en materia de reconocimiento de verdad plena, cumplir con el régimen de libertad, asumir las sanciones y comprometerse con la verdad, cumple con la prohibición contenida en el derecho internacional, de conceder amnistías

¹⁰⁶ Ibid. Pág. 119.

¹⁰⁷ Ibid. Pág. 150.

absolutas, por lo tanto, frente a lo señalado anteriormente “el marco legal definido en este país es compatible con el DPI y va aún más allá de sus requerimientos”¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Ibid. Pág. 150.

5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo se enmarcará dentro de un fundamento histórico hermenéutico ya que de acuerdo a lo planteado, se hará una interpretación y análisis del desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional de la justicia transicional en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo concerniente con su régimen de condicionalidad y la relación con la reparación integral.

La respuesta a la pregunta de esta investigación permitirá describir la aplicación del régimen de condicionalidad y determinar la relación con la obligación de los responsables de conductas no amniables de reparar integralmente a las víctimas en el marco de la aplicación de la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz.

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque planteado se centrará en los aspectos cualitativos, ya que con esta investigación se pretende, a partir del análisis del desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional de la justicia transicional en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, establecer en que consiste el régimen de condicionalidad y descubrir la relación existente entre este y la obligación de reparar integralmente a las víctimas, lo que ofrecerá, tanto para los responsables que comparezcan ante esta jurisdicción, como para las víctimas, una herramienta que contenga cuáles son sus derechos y obligaciones a la hora de participar en un proceso de esta clase.

5.3 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN

La investigación tendrá un alcance descriptivo, exploratorio y proyectivo.

En primer lugar, el alcance jurídico-descriptivo tendrá en cuenta los desarrollos normativos, jurisprudenciales y constitucionales, en especial lo relacionado con el régimen de condicionalidad y las obligaciones de reparar integralmente a las víctimas; así como los aportes de doctrinantes nacionales e internacionales que han trabajado previamente la temática sobre justicia transicional, amnistías e indultos, derechos de las víctimas, etc., con el fin de escudriñar y analizar la materia de investigación a fondo.

En segundo lugar, tendrá un alcance jurídico-exploratorio ya que consideramos que por la novedad de la materia investigada, es decir, el régimen de condicionalidad y su relación con la reparación integral de las víctimas, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, sentará unas mínimas bases que permitirán abrir camino para próximas investigación.

Por último, con el enfoque jurídico-proyectivo se piensa realizar una especie de predicción de cómo será el desarrollo de la aplicación del régimen de condicionalidad para los responsables de conductas no amnistiables y su relación con la reparación integral de las víctimas, como obligación clave para seguir gozando de los beneficios que este régimen contempla.

5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

Puesto que es un estudio de corte cualitativo, se propone como unidad de análisis el estudio de la normatividad y jurisprudencia; igualmente consideramos relevante tener en cuenta para la elaboración de la matriz de análisis categorial los instrumentos internacionales, así como el acuerdo de paz; así mismo tendremos como referencia la bibliografía revisada, seleccionada y analizada.

Conforme a lo anterior, proponemos como unidad de análisis:

2 normas las cuales desarrollan materias como derechos de las víctimas, mecanismos de justicia transicional, amnistías, entre otros temas, las cuales fueron elegidas bajo el criterio Intencional o de juicio.

2 Actos legislativos los cuales desarrollan materias como derechos de las víctimas, mecanismos de justicia transicional, amnistías, entre otros temas, los cuales fueron elegidas bajo el criterio Intencional o de juicio.

5 Sentencias de control automático de constitucionalidad de las leyes y actos legislativos reseñados anteriormente. Las sentencias fueron elegidas bajo el criterio Intencional o de juicio.

4 instrumentos, tratados o sentencias internacionales sobre derechos de las víctimas, lucha contra la impunidad, amnistías, etc. Estos fueron elegidos bajo el criterio Intencional o de juicio.

El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, en especial el punto de víctimas que creo el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

5.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS CATEGORIAL

Se elaborarán 2 matrices de análisis en las cuales se tendrán en cuenta categorías tales como:

En la primera matriz: Amnistía e indulto, tratamientos diferenciados, conductas Amnistiables, conductas no Amnistiables, ¿Quiénes están cobijados?, ¿Quiénes las conceden? y extradición.

En la segunda: Condiciones de acceso y permanencia, reconocimiento de responsabilidad y compromiso con la verdad, reparación a las víctimas, tratamiento especial penitenciario, participación política, inhabilidades, responsabilidades disciplinarias e indemnizaciones e indemnización.

5.6 CATEGORÍAS

5.6.1 Categorías de análisis matriz # 1

Amnistía e Indulto: La amnistía e indulto están contemplados en la Constitución Política en los artículos 150 numeral 17 y 201 numeral 2, como instrumentos jurídicos con los que cuenta el Congreso y el Presidente de la República, a los que se puede acudir para extinguir o la acción penal y la pena, en el caso de la amnistía,

o solamente la pena, en el caso del indulto, por causa de delitos políticos. La aplicación de estos instrumentos a casos concretos exige, según la Constitución la concurrencia de dos circunstancias, como lo son los “graves motivos por conveniencia pública” y los delitos políticos, es decir, solo procede frente a conductas punibles ejecutadas contra el régimen constitucional y legal vigente como lo son la rebelión, sedición, asonada y sus conexos¹⁰⁹. En este sentido, en el marco del análisis de los desarrollos legislativos, constitucionales y jurisprudenciales es clave identificar que se definió frente a este asunto a la hora de determinar cuáles serían las conductas no amnistiables.

Tratamientos diferenciados: Cuando se acude a esta categoría de análisis, se parte del presupuesto de la existencia de una prohibición o límite impuesto por el derecho internacional de conceder autoamnistías a los propios agentes del Estado, límite que fue considerado por el Acuerdo Final, es por ello que con la necesidad de “la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno”¹¹⁰, se contemplaron unos mecanismo jurídicos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado como lo son la renuncia o suspensión a la persecución penal con miras a resolver su situación jurídica. De lo anterior se desprende la importancia de incluir este mecanismo en el análisis de lo contemplado en materia de amnistías e indultos para los delitos políticos y conductas punibles conexas como ejercicio comparativo.

Conductas amnistiables y no amnistiables: Es necesario señalar que cuando hacemos referencia a conducta, ya sea en lo referente a las conductas amnistiables

¹⁰⁹ AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. Págs. 14-18. 1993.

¹¹⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 46. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 16/05/2019].

y no amnistiabiles, estamos partiendo de lo estipulado en la norma rectora del artículo 9 código penal colombiano, cuando señala que para que la conducta sea considerada punible se requiere que esta sea “típica, antijurídica y culpable”¹¹¹. Es decir, solo haremos referencia a esas conductas punibles que guardan relación o conexidad, por su naturaleza, con los delitos políticos. Igualmente es importante señalar, por la misma relación análoga o paralelismo que consideramos que para efectos de esta investigación era provechosa, entre la figura jurídica de la amnistía y lo referente a los tratamientos diferenciados para los agentes del Estado, de ahí que en nuestra matriz categorial de análisis, se contemple a la par de lo señalado en la ley, constitución y jurisprudencia sobre la amnistía, evaluemos lo que se señala frente a los tratamientos para los agentes del Estado.

Beneficiarios: En concordancia con lo anterior, consideraremos como los responsables cobijados por estos beneficios jurídicos a aquellos sujetos activos de la conducta punible, ya sea por acción o por omisión, quienes por su condición de combatientes de FARC-EP, agentes del Estado, terceros, etc., podrían ser beneficiarios o excluidos de estos tratamientos especiales penales contemplados en los desarrollos legislativos, constitucionales y jurisprudenciales que implicó la puesta en marcha de la justicia transicional.

Autoridad Competente: Para efectos prácticos de esta investigación, cuando elegimos esta categoría de análisis, se quiso hacer referencia en las autoridades, judicial o administrativa, en las cuales recaía la competencia de conceder los beneficios contemplados en la Ley 1820 de 2016, referente a los instrumentos

¹¹¹ CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Artículo 9. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html [Con acceso el 16/05/2019].

jurídicos de las amnistías, indultos y a los tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado.

Extradición: La extradición es un mecanismo de carácter jurídico de cooperación internacional entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, de manera supletoria, por la ley¹¹². Los desarrollos normativos y jurisprudenciales en materia de justicia, a raíz del Acuerdo Final, implicaron unos cambios en este mecanismo judicial que afectará la colaboración entre los Estados, de ahí la importancia de contemplar esta categoría en nuestro trabajo de grado a la hora de analizar lo contemplado frente a los beneficios referentes a la amnistía y los tratamientos penales diferenciados.

5.6.2 Categorías de análisis matriz # 2

Condiciones de acceso y permanencia: En materia jurídica un requisito es una circunstancia o condición necesaria que se debe cumplir para el ejercicio de un derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una obligación, de lo anterior se colige que cuando se hace referencia a las condiciones de acceso y permanencia, son aquellos requisitos que, antes, durante y después de la suscripción del acta de sometimiento, los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, deben cumplir, para ser cobijados por los tratamientos especiales en materia de justicia que contempla el régimen de condicionalidad. De ahí que identificar las condiciones que se deben cumplir, así como los beneficios a los que se accede por su cumplimiento, es la finalidad de esta categoría.

¹¹² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-460 de 2008. Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-460-08.htm> [Con acceso el 16/05/2019].

Compromiso con la verdad y reconocimiento de responsabilidad: La verdad es un derecho inalienable e imprescriptible de las víctimas como también de la sociedad en su conjunto. Conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con “crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes”¹¹³, es un paso fundamental en el camino de satisfacer plenamente a las víctimas, además de avanzar en la garantía de no repetición, ya que tener plena certeza de lo sucedido proporciona una salvaguarda contra la repetición de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Asimismo, frente a este compromiso con la verdad, juegan un papel clave los perpetradores y victimarios de estos actos victimizantes, ya que con el reconocimiento de su responsabilidad y contribución a la verdad, en los diferentes escenarios contemplados por el Sistema Integral, ya sean judiciales y extrajudiciales, esto repercutirá tanto en las obligaciones estatales de investigar, juzgar y sancionar graves crímenes, garantizar los derechos de las víctimas, pero también en el plano individual del responsable de estas conductas, ya que dependerá de su compromiso con la verdad, la retribución que recibirá del Sistema Integral.

Reparación a las víctimas: Se enmarcará esta categoría, en lo señalado por los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de

¹¹³ COMISIÓN DERECHOS HUMANOS ONU. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Principio 2. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=e/cn.4/2005/102/add.1 [Con acceso el 18/05/2019].

diciembre de 2005, ya que este instrumento constituye la referencia jurídica en la materia, la cual señala que:

“Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”¹¹⁴.

Sanciones: La prisión no es la única sanción que existe en la justicia transicional, es por ello que el Sistema Integral contempla tres tipos de sanciones que podrán ser aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, ellas son las sanciones propias, las alternativas y las ordinarias. Las sanciones propias del Sistema, aunque se centraran en lo restaurativo y reparador, no podrán dejar a un lado las obligaciones estatales en esta materia, en las que se exige que exista una sanción efectiva y restrictiva de la libertad para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En este sentido, esta categoría de análisis permitirá hacer una relación entre el cumplimiento o no del régimen de condicionalidad y las sanciones que se les aplicaran a los responsables de conductas no amnistiables, la pérdida de las sanciones propias y en qué casos procederían las penas alternativas u ordinarias.

Tratamiento especial penitenciario: En concordancia con los tratamientos especiales en materia penal y las sanciones propias, cuando se hace referencia al

¹¹⁴ ASAMBLEA GENERAL ONU. Resolución 60/147 de diciembre de 2005. Punto IX. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx> [Con acceso el 18/05/2019].

tratamiento especial penitenciario, también se debe contemplar el enfoque restaurativo y reparador que contempla el Sistema Integral, ya que al igual que con las sanciones, el tratamiento especial penitenciario tiene como finalidad garantizar la reparación integral de las víctimas, reconstruir el tejido social, hacer efectivas las sanciones propias, etc.

Participación política: El Acuerdo Final tiene como objetivo fortalecer la participación política, ya que como señalamos en el marco histórico de la presente investigación, entre los orígenes del conflicto armado interno, se pueden señalar como causas de su persistencia un régimen político excluyente y poco democrático. Asimismo entendemos que para que una adecuada reincorporación de los exintegrantes de grupos armados ilegales, es necesario que estos participen de los diferentes escenarios institucionales y que recuperen sus derechos civiles y políticos. Igualmente es evidente que frente a lo anterior existen unas limitantes ya que por ejemplo el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lo que imposibilita en últimas ese ejercicio de derechos. Es por ello que conforme a lo señalado anteriormente, es necesario establecer, a partir de la aplicación de la presente matriz, hasta qué punto se garantizará los derechos políticos de quienes se reincorporan a la vida civil y esto en que beneficiará o perjudicará los derechos de las víctimas o las obligaciones estatales.

Responsabilidades disciplinarias y administrativas: Así como en materia penal el Estado cuenta con la potestad punitiva, en materia disciplinaria el Estado también tiene su potestad disciplinaria para valorar “la inobservancia del ordenamiento superior y legal vigente, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de

funciones”¹¹⁵, por parte de los servidores públicos o del particular que cumple funciones públicas. En concordancia con la anterior, se incluyen en nuestra matriz como categorías de análisis con la finalidad de determinar cuáles serán sus modificaciones a la luz de la aplicación de la justicia transicional.

Inhabilidades: Es sabido que en materia penal se imponen penas “principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales”¹¹⁶, en esta últimas se contemplan como tales la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, pérdida del empleo o cargo público, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, entre otras. En este sentido, a la hora del estudio de beneficios penales que contemplan la extinción o suspensión de la acción penal o de la pena, o de tratamientos penales especiales que contemplan medidas similares en materia disciplinaria o administrativa, para efectos prácticos para determinar los alcances y límites del propio régimen de condicionalidad o de la reparación integral para las víctimas, que se señala sobre las inhabilidades de los responsables de conductas amnistiables y no amnistiables que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Indemnizaciones: La reparación integral, conforme al derecho internacional, contempla una dimensión indemnizatoria que señala que frente a los daños causados a las víctimas deberán ser resarcidos materialmente por los responsables con su patrimonio y a falta de este o en el caso de que el responsable sea cobijado con una medida que implique la exclusión de esta obligación, el Estado deberá

¹¹⁵ CONSEJO DE ESTADO. Radicación: 1200-10 de 23 de septiembre de 2015. Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez. Disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas.../1237_CE-Rad-1200-10.pdf [Con acceso el 18/05/2019].

¹¹⁶ CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Artículo 34. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html [Con acceso el 18/05/2019].

asumirla, por ello es preciso contemplar como categoría de analizar en esta matriz lo que se definió en esta materia ya que a la hora de la evaluación de la satisfacción de los derechos de las víctimas a una reparación integral, este punto es clave.

5.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

5.7.1 Matriz de análisis categorial # 1

PROYECTO: DESARROLLO LEGISLATIVO, JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

OBJETIVO DE LA MATRIZ:

- Explicar las conductas no amnistiables y los límites impuestos por el derecho internacional en la aplicación de la justicia transicional.

FECHA: _____ **ELABORADOR DE LA MATRIZ:** _____

ACTOS LEGISLATIVOS Y LEYES					
CATEGORIA	A.L. 01/12	A.L. 01/17	L. 1820/16	L. 1957/19	Acuerdo de Paz
Amnistía e Indulto					
Tratamientos diferenciados					
Conductas Amnistiables o de aplicación tratamiento diferenciado					
Conductas no Amnistiables o de no					

tratamiento diferenciado					
Beneficiarios					
Autoridad competente					
Extradición					

JURISPRUDENCIA					
CATEGORIA	C-578/02	C-579/13	C-674/17	C-007/18	C-080/18
Amnistía e Indulto					
Tratamientos diferenciados					
Conductas Amnistiables o de aplicación tratamiento diferenciado					
Conductas no Amnistiables o de no tratamiento diferenciado					
Beneficiarios					
Autoridad competente					
Extradición					

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES				
CATEGORIA	ESTATUTO	C. Principios ¹¹⁷	Barrios altos vs Perú	Mozote vs Salvador
Amnistía e Indulto				
Tratamientos diferenciados				
Conductas Amnistiables o de aplicación tratamiento diferenciado				
Conductas no Amnistiables o de no tratamiento diferenciado				
Beneficiarios				
Autoridad competente				
Extradición				

¹¹⁷ Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

5.7.2 Matriz de análisis categorial # 2

PROYECTO: DESARROLLO LEGISLATIVO, JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

OBJETIVOS DE LA MATRIZ:

- Establecer en que consiste el régimen de condicionalidad aplicable a los responsables de conductas no amnistiables que comparecen a la jurisdicción especial para la paz.
- Identificar las obligaciones que asumen los responsables de conductas no amnistiables que comparecen a la jurisdicción especial para la paz frente a la reparación integral de las víctimas

FECHA: _____ **ELABORADOR DE LA MATRIZ:** _____

ACTOS LEGISLATIVOS Y LEYES				
CATEGORIA	A.L. 01/17	L. 1820/16	L. 1957/19	Acuerdo de Paz
Condiciones de acceso y permanencia				
Compromiso con la verdad y reconocimiento de responsabilidad				
Reparación a las víctimas				
Sanciones				
Tratamiento especial penitenciario				

Participación política				
Responsabilidades disciplinarias y administrativas				
Inhabilidades				
Indemnizaciones				

JURISPRUDENCIA				
CATEGORIA	C-674/17	C-007/18	C-080/18	
Condiciones de acceso y permanencia				
Compromiso con la verdad y reconocimiento de responsabilidad				
Reparación a las víctimas				
Sanciones				
Tratamiento especial penitenciario				
Participación política				
Responsabilidades disciplinarias y administrativas				
Inhabilidades				
Indemnizaciones				

6. HALLAZGOS

6.1 Conductas no amnistiabiles y límites del Derecho Internacional

La finalización de un conflicto armado interno pasa necesariamente por un escenario de diálogo y negociación en el cual se acuerda una serie de mecanismo de orden judicial y extrajudicial, en lo referente a la justicia y los derechos de las víctimas, que permita la adecuada finalización de la confrontación y el tránsito hacia un nuevo escenario de construcción de la paz, de lo anterior, dan cuenta decenas de experiencias nacionales, como se puede observar en las reseñadas en el marco historia de la presente investigación, así como internacionalmente.

Uno de estos mecanismo contemplados por la justicia transicional son las leyes de amnistía e indulto, figura jurídica que no ha sido ajena a nuestra historia político-jurídica y que en el caso del proceso de dialogo que se llevó a cabo en la Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, fue discutida y acordada como una de las herramientas jurídicas que permitió suscribir posteriormente el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

En este sentido, a la hora de analizar los desarrollos legislativos, constitucionales y jurisprudenciales, en materia de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del estado, se observan los alcances y límites a la hora de acudir a un instrumento jurídico de esta naturaleza. Los derechos de las víctimas; la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra; la prohibición de conceder autoamnistías, disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad; son cuestiones centrales a la hora de determinar si estos

mecanismos cumplen o no con los estándares contemplados por el derecho interno como por el derecho internacional.

Mediante la Ley 1820 de 2016 el Congreso de la Republica desarrolló lo concerniente a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales diferenciados, donde se regularon estas figuras. Se contempló en esta Ley la posibilidad de conceder amnistías de iure y de sala, así como indultos, a las personas responsables de delitos políticos y conexos, que hayan sido integrantes de grupos armados ilegales que suscribieron acuerdos de paz con el gobierno, igualmente para civiles acusados o juzgados por su pertenencia a estos grupos, así no fueren integrantes o no se reconocieran como tal. Las personas acusadas o condenas por delitos que se hayan dado en el marco de la protesta social también pueden ser cobijadas por estas medidas, siempre y cuando, las conductas imputadas tuviesen conexidad con el delito político. La ley señala que:

“La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional y la finalización de las hostilidades”¹¹⁸.

El legislador a la hora de definir la figura jurídica que tendría como objetivo cobijar a los agentes del Estado, tuvo en cuenta lo señalado por la jurisprudencia de la CortelDH sobre “la prohibición de autoamnistías, consideradas estas como las que concede el Estado a sus propios agentes, específicamente en casos de graves

¹¹⁸ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 7. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 24/05/2019].

violaciones a los derechos humanos”¹¹⁹, por ello acudió a los tratamientos penales especiales diferenciados, de los que se destaca la renuncia a la persecución penal, figura con la cual se podría hacer un paralelo con la amnistía o el indulto, que se aplica a los responsables de delitos politos y conexos:

“Los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del Estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta ley”¹²⁰.

Tanto para la aplicación de la amnistía y el indulto como para el tratamiento penal especial diferenciado, esta se debe circunscribir en las obligaciones de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y estar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los otros escenarios que conforman el Sistema Integral de Víctimas.

Es de resaltar que el derecho internacional humanitario consagra en el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, lo siguiente:

“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de

¹¹⁹ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Pág. 218. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf [Con acceso el 24/05/2019].

¹²⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 9. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 24/05/2019].

libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”¹²¹.

Es decir, que el marco internacional autoriza al Estado colombiano a aplicar estos mecanismos judiciales transicionales y además estipula la posibilidad de que esta sea lo “más amplia posible”, entendiéndose que existen unos límites. La ley 1820 de 2016 en sus artículos 15, 16, 21 y 23, contempla una serie de conductas para las que se puede conceder la amnistía, ya que esta de derecho o por decisión judicial, además estipula unos criterios de conexidad con los delitos políticos. Entre las conductas amnistiables, se pueden señalar a la “rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos”¹²², algunas de las conductas conexas que señala el artículo 16 son:

“...apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento;

¹²¹ CONVENIOS DE GINEBRA. Protocolo II adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Artículo 6. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm> [Con acceso el 24/05/2019].

¹²² CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 15. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 24/05/2019].

contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; y espionaje”¹²³.

Así mismo se señala en el artículo 23 que La Sala de Amnistía e Indulto tendrá como criterios de conexidad con el delito político para conceder amnistías:

“a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o

b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o

c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”¹²⁴.

Lo que evidencia un amplio catálogo de conductas en las que procede la aplicación de la amnistía, además de brindar a la Sala de Amnistía e Indulto, la posibilidad de configurar y calificar otras conductas, bajo los criterios señalados por la ley, como conexas a los delitos políticos.

Por su parte, los tratamientos penales especiales diferenciados como la renuncia a la persecución penal “mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal”¹²⁵, se aplicará a los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Este tratamiento se deberá aplicar de manera “diferenciada, otorgando un

¹²³ Ibíd. Artículo 16.

¹²⁴ Ibíd. Artículo 23.

¹²⁵ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Artículo 45. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036543> [Con acceso el 04/07/2019].

tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”¹²⁶, además deberá tenerse en cuenta la calidad de garantes de derecho por parte del Estado, así como valorar lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública.

Ahora bien, frente a las conductas no amnistiables y a las que no procede la aplicación de un tratamiento penal diferenciado, a partir de lo acordado en la mesa de negociación, pasando por su implementación y desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional, se dejó claro que el deber de investigar, juzgar y sancionar por parte del Estado las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario era irrenunciable, así como el compromiso de satisfacer integralmente los derechos de las víctimas era una obligación.

En este sentido, se señalaron que no era aplicable de amnistías ni de tratamientos diferenciados a las conductas que adquieran la connotación de graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio de manera sistemática:

“La determinación de los crímenes graves permite, de otro lado, fijar un límite sobre aquello que no puede ser objeto de amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal. Esto es, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio no pueden ser objeto de los referidos beneficios. Entre esta prohibición y aquellas conductas punibles cometidas en el marco del conflicto existe un amplio espectro, que corresponde ser valorado al Legislador, para efectos de determinar las medidas en el tránsito a la paz”¹²⁷.

¹²⁶ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 17. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 24/05/2019].

¹²⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 155. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 24/05/2019].

Tomando en cuenta como marco referencial los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional, contemplados en el Estatuto de Roma, el legislador consagro en el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, un listado de conductas que se excluían de los beneficios de amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados, muchas de ellas contempladas en el acuerdo final y que fueron ampliadas por esta ley. El acuerdo final contemplo como conductas no amnistiables a:

“Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJRNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía”¹²⁸.

En el mismo sentido y conforme al espíritu del Acuerdo, tanto en la Ley 1820 de 2016 como en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, se consideró el listado de delitos reseñados anteriormente, además de ampliarlos, así como de darle la posibilidad a los magistrados a la hora de evaluar conductas para conceder una amnistía o un tratamiento diferenciado, calificarla, si cumple con los criterios estipulados en la normatividad y la jurisprudencia, como crimen de guerra, lesa humanidad y genocidio.

¹²⁸ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Publicado el 24 de noviembre de 2016. Pág. 156. Disponible en: <http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-112016NuevoAcuerdoFinal.pdf> [Con acceso el 24/05/2019].

La Ley 1820 de 2016 señaló que por las siguientes conductas llevadas a cabo por combatientes o civiles integrantes de grupos armados que hayan suscrito un tratado de paz con el Estado colombiano, no procedería la amnistía:

“a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables;

b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero”¹²⁹.

Por su parte, las conductas no cobijadas por los tratamientos penales diferenciados para los agentes del Estado que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz son:

“...delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, ni de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”¹³⁰.

¹²⁹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 23. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 24/05/2019].

¹³⁰ Ibíd. Artículo 46.

Conductas que se repiten tanto para los combatientes de los grupos armados ilegales como para los agentes del Estado, incluyendo también para estos últimos los delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, sino con la intención del beneficio personal y el enriquecimiento, catalogados como delitos comunes. En el caso de los agentes del Estado, por su condición de garantes del Estado de derecho y por su investidura, se excluyen de los tratamientos penales diferenciados los “delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”¹³¹, conductas ajenas a los delitos políticos.

Por su parte, jurisprudencialmente se ha señalado que a pesar de que el listado definitivo de graves violaciones a los derechos humanos es dinámico y se encuentra en construcción, la Corte Constitucional considera como graves violaciones a los Derechos Humanos para tener en cuenta a la hora de determinar las conductas no amnistiables, ni indultables, ni susceptibles de renuncia incondicionada a la persecución penal:

“a) las ejecuciones extrajudiciales, b) las desapariciones forzadas, c) la tortura; d) el genocidio; e) el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; f) la detención arbitraria y prolongada; g) el desplazamiento forzado; h) la violencia sexual contra las mujeres y i) el reclutamiento forzado de menores”¹³².

¹³¹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Artículo 45. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036543> [Con acceso el 04/07/2019].

¹³² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579/13. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 2013. Pág. 261. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm> [Con acceso el 24/05/2019].

Asimismo, la Corte Constitucional señala unos criterios a tener en cuenta frente a este tipo de conductas:

“Existe una estrecha relación entre las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues dentro del listado de conductas constitutivas de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio se abarcan todas las conductas que se han reconocido como graves vulneraciones a los derechos humanos, aunque se requiera a su vez de otra serie de elementos: sistematicidad o generalidad para el caso de los crímenes de lesa humanidad, intención de exterminar un grupo en el caso del genocidio y nexos con el conflicto armado en el caso de los crímenes de guerra”¹³³.

A partir de estos parámetros legislativos, constitucionales y jurisprudenciales, conforme al derecho internacional, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y por ende de nuestro ordenamiento jurídico, al determinar las conductas no amnistiables, ni indultables, ni susceptibles de renuncia incondicionada a la persecución penal, estos límites permiten que a pesar de estar enmarcados en un escenario transicional, igualmente se van a garantizar los derechos de las víctimas y asegurar el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar.

Por otra parte, en la sentencia C-578/02 en la cual la Corte Constitucional hizo la revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL", se señaló lo siguiente:

“Según el artículo 17 del Estatuto, las reglas sobre inadmisibilidad tienen una excepción cuando el Estado no quiere o no puede investigar o juzgar, lo cual plantea la inquietud de cuál es la relación de dicha norma con la

¹³³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579/13. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 2013. Pág. 267. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm> [Con acceso el 24/05/2019].

potestad del Estado colombiano de conceder amnistías o indultos “por delitos políticos” en ejercicio de las competencias que le son propias cuando se presenten “graves motivos de conveniencia pública” (artículo 150, numeral 17, CP.). Además, de conformidad con la regla establecida en el artículo 20 del Estatuto, en el evento en que un Estado haya otorgado una amnistía, un indulto, un perdón judicial, o cualquier otro beneficio penal, en un proceso adelantado por la jurisdicción nacional, a favor de una persona cuya responsabilidad penal vaya a ser examinada por la Corte Penal Internacional, ésta no la procesará de nuevo, a menos que los procedimientos internos hayan tenido como propósito el sustraer a la persona de la justicia”¹³⁴.

De lo anterior se infiere que la potestad estatal de conceder amnistías, indultos y tratamientos penales diferenciados se adecua a los parámetros de la Corte Penal Internacional y de su Estatuto, siempre y cuando, la aplicación de estas medidas no impliquen la sustracción del deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional consagrados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y que son de competencia de la Corte Penal Internacional: “a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión”¹³⁵, y desarrollados en los artículos 6, 7 y 8 del mismo Estatuto. Conductas que como lo hemos reseñado en los párrafos anteriores, se encuentran reflejadas en cada una de las normas citadas y jurisprudencias analizadas.

Por su parte, encontramos en el instrumento internacional denominado como “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.”, que se advierte claramente que así se busque alcanzar un acuerdo de paz y favorecer la

¹³⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-578/02. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 2002. Pág. 102. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm> [Con acceso el 25/05/2019].

¹³⁵ CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma. Artículo 5. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html [Con acceso el 25/05/2019].

reconciliación, a la hora de acudir a la amnistía y demás figuras de clemencia judicial, deberán existir límites para los autores de delitos graves conforme al derecho internacional, quienes no podrán gozar de beneficios judiciales, mientras no se satisfaga con las obligaciones de “investigaciones rápidas, independientes e imparciales de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados”¹³⁶.

Cuando en este conjunto de principios se hace referencia a los delitos graves conforme al derecho internacional, comprende:

“Las graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud”¹³⁷.

Nuevamente se evidencia que el listado de conductas frente a las cuales no procede la amnistía, ni el indulto, ni mucho menos la aplicación de tratamientos penales diferenciados, se encuentra en sintonía con los desarrollos legislativos, constitucionales y jurisprudenciales que implico la implementación del punto 5 del Acuerdo Final, en lo específico en lo concerniente con la justicia.

¹³⁶ COMISIÓN DERECHOS HUMANOS ONU. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Principio 19. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=e/cn.4/2005/102/add.1 [Con acceso el 25/05/2019].

¹³⁷ *Ibíd.* Pág. 6.

En este mismo sentido, encontramos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es ajeno a estos lineamientos jurídicos frente a las conductas amnistiables y no amnistiables, así como a las obligaciones estatales frente a la investigación, juzgamiento y sanciones de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, así como con los derechos de las víctimas. Es por ello, que se analizaron dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que brindan un análisis a la luz del control de convencionalidad sobre dos leyes de amnistía que se concedieron en El Salvador y el Perú a principios de la década de los 90 del siglo pasado.

En la sentencia “Barrios altos vs Perú” del 14 de marzo de 2001, la Corte calificó lo que se denomina como leyes de autoamnistía como “manifiestamente incompatibles con la Convención Americana, y desprovistas, en consecuencia, de efectos jurídicos, no tienen validez jurídica alguna a la luz de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”¹³⁸ ya que se advierte que es contrario a la Convención no respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos. Es por ello que en esta sentencia de la Corte sentó un precedente judicial que ha sido acogido en otras sentencias el cual consagra que:

“...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones

¹³⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Pág. 4. Disponible en: 2019: http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=267 [Con acceso el 25/05/2019]

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”¹³⁹.

De lo anterior, se reafirma la imposibilidad del Estado de conceder amnistías por graves violaciones de los derechos humanos, tipificando incluso algunas conductas, que concuerdan con lo señalado en la normatividad y jurisprudencia que es objeto de estudio en este trabajo; igualmente se insiste en que conforme con lo estipulado en el Derecho internacional de los derechos humanos y en el Derecho penal internacional, que constituye una obligación de los Estados “la tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores”¹⁴⁰.

Por su parte, la sentencia *Mozote vs Salvador* del 25 de octubre de 2012, que también significó un hito jurisprudencial ya que al realizar un análisis de convencionalidad de una ley de amnistía que surgió de la finalización de una guerra civil y de su respectivo acuerdo de paz, brindó otro precedente judicial acorde con nuestro caso de investigaciones ya que esta sentencia estipula unos lineamientos a la hora de entrar a determinar la compatibilidad o no de una ley de amnistía o de un tratamiento penal diferenciado con la misma Convención, teniendo como particularidad un contexto de conflicto armado interno y de acuerdos de paz.

La sentencia reitera que “según el Derecho Internacional Humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz”¹⁴¹. Es así que cita el artículo 6.5 del Protocolo II

¹³⁹ *Ibíd.* Págs. 15.

¹⁴⁰ *Ibíd.* Pág. 3.

¹⁴¹ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Pág. 117. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=229&lang=en [Con acceso el 26/05/2019]

adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, referenciado anteriormente en este trabajo y prevé que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto”¹⁴².

Es decir, que a la vez que la Corte contempla la posibilidad de conceder amnistías, deja claro que a la luz del derecho internacional humanitario, estas no pueden ser absolutas, ya que como se ha reiterado en varias ocasiones existe la “incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados”¹⁴³. Es por ello que la Corte reitera que se deben incorporar en estas iniciativas legislativas en el marco de procesos como el nuestro, los estándares fijados por esta Corte, así como por el derecho internacional en su conjunto, en lo referente a la obligación de los estados de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Asimismo la Corte en esta sentencia reitera el precedente judicial, si no se cumple lo señalado en los renglones anteriores, de calificar como “inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”¹⁴⁴, sin embargo, sobre la posibilidad de otorgar amnistías en el marco de un conflicto armado interno, señala la Corte que:

“...esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, “las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello” no podrán estar cubiertas por una amnistía. Por

¹⁴² Ibid. Pág. 117.

¹⁴³ Ibid. Pág. 116-117.

¹⁴⁴ Ibid. Pág. 116.

consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de crímenes contra la humanidad”¹⁴⁵.

Es decir, mientras los estados cumplan con sus obligaciones estatales en materia de justicia, satisfagan los derechos de las víctimas y se excluyan de las leyes de amnistías, indultos y de los tratamientos penales diferenciados como la renuncia a la persecución penal, las conductas que se han calificado como no amnistiables y que se encuadran dentro de los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, así como de la toma de rehenes y otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, entre otros, es posible concederlas.

En consecuencia, se puede señalar que los desarrollos legislativos, constitucionales y jurisprudenciales que signifique la implementación del Acuerdo Final en lo concerniente a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado, a la luz del derecho internacional, es acorde y cumplen en dejar muy bien delimitado cuales son los alcances y límites a la hora de acudir a estos mecanismos judiciales en el marco de la Justicia Transicional.

6.2 El régimen de condicionalidad y la reparación integral de las víctimas

El acceso, goce y permanencia de las prerrogativas, beneficios e incentivos concedidos en materia de tratamientos especiales de justicia para quienes se someten o comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden tener

¹⁴⁵ Ibíd. Pág. 118.

un carácter incondicional, ya que esto significaría el desconocimiento sistemático de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como de la obligación internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Es por ello, que se definió para lo relacionado con el ingreso y permanencia de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, unos parámetros o condiciones de carácter integral y comprensivo, ya que como contrapartida para gozar de los diferentes tratamientos especiales, tales como el régimen sancionatorio especial previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, así como su mantenimiento, incluidos los tratamientos penales especiales, los beneficios, las renunciaciones, los derechos y las garantías previstas en dicho instrumento, estos deben estar supeditados al aporte efectivo y proporcional que se haga en lo concerniente con la contribución a la verdad, a la reparación y a la no repetición, no solo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sino ante todo el Sistema Integral y sus diferentes mecanismos como lo son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En el Acuerdo Final ya se señalaba que era necesario entender que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición integraban un Sistema, por lo tanto no podían verse de manera separada, aislada, por ello cada uno de estos mecanismos está conectado a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos a la hora de acceder a los tratamientos especiales de justicia, acceso condicionado en el compromiso del compareciente con el reconocimiento de responsabilidad y de la verdad.

Lo anterior fue constitucionalizado en el Acto Legislativo 01 de 2017, cuando señala que “para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJNRN) es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”¹⁴⁶, condiciones que deberán ser verificadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para evaluar el cumplimiento de estas y así determinar la permanencia o no del tratamiento especial de justicia.

La ley 1820 de 2016 señaló para los integrantes de las FARC-EP como requisito para ser cobijado por un beneficio penal como lo es la amnistía, era necesario la dejación de armas y la suscripción de un acta comprometiéndose a no volver a utilizarlas para atacar el régimen constitucional y legal vigente, sometiéndose ante la Jurisdicción Especial para la Paz, etc.; igualmente los integrantes de las FARC-EP encarcelados al suscribir el acta de compromiso, al igual que los primeros, quedaban a disposición de la Jurisdicción Especial para Paz bajo el régimen de condicionalidad con el compromiso de comparecer ante esta o cualquier otro mecanismo que integra el Sistema, de no hacerlo perderían el derecho a que les apliquen el tratamiento especial de justicia.

En el mismo sentido, la Ley Estatutaria de la JEP, en su artículo 20 reglamento el régimen de condicionalidad, reiterando que para gozar de “el tratamiento especial de la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”¹⁴⁷, además señala que en el caso de las FARC-EP, el tratamiento

¹⁴⁶ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 5. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 25/04/2019].

¹⁴⁷ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Artículo 20. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036543> [Con acceso el 04/07/2019].

especial de justicia está condicionado a la verificación del cumplimiento de la entrega de las armas, en la obligación de contribuir el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y a la entrega de los menores de edad. Igualmente se insiste que el incumplimiento intencional del régimen de condicionalidad o de las sanciones impuestas por la JEP, son causales para que esta evalúe y verifique si procede o no a la pérdida parcial o total de todos los tratamientos especiales de justicia. En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-080/18 dijo:

“El incumplimiento del régimen de condicionalidad, en consecuencia, no conlleva necesariamente a la exclusión de la JEP, sino que la jurisdicción graduará la pérdida de los diferentes tratamientos especiales, pues como lo ha dicho esta corporación, “el incumplimiento de las condiciones no solo impide acceder a los tratamientos diferenciales, sino que también implica la pérdida, no de la competencia de la JEP, sino de los tratamientos especiales, con sujeción al principio de gradualidad.”¹⁴⁸

De lo anterior se desprende, que la autoridad competente a la hora de determinar las consecuencias derivadas del incumplimiento parcial o total del régimen de condicionalidad, es la misma Jurisdicción Especial para la Paz, la cual deberá actuar bajo “los criterios de integralidad, proporcionalidad y gradualidad, además teniendo en cuenta las características específicas y la distinta responsabilidad de los agentes del Estado y de los miembros de grupos armados ilegales”¹⁴⁹.

Los incumplimientos al régimen de condicionalidad pueden afectar el tratamiento penal especial, el tratamiento penitenciario especial, la extinción de la

¹⁴⁸ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 270. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁴⁹ Ibíd. Pág. 271.

responsabilidad disciplinario o administrativa, la exención de indemnizar, la garantía de no extradición o el tratamiento especial en materia de inhabilidades.

La normatividad como la jurisprudencia es reiterativa en señalar que como obligación de primer orden para acceder a un tratamiento especial previsto en el componente de justicia del Sistema Integral, los comparecientes tienen el compromiso ineludible de aportar verdad plena, que significa:

“Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición...Quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”¹⁵⁰. Art. 5.

Es de resaltar lo señalado en el artículo 33 de la ley 1820 de 2016 y que es extensible a otros beneficios otorgados a quienes se someten ante la JEP, que ser cobijado por estos, no “exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad”¹⁵¹, lo que evidencia la protección y garantía del derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad en su conjunto. Reiterando con esto que cualquier beneficio no es incondicional y además se encuentra supeditado a las contribuciones que hagan los victimarios frente a la restitución de los derechos de las víctimas a la verdad, es por ello y en virtud del principio de

¹⁵⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 5. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁵¹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Artículo 33. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030232> [Con acceso el 28/05/2019].

integralidad, que tanto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tienen la facultad para hacer comparecer a los beneficiarios de tratamientos especiales, además de acreditar ante la Jurisdicción Especial para la Paz sus aportes o incumplimientos, para que esta verifique si se está cumpliendo con el régimen de condicionalidad.

Por otra parte, la obligación de la reparación integral a las víctimas es una condición esencial para los cobijados por los tratamientos especiales, en concordancia con el principio acordado en el Acuerdo Final sobre tener a las víctimas en el centro de todos los mecanismos y medidas de justicia, es por esto que estas son de carácter individual, colectivo, así como de orden Estatal, ya que como se ha señalado anteriormente, es una obligación del Estado, garantizar los derechos de las víctimas, entre los que se encuentra el derecho a la reparación integral, es por ello, que en el Acto Legislativo 01 de 2017 en su artículo 18 se consagra que:

“La reparación será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los sujetos de especial protección constitucional”¹⁵².

Lo que obliga al Estado a asegurar, por medios razonables dentro de su alcance y en el contexto de un gran universo de víctimas y de una masividad de hechos victimizantes, que la verdad, la justicia, reparación y las medidas de no repetición,

¹⁵² CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 18. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 28/05/2019].

con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sean reconocidos y satisfechos. Obligación estatal que también debe estar dirigida a la concreción de medidas necesarias que faciliten que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto armado asuman su compromiso de contribuir de manera directa en la satisfacción de las víctimas y de la comunidad. Conforme a lo anterior, el mismo Acuerdo Final, contemplo una serie de medidas concretas que permitieran contribuir a la reparación de los daños causados entre las que se destacan:

“La participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG), la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación”¹⁵³.

Medidas que fueron reiteradas en el artículo 38 de la Ley Estatutaria de la JEP al señalar que “la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación”¹⁵⁴, en las que se contemplan, además de las reseñadas anteriormente, los reconocimientos tempranos de responsabilidad, los programas de reparación colectiva territorial, las medidas reparadoras de restitución de tierras, entre otras.

¹⁵³ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Publicado el 24 de noviembre de 2016. Págs. 178-179. Disponible en: <http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-112016NuevoAcuerdoFinal.pdf> [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁵⁴ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Artículo 38. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036543> [Con acceso el 04/07/2019].

La Corte Constitucional en la sentencia C-007/18 es clara en señalar que la “contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”¹⁵⁵, por ende el cumplimiento de la reparación integral es una de las obligaciones claves contraídas con este Sistema Integral por parte de los comparecientes, responder por los deberes frente a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una garantía para seguir disfrutando de los tratamientos especiales y de las sanciones propias del sistema, el incumplimiento frente a la reparación implicará que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre a verificar su gravedad y la consideración de si procede la pérdida parcial o total de estos.

Así mismo la sentencia C-080/18, al señalar que “la reparación integral consta de las siguientes medidas: la indemnización, la restitución, la satisfacción y la rehabilitación”¹⁵⁶, deja claro que quienes se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentran obligados a reparar a las víctimas como parte de las condiciones propias del régimen de condicionalidad, teniendo en cuenta la excepción que contempla en algunos casos uno de los tratamientos especiales, frente a la indemnización de los daños causados. Es el caso de cuando se otorga amnistía o la renuncia a la persecución penal a los agentes del estado, que se les:

“Exime a los responsables de la obligación de indemnizar a las víctimas y, por consiguiente, contra ellos no proceden acciones judiciales con ese fin. Sin embargo, de acuerdo con el artículo transitorio 18 conservan la obligación general de reparar a las víctimas a través de medidas no

¹⁵⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007/18. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera. 2018. Págs. 354-355. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁵⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 278. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

indemnizatorias, las cuales pueden consistir en obligaciones de reparación impuestas por la JEP en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”¹⁵⁷.

En este sentido, las demás medidas contempladas en materia de reparación integral tales como la restitución, rehabilitación y satisfacción, siguen siendo una obligación esencial a la hora de seguir cobijados con los tratamientos especiales y las sanciones propias del Sistema Integral. En palabras de la Corte Constitucional, la excepción a indemnizar:

“No configuran una liberación de la responsabilidad de los victimarios frente a las víctimas., teniendo en cuenta los siguientes elementos: (i) primero, que en el caso de los miembros de las FARC, la medida se encuentra precedida de la entrega de los bienes del grupo guerrillero, bienes que, a su turno, se encuentran destinados a la reparación; (ii) segundo, la limitación legal se refiere exclusivamente al patrimonio personal de los miembros de los grupos armados que participaron en el conflicto, de modo que si alguno de estos miembros actúa como testaferro del grupo como tal para ocultar sus bienes, no existe ningún título jurídico que impida perseguir los bienes correspondientes para reparar a las víctimas; (iii) por último, aunque efectivamente el Acto Legislativo 01 de 2017 dispone una liberación parcial de la responsabilidad de los victimarios frente a las víctimas, esta liberación opera únicamente frente al componente patrimonial de la reparación y no se extiende a los demás elementos de la misma, por lo cual, la contribución de los victimarios en estos otros frentes deberá aplicarse con mayor rigor”¹⁵⁸.

Por otra parte, el Acto Legislativo 01 de 2017, frente a las sanciones propias que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz, señala que estas tendrán “como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”¹⁵⁹, y

¹⁵⁷ Ibíd. Pág. 253.

¹⁵⁸ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-674/17. Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2017. Pág. 402. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁵⁹ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la

se tendrá en cuenta a la hora de imponerlas el cumplimiento del régimen de condicionalidad en materia de los aportes que hayan hecho los beneficiarios de los tratamientos especiales de justicia, en lo referente al reconocimiento de verdad y responsabilidad, reparación de las víctimas y su compromiso con las garantías de no repetición.

Según el artículo 127 de la Ley Estatutaria de la JEP, las sanciones que impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz son las propias, alternativas y ordinarias:

“...las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP; las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia; y, por último, las sanciones ordinarias se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad”¹⁶⁰.

Es importante señalar que así este modelo de sanciones sea diferente a la jurisdicción ordinaria y que tenga un enfoque restaurativo y reparador, no se suprime en ningún momento el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar, incluso con medidas efectivas y restrictivas de la libertad, lo que si cambia es que este estará apegado al cumplimiento del régimen de condicionalidad que en ultimas según el grado de satisfacción de los derecho de las víctimas, del compromiso con la reincorporación, la paz y la reconciliación, esto se expresara en las sanciones que se apliquen.

construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 13. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁶⁰ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 276. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

El abordaje de las sanciones obligatoriamente nos conduce al tema sobre tratamiento penal y penitenciario especial aplicable a los comparecientes y responsables de conductas no amnistiables, cuando procede una sanción propia o alternativa, ya que es importante señalar que cuando se impone una sanción ordinaria, se pierde cualquier tratamiento especial.

Frente a los miembros de la Fuerza Pública, señala tanto el Acto Legislativo 01 de 2017, la ley 1820 de 2016, así como la Ley Estatutaria de la JEP, que cuando la sanción implique la privación efectiva de la libertad, se respetará el fuero carcelario y se cumplirá en los establecimientos previstos para ellos, tales como Unidades militares o policiales, sanción que se debe cumplir a la par de las otras obligaciones que se asumen en materia de ofrecer verdad, asumir responsabilidad, reparar a las víctimas, comparecer ante cualquier mecanismo del Sistema Integral al que sea llamado, etc.

Por su parte, los exintegrantes de las FARC-EP purgaran sus sanciones en los espacios territoriales “que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”¹⁶¹, hoy denominados como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. También señala la normatividad y la jurisprudencia, que para los exintegrantes de las FARC-EP, el tiempo purgado en estas zonas desde el momento de su llegada hasta la imposición de la sanción será

¹⁶¹ OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Publicado el 24 de noviembre de 2016. Págs. 165. Disponible en: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-112016NuevoAcuerdoFinal.pdf> [Con acceso el 28/05/2019].

considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción, siempre y cuando “se hubieran realizado trabajos u obras, o actividades con contenido reparador”¹⁶².

Igualmente es importante señalar que para garantizar el cumplimiento de estas sanciones y se cumpla con su fin, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá:

“Un régimen penitenciario especial que involucre en su monitoreo no solo al Tribunal para la Paz, sino también a instancias especializadas de las Naciones Unidas, lo cual fue autorizado por el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017. El control penitenciario debe ser muy estricto y ejercerse por los organismos referidos, que deberán obrar con independencia e imparcialidad en la vigilancia del efectivo cumplimiento de la sanción”¹⁶³.

Régimen penitenciario que deberá tener en cuenta el carácter coercitivo de las restricciones de derechos y libertades, sin obviar que el enfoque general de estas sanciones es restaurativo y reparador, también tiene su pequeña carga de retribución, por ende, no debe ser visto como voluntario, sino apegado a las medidas impuestas en la sentencia por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Frente a la participación política, el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 contempla que en términos generales “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”¹⁶⁴, lo que deberá complementarse con lo

¹⁶² Ibid. 251.

¹⁶³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 291. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁶⁴ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Artículo 20. Disponible

señalado en el artículo 31 de la Ley Estatutaria de la JEP, que reza que “Será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz”¹⁶⁵, lo anterior es acorde con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del régimen de condicionalidad ya que según el grado de compromiso y aporte a los diferentes mecanismo del sistema integral en materia de reconocimiento de verdad, se goza o no de los tratamientos especiales en materia en participación política.

En el caso de sanciones propias que implique la restricción efectiva de la libertad, le corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz, establecer si el cumplimiento de la pena se puede compaginar con el ejercicio de los distintos derechos de participación política, siempre teniendo como criterios para la valoración los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como el deber estatal de sancionar efectivamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Por su parte, frente a las responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas, el cumplimiento del régimen de condicionalidad también garantiza la extinción de la investigación, acción y sanciones en esta materia, igualmente este efecto alcanza las investigaciones disciplinarias y administrativas. Es importante aclarar que las sanciones o investigaciones, incluidas las pecuniarias, deberán ser por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa del conflicto armado. El artículo 31 de la Ley Estatutaria de la JEP señala frente a las inhabilidades

en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2017.html [Con acceso el 28/05/2019].

¹⁶⁵ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Artículo 31. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036543> [Con acceso el 04/07/2019].

“impuestas como penas accesorias en providencias judiciales, así como las inhabilidades constitucionales y legales derivadas de las condenas penales y de las sanciones disciplinarias, están suspendidas”, lo que habilita tanto a los exintegrantes de las FARC-EP como a los miembros de la Fuerza Pública ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad, además de celebrar contratos con el Estado, a excepción de:

“Los responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, “no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control” (inc. 3º del par. del art. 122 C.P.), excepto la participación de los ex integrantes de las FARC-EP en los mecanismos de seguridad para el ejercicio de la política, prevista en el Acuerdo Final”¹⁶⁶.

Se reitera como lo hemos señalado anteriormente que el beneficio de estos tratamientos especiales en materia de responsabilidad disciplinaria, fiscal o administrativas, así como frente al régimen de inhabilidades, también se encuentra condicionado por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 01 de 2017, en lo relativo a las obligaciones que se derivan del régimen de condicionalidad.

En consecuencia, los responsables de conductas no amnistiabiles comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que se hayan comprometido con la dejación de armas, la reincorporación exitosa de los exguerrilleros, la paz y la reconciliación; el reconocimiento de su responsabilidad y la contribución al

¹⁶⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018. Pág. 269. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm> [Con acceso el 28/05/2019].

esclarecimiento de la verdad; la reparación integral de las víctimas; así como con las garantías de no repetición, serán beneficiarios de una serie de tratamientos especiales tales como sanciones propias, tratamiento penal y penitenciario especial; participación en política; el cumplimiento de función pública, la posibilidad de suscribir contratos con el Estado y ejercer profesión u oficio; la extinción de la responsabilidad disciplinaria, fiscal o administrativa; y la extinción de la obligación de indemnizar, prerrogativas que se derivan del cumplimiento del régimen de condicionalidad.

7. CONCLUSIONES

En relación a la pregunta de investigación “**¿Cómo ha sido la aplicación del régimen de condicionalidad y su relación con la obligación de los responsables de conductas no amnistiabiles de reparar integralmente a las víctimas en el marco de la aplicación de la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz?**”, se concluye que aunque es prematuro señalar como será la aplicación del régimen de condicionalidad y su relación con la reparación integral en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, por el poco tiempo de funcionamiento, del análisis de los desarrollos normativos y jurisprudenciales, se puede inferir una relación integral entre este régimen y la reparación integral, ya que para todos los comparecientes ante esta jurisdicción transicional, es de obligatorio cumplimiento responder por cada una de las condiciones que mandata este régimen, entre la que destaca el compromiso por satisfacer los derechos de las víctimas, es así como el acceso y permanencia dependerá del cumplimiento y su gradualidad que exista con los compromisos que adquieran los responsables de conductas no amnistiabiles, es decir, a mayor compromiso, serán mucho más amplios y beneficiosos para el compareciente los tratamientos especiales de los que gozará, sin que esto implique desconocer la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario o los derechos de las víctimas.

En lo que se refiere a la hipótesis “**La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz implico unas adecuaciones de tipo normativo y constitucional del ordenamiento jurídico interno, donde se debió ponderar la justicia y la paz, sin sacrificar ni la una ni la otra, con el objetivo de transitar de un escenario de conflicto armado hacia un nuevo escenario de construcción de paz, por medio del cual se garantizará el cumplimiento, tanto de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, así como de las**

obligaciones adquiridas a partir del sometimiento al régimen de condicionalidad por parte de los responsables comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz por sus conductas no amnistiables, su cumplimiento o no, determinará que estos gocen o no de los tratamientos especiales en el marco de la justicia transicional, teniendo como límites los impuestos por el derecho internacional, tales como las prohibiciones de amnistiar graves violaciones a los DDHH, crímenes de guerra y lesa humanidad; la obligación de reparar integralmente a las víctimas; así como el deber estatal de investigar, juzgar, sancionar, entre otros”, esta se cumple ya que se pudo observar en los hallazgos que existe un mandato normativo y jurisprudencial, en concordancia con el derecho internacional, que orienta claramente el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los demás componentes que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en lo atinente a la reparación integral de las víctimas y del régimen de condicionalidad aplicable a los responsables de conductas no amnistiables, que garantizará el cumplimiento por parte del Estado de su deber de investigar, juzgar y sancionar; no amnistiar graves violaciones a los Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas, sin la necesidad de sacrificar la paz ni la justicia.

Con respecto al objetivo general **“Analizar el régimen de condicionalidad y su relación con la obligación de los responsables de conductas no amnistiables de reparar integralmente a las víctimas en el marco de la aplicación de la justicia transicional en la jurisdicción especial para la paz”**, se concluye con base en el análisis del desarrollo legislativo, jurisprudencial y constitucional de la justicia transicional, que existe una simbiosis entre la reparación integral de las víctimas y el régimen de condicionalidad, ya que garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, por parte de los responsables de conductas no

amnistiables, es una condición sin la cual no sería posible gozar de los tratamientos especiales contemplados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

En lo referente al primer objetivo específico **“Explicar las conductas no amnistiables y los límites impuestos por el derecho internacional en la aplicación de la justicia transicional”**, se evidencia que conforme a lo señalado por la normatividad y la jurisprudencia en la materia, así como por los límites impuestos por el derecho internacional en los instrumentos internacionales consultados, se concluye que se prohíbe conceder amnistías, indultos y tratamientos especiales por las conductas que impliquen crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, acceso carnal violentos y otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado, sustracción de menores, desaparición forzada, tortura, toma de rehenes y otra privación grave de libertad, ya que existe la obligación para el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables implicados en la comisión de estos delitos, además de garantizar que se repare integralmente a las víctimas.

En lo que respecta al segundo objetivo específico **“Establecer en que consiste el régimen de condicionalidad aplicable a los responsables de conductas no amnistiables que comparecen a la jurisdicción especial para la paz”**, se concluye que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, serán beneficiarios de una serie de tratamientos especiales tales como sanciones propias, tratamiento penal y penitenciario especial; participación en política; el cumplimiento de función pública, la posibilidad de suscribir contratos con el Estado y ejercer profesión u oficio; la extinción de la responsabilidad disciplinaria, fiscal o administrativa; y la extinción de la obligación de indemnizar, prerrogativas que se derivan del cumplimiento del régimen de condicionalidad, consistente en dejar las

armas, reincorporarse a la sociedad, coadyuvar en la construcción de la paz y la reconciliación; igualmente deberán comprometerse con el reconocimiento de sus responsabilidades y la contribución al esclarecimiento de la verdad; la reparación integral de las víctimas; así como con las garantías de no repetición.

Finalmente, con el tercer objetivo específico **“Identificar las obligaciones que asumen los responsables de conductas no amnistiabiles que comparecen a la jurisdicción especial para la paz frente a la reparación integral de las víctimas”**, se concluye que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto armado deben asumir un compromiso de contribuir de manera directa en la satisfacción de las víctimas y de la comunidad con medidas reparadoras tales como la indemnización, la restitución, la satisfacción y la rehabilitación. Estas medidas deben contemplar un enfoque restaurativo que se concreta en acciones tales como los reconocimientos tempranos de responsabilidad, las medidas reparadoras de restitución de tierras, los programas de reparación colectiva territorial consisten en obras de reconstrucción de infraestructura, participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal y material explosivo, participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas, reforestación, entre otros, igualmente deberán contribuir con la verdad y reconocimiento de responsabilidad, garantizar la no repetición, y en algunos casos con la indemnización.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

8.1 PERSONAL INVESTIGATIVO

Los investigadores para este trabajo de grado serán Oscar Andrés Mosquera Córdoba y Felipe Sanmiguel Ortiz, ambos egresados no graduados de la facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira.

8.2 RECURSOS MATERIALES

ELEMENTO	CANTIDAD/ DETALLES	VALOR
Portátil con internet	1	1.000.000
Impresiones y fotocopias	Avances, normas, jurisprudencia, Etc.	60.000
Papelería	Resmas, lapiceros, carpetas, Etc.	40.000
Bibliografía	Libros, suscripción a revistas científicas, bases de datos, Etc.	300.000
Transporte	Asistencia Universidad y bibliotecas	100.000
TOTAL		1.500.000

8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES

Esta investigación tendrá como fuentes de información las siguientes entidades que participaran indirectamente en el desarrollo de la misma:

- Corte Constitucional
- Congreso de la Republica
- Jurisdicción Especial para la Paz

8.4. RECURSOS FINANCIEROS

Se participó de la convocatoria de un fondo de administración especial del ICETEX para Comunidades Negras que respalda trabajos de grado hasta por 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes.

9. CRONOGRAMA

DETALLES ACTIVIDAD	MESES						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Construcción del anteproyecto	X	X	X				
Revisión bibliográfica	X	X	X	X			
Revisión metodológica	X	X	X	X			
Selección de información	X	X	X	X			
Sistematización de la información				X	X	X	
Análisis de la información				X	X	X	
Presentación trabajo de investigación							X
Sustentación trabajo de investigación							X

BIBLIOGRAFÍA

- AFANADOR ULLOA, Miguel Ángel. Amnistías e indultos: la historia reciente (1948-1992). ESAP – Centro de publicaciones. Edición príncipe. Bogotá. 1993.
- AGUILERA PEÑA, Mario. Refundemos la Nación: Perdonemos a delincuentes Políticos y comunes. En: Revista Análisis Político, número 76. Bogotá. 2012.
- AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela. Justicia de Transición. Bogotá, Temis. 2010.
- AMBOS, Kai, (Coord.). Justicia de transición y constitución: análisis a la sentencia C-579 de 2013 de la corte constitucional. Editorial Temis. 2014.
- AMBOS, Kai; CORTÉS RODAS Francisco y ZULUAGA, Jhon, (Coord.). Justicia transicional y derecho penal internacional. Siglo del Hombre Editores, Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (cedpal) de la Georg-August-Universität Göttingen, Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Fundación Konrad Adenauer-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica y Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation. 2018.
- ARANGO ZULUAGA, Carlos. FARC Veinte años: De Marquetalia a la Uribe. Ediciones Aurora. Bogotá. 2016.
- ARANGO ZULUAGA, Carlos. Los diálogos de paz: De Cravo Norte a Tlaxcala. Bogotá. 1992.
- ARDILA, Dorys. Justicia Transicional: Principios básicos. Escola de Cultura de Pau. Barcelona.
- ARIAS MEJIA, Juan Camilo. Entre la sangre de las armas y los gritos en la plaza. Una breve mirada al conflicto colombiano. En: Revista Kabái, número 17. Universidad Nacional De Colombia. Medellín. 2008.

- BECERRA, Jairo (Editor). Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia. Universidad Católica de Colombia. 2016.
- BOLAÑOS ALCANTARA, José Víctor. Problema agrario y lucha armada en Colombia: El caso de las FARC-EP. Universidad Nacional Autónoma De México. 2018.
- CALVO OCAMPO, Fabiola. EPL Diez hombres, un ejército, una historia. Ecoe Ediciones. Bogotá. 1985.
- CARVAJAL PARDO, Alejandro. Justicia restaurativa: construyendo un marco englobador para la paz. Criterio Jurídico. 2010.
- CHICHÓN ALVAREZ, Javier. Modelos de persecución penal y Justicia Transicional en Iberoamérica. Algunas enseñanzas jurídicas internacionales tras los procesos de transición iberoamericanos: impunidad fáctica, amnistías e indultos. En Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1938-2008). Ediciones Documenta Balear: Palma de Mayorca. 2009.
- COMISIÓN DERECHOS HUMANOS ONU. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Revisado en marzo de 2019: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=e/cn.4/2005/102/add.1
- COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Ediciones Desde abajo. 2015.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 01 de 2012. Diario Oficial 48508 de 31 de julio de 2012.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1820. Diario Oficial 50.102 de 30 de diciembre de 2016.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2017. Diario Oficial 50.196 de 4 de abril de 2017.

- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1922 de 2018. Diario Oficial 50.658 de 18 de julio de 2018.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1957 de 2019. Diario Oficial 50.976 de 6 de junio de 2019.
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-578/02. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 2002.
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579/13. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 2013.
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-674/17. Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2017.
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007/18. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera. 2018.
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-080/18. Magistrado Sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo. 2018.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Revisado en marzo de 2019:http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=267
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Revisado en marzo de 2019:
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=229&lang=en
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Revisado en marzo de 2019.
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
- CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Revisado en marzo de 2019:

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html

- DE GREIFF, Pablo. Justicia y reparaciones. En Justicia transicional: manual para América Latina / Editor Félix Reátegui. Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia transicional. 2011.
- DE GREIFF, Pablo. "Theorizing Transitional Justice", Transitional Justice. Nomos vol. LI. New York University Pres. 2012.
- GOMEZ ISA, Felipe. El Derecho a la Memoria. Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, Bilbao. 2006.
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Julián; RENTERÍA CASTRO, Luz Zoraida y PINEDA ECHEVERRI, Sandra Milena. Análisis de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Risaralda desde el punto de vista de la justicia transicional a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Universidad Libre Seccional Pereira. 2015.
- FAJARDO MONTAÑA, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá.
- GRUPO MEMORIA HISTORIA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Imprenta Nacional. Bogotá. 2013. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf> [Con acceso el 24/04/2019].
- MEDINA GALLEGU, Carlos. FARC-EP Notas para una historia política (1958-2008). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2009.
- MEDINA GALLEGU, Carlos. FARC-EP Y ELN Una historia política comparada (1958-2006). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2010.
- MESSUTI, Ana. Un deber ineludible. La obligación del Estado de Perseguir penalmente los crímenes internacionales. EDIAR: Buenos Aires. 2013.

- MOLANO BRAVO, Alfredo. Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. 2015.
- NARVÁEZ JAIMES, Ginneth Esmeralda. La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2012. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/9917/1/468440.2012.pdf> [Con acceso el 24/04/2019].
- OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Publicado el 24 de noviembre de 2016. Revisado en febrero de 2019. Disponible en web: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>
- RAMÍREZ RAMÍREZ, Jonathan; PIEDRAHITA BOTERO, Luz Ángela y RAMÍREZ GARCÍA, Carmenza Adriana. Alcance del modelo de justicia transicional, en las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Universidad Libre Seccional Pereira. 2016.
- REÁTEGUI, Félix (editor). Justicia transicional: manual para América Latina / Editor Félix Reátegui. Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia transicional. 2011.
- RESTREPO MARTÍNEZ, Alex Fermín. Posibles retos de la sociedad civil y el gobierno en la aplicación al proceso de paz y el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Universidad Libre Seccional Pereira. 2015.
- ROMERO OSPINA, Roberto. Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bogotá. 2012.
- SANCHEZ GÓMEZ, Gonzálo. Raíces históricas de la amnistía o de las etapas de la guerra en Colombia. En: Ensayos de historia social y política del siglo XX. Bogotá. El Ancora. 1985.

- TEITEL, Ruti. Genealogía de la Justicia Transicional, Harvard Human Rights Journal, Cambridge. 2003.
- TUREGANO MANSILLA, Isabel (Editora). La Justicia de Transición: Concepto, instrumentos y experiencias. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario. 2014.
- UPRIMNY YEPES, Rodrigo; SÁNCHEZ DUQUE, Luz María y SÁNCHEZ LEÓN, Nelson Camilo. Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. 2014.
- VAN ZYL, Paul. Promoviendo la justicia transicional en sociedades post conflicto. En Justicia transicional: manual para América Latina / Editor Félix Reátegui. Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia transicional. 2011.
- VEGA CANTOR, Renán. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. En: Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos Críticos. Ediciones Gentes del Común. Bogotá. 2015.
- ZAPE AYALA, Karen Stephany y ARBOLEDA SALAZAR, Mario. Condiciones de las teorías de la pena que permiten la prevención de conductas punibles en marco del posconflicto en Colombia. Universidad Libre Seccional Pereira. 2017.

ANEXOS

1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

1.1 Matriz de análisis categorial # 1

PROYECTO: DESARROLLO LEGISLATIVO, JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

OBJETIVO DE LA MATRIZ:

- Explicar las conductas no amnistiables y los límites impuestos por el derecho internacional en la aplicación de la justicia transicional.

FECHA: _____ **ELABORADOR DE LA MATRIZ:** _____

ACTOS LEGISLATIVOS Y LEYES					
CATEGORIA	A.L. 01/12	A.L. 01/17	L. 1820/16	L. 1957/19	Acuerdo de Paz
Amnistía e Indulto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	“La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas	“...los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la	“A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible”. A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un

			<p>de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional y la finalización de las hostilidades”. Art. 7.</p>	<p>justicia, se otorgará la Amnistía más amplia posible ...”. Art 40.</p> <p>“La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral...”. Art 41.</p> <p>“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado</p>	<p>acuerdo final de paz, según lo establecido en el numeral 10, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible”. Págs. 147-148.</p>
--	--	--	---	--	--

				parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.” Art 82.	
Tratamientos diferenciados	No se pronunció al respecto	“El componente de Justicia del SIVJRNR también se aplicará respecto de los Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garantes de derecho por parte del Estado”. Art. 17.	“Los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del Estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo de conformidad con esta ley”. Art. 9.	“La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado, propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera”. Art. 45.	“...respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH. En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la

					fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes”. Pág. 157.
Conductas Amnistiabiles o de aplicación tratamiento diferenciado	Aunque el Artículo 67 transitorio de la CP fue derogado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2017, señalaba lo siguiente: “Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados	No se pronunció al respecto	Se les aplicará la amnistía de IURE a los siguientes delitos: “Rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos”. Art. 15.	Los hechos o conductas para las que procede la aplicación de amnistía, indulto o la renuncia a la persecución penal se concederán conforme: “...a lo indicado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, según lo determinado	“...se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz...Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por

	<p>conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.</p>		<p>“...son conexos con los delitos políticos los siguientes: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad</p>	<p>en la Ley 1820 de 2016, en el Decreto 277 de 2017, en el Decreto 1252 de 2017 y en esta ley”. Art. 40.</p>	<p>ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos...” Pág. 155.</p>
--	--	--	---	--	--

			material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al		
--	--	--	--	--	--

			<p>sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; y espionaje".</p> <p>Art. 16.</p> <p>La Sala de Amnistía e Indulto tendrá como criterios de conexidad con el delito político para conceder amnistías:</p> <p>"a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o</p> <p>c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”. Art. 23.</p>		
Conductas no Amnistiabiles o de no tratamiento diferenciado	<p>Aunque el Artículo 67 transitorio de la CP fue derogado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2017, señalaba lo siguiente:</p> <p>“No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática...”</p>	<p>A la hora de señalar los criterios de investigación de los máximos responsables se señalan los delitos:</p> <p>“...que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. Art. 3.</p>	<p>Frente a los combatientes de grupos armados ilegales:</p> <p>“a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el</p>	<p>Frente a los integrantes de grupos armados ilegales:</p> <p>“Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de</p>	<p>“No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición</p>

			<p>desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables;</p> <p>b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener</p>	<p>menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.</p> <p>Frente a los agentes del Estado:</p> <p>“1) Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.</p> <p>2) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.</p> <p>3) Delitos contra el servicio, la disciplina,</p>	<p>forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.</p> <p>Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía”.</p> <p>Pág. 156.</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>beneficio personal, propio o de un tercero”. Art. 23.</p> <p>Frente a los agentes del Estado:</p> <p>“...delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, ni de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza</p>	<p>los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”. Art. 45.</p>	
--	--	--	--	--	--

			Pública, contemplados en el Código Penal Militar”. Art. 46.		
Beneficiarios	“...tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo”. Art. 66.	Respecto de los combatientes: “...a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional”. Art. 5. Por parte de los agentes del Estado: “...toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como Miembro de las Corporaciones Públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus Entidades Descentralizadas Territorialmente y por Servicios, que hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas, relacionadas directa o indirectamente con el	En cuanto a los combatientes se aplicará “a los miembros de un grupo armado en rebelión...que haya firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, en los términos que en esta ley se indica”. Art. 3. Se cobija a civiles involucrados en “conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica”. Art. 3. A los agentes del Estado “quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa,	“...combatientes de los grupos armados al margen de la ley, la JEP solo se aplicará a quienes hayan sido miembros de las organizaciones que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional. También se aplicará a las personas que hayan sido acusadas en providencia judicial o condenadas en cualquier jurisdicción por vinculación a dicho grupo, aunque los afectados no reconozcan esa pertenencia”. Art. 63. “...agentes del Estado que hubieren cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado...Respecto de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la competencia de la Jurisdicción	“Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional”. Pág. 153. “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad”. Pág. 155.

		<p>conflicto armado”. Art. 5.</p> <p>Los terceros:</p> <p>“Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen...”. Art. 16.</p>	<p>con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. Art. 45.</p> <p>También cobija a “terceros que se presenten voluntariamente a la JEP y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la esta, cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos”. Art. 28.</p>	<p>Especial para la Paz únicamente comprenderá a quienes hayan manifestado voluntariamente su intención de someterse a la JEP”. Art. 63.</p>	<p>“...El componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste”. Pág. 154.</p> <p>“También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conflicto, que no sean resultado de coacciones”. Pág. 153.</p>
Autoridad competente	<p>“...Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los</p>	<p>La Sala de Amnistía o Indulto otorga amnistía o indulto a las personas procesadas o condenadas por los delitos estipulados como amnistiables.</p>	<p>La amnistía de IURE la concede el juez de ejecución de penas, la Fiscalía general de la Nación y el presidente de la Republica mediante un acto administrativo.</p>	<p>“La Sala de amnistía o indultos aplicará estos tratamientos jurídicos especiales por los delitos amnistiables o indultables...En el evento de que la petición de indulto o amnistía verse sobre conductas no</p>	<p>“La Sala de amnistía o indultos aplicará estos tratamientos jurídicos especiales por los delitos amnistiables o indultables”. Pág. 163.</p>

	deberes estatales de investigación y sanción”. Art. 66.	La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas frente a las conductas de los agentes del Estado y terceros.	En los casos que no sean objeto de una amnistía de IURE, la decisión dependerá de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concederá a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal, como uno de los mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado.	indultables ni amnistiables, la Sala de Amnistía e Indulto remitirá el caso a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad”. Art 81. “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tendrá la función de conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal, como uno de los mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley”. Art 43.	La Sala de definición de situaciones jurídicas definirá la situación jurídica las personas que no serán objeto de amnistía o indulto. Pág. 163.
Extradición	No se pronunció al respecto	“No se podrán conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el	No se pronunció al respecto	“No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición pasiva respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo,	“No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este

		conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátase de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia”. Art. 19.		trátase de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia”. Art. 152.	hasta la finalización del mismo, trátase de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia”. Pág. 175.
--	--	---	--	--	---

JURISPRUDENCIA					
CATEGORIA	C-578/02	C-579/13	C-674/17	C-007/18	C-080/18
Amnistía e Indulto	Según la Corte Constitucional en el Estatuto de Roma no se mencionan específicamente las amnistías, indultos o perdones judiciales: “Según el artículo 17 del Estatuto, las reglas sobre inadmisibilidad tienen una	“El pilar reconocido implica el deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en los casos de conflicto armado interno debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de	No se pronunció al respecto	“Las amnistías son, entonces, medidas compatibles, prima facie, con el DIH, específicamente, en los conflictos no internacionales, pues persiguen que las personas que participaron en la confrontación no sean castigadas por el solo hecho de portar las armas, lo que haría muy difícil el proceso de reconciliación. De	“...lo amnistiable de acuerdo con la Constitución es el delito político, el cual ha sido entendido como un delito que reúne las siguientes características: (i) es atribuible a grupos que se levantan en armas para afectar el régimen constitucional y legal; (ii) tiene, en

	<p>excepción cuando el Estado no quiere o no puede investigar o juzgar, lo cual plantea la inquietud de cuál es la relación de dicha norma con la potestad del Estado colombiano de conceder amnistías o indultos “por delitos políticos” en ejercicio de las competencias que le son propias cuando se presenten “graves motivos de conveniencia pública” (artículo 150, numeral 17, CP.). Además, de conformidad con la regla establecida en el artículo 20 del Estatuto, en el evento en que un Estado haya otorgado una amnistía, un indulto, un perdón judicial, o</p>	<p>Ginebra que permite la aplicación de amnistías generalizadas, cambia los criterios de interpretación de esta garantía, pues señala que <i>“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”</i>.</p> <p>Esta norma cambia el contexto de la obligación de investigar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pues la concentra en una serie de delitos específicos. En este sentido, tal como</p>		<p>acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), esta norma también cobija los indultos (perdón de la condena), aunque, para efectos de simplificar la redacción, el Protocolo II solo se refiera a amnistías”. Pág. 61.</p> <p>“Desde el punto de vista del DIH, entonces, las amnistías tienen validez y, si bien no constituyen una obligación perentoria, sí se perciben como un medio que debe propiciarse al máximo para lograr la reconciliación entre los participantes del conflicto, y de esa forma, alcanzar una paz estable. El protocolo citado no define los límites que deberían respetar las amnistías, aunque la doctrina autorizada ha identificado un conjunto de conductas que no podrían ser objeto de amnistías e indultos, especialmente, a partir</p>	<p>principio, una finalidad altruista; y (iii) aunque se dirige principalmente contra el Estado (sujeto pasivo); y (iv) puede causar víctimas individuales”. Pág. 217.</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>cualquier otro beneficio penal, en un proceso adelantado por la jurisdicción nacional, a favor de una persona cuya responsabilidad penal vaya a ser examinada por la Corte Penal Internacional, ésta no la procesará de nuevo, a menos que los procedimientos internos hayan tenido como propósito el sustraer a la persona de la justicia”. Pág. 102.</p> <p>“...el Estatuto de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide conceder amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que son</p>	<p>señaló acertadamente el Procurador General de la Nación, existe un límite irrenunciable al deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pues se deberán investigar, juzgar y en su caso sancionar los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra”. Pág. 312.</p>		<p>de las categorías genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”. Pág. 62.</p> <p>“En suma, para la jurisprudencia de la CorteIDH (en el ámbito del DIDH), en principio, las auto amnistías (e indultos) están prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; otro tipo de amnistías resultan ‘sospechosas’, en virtud de su amplitud, como restricciones o limitaciones al deber de los Estados de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Y, finalmente, algunas amnistías y medidas similares son admisibles para alcanzar la reconciliación, siempre y cuando su objeto no recaiga en graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional</p>	
--	---	--	--	--	--

	<p>producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia”. Pág. 102.</p> <p>“...sin adelantar juicio alguno sobre eventuales leyes de amnistía o indulto, no encuentra la Corte que la ratificación del Estatuto de Roma pueda implicar un obstáculo para futuros procesos de paz y de reconciliación nacional en donde se consideren medidas como los indultos y las amnistías con sujeción a los parámetros establecidos en la constitución y en los principios y normas de derecho internacional aceptados por</p>			<p>humanitario; y, en cualquier caso, cuando los demás derechos de las víctimas (verdad y reparación) reciban un alto nivel de satisfacción, dada la interdependencia entre los derechos de las víctimas”. Pág. 65.</p> <p>“El delito político, así como sus conexos, son importantes en esta providencia, pues han condicionado históricamente la concesión de amnistías e indultos. Como se ha indicado, (i) la definición del delito político tiene una fuente objetiva en el capítulo VXIII del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000) que define las conductas que atentan contra el régimen constitucional y legal vigente; y (ii) los delitos conexos son materia en la que el Legislador goza de una amplia potestad de configuración, siempre excluyendo de ella los crímenes definidos</p>	
--	---	--	--	---	--

	Colombia”. Pág. 106.			como no amnistiables desde el DIDH, el DIH y el DPI, y que no supongan restricciones irrazonables y desproporcionadas a los derechos de las víctimas”. Pág. 68.	
Tratamientos diferenciados	<p>“Figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la justicia, las amnistías en blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es decir, los beneficios penales que los detentadores legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad que tenga como propósito impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo para</p>	<p>Renuncia a la persecución penal y suspensión condicional de la ejecución de la pena</p> <p>“...es claro que el Marco Jurídico para la Paz establece que la suspensión condicional total de la ejecución de la pena no se aplica a los casos seleccionados, es decir, y tal como se ha explicado en la premisa menor, a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio”. Pág. 300.</p>	No se pronunció al respecto	<p>“...la Sala advierte que si bien no se percibe la existencia de un estándar plenamente definido sobre la concesión de beneficios como la renuncia a la persecución penal y otros tratamientos diferenciados, distintos de las amnistías y los indultos en el marco del DIDH y el DIH, sí es posible, a partir de las reglas que definen la validez de las amnistías, y de la jurisprudencia de esta Corporación sobre el Marco Jurídico para la Paz, construir los elementos centrales de juicio acerca de la validez constitucional de estas conductas. No se trata pues de un espacio regulativo plenamente abierto.</p>	<p>“Como se ha dicho, el artículo 150-17 de la Constitución permite la concesión de amnistías o indultos generales por delitos políticos. En el contexto del conflicto armado colombiano, los agentes del Estado no se han rebelado en contra del Estado, por lo que se entiende que no han cometido delitos políticos, en los términos expuestos.</p> <p>La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la prohibición de autoamnistías, consideradas estas</p>

	<p>hacer valer sus derechos, se han considerado violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos judiciales para la protección de los derechos humanos”. Pág. 103.</p>			<p>166. En este orden de ideas, un beneficio como la renuncia a la persecución penal es una medida que impone una restricción a los derechos de las víctimas y, especialmente, a la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, como lo sostuvo la Sala en la sentencia C-579 de 2013, este beneficio sólo es admisible si no cobija las más intensas lesiones a la dignidad humana, y si viene acompañado de una maximización de los demás derechos de las víctimas. El beneficio no es constitucionalmente admisible si su entrega y conservación no se sujeta a la contribución efectiva a los derechos de las víctimas; esta contribución debe darse, tanto al recibir el beneficio, como de</p>	<p>como las que concede el Estado a sus propios agentes, específicamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se ha entendido que los grupos paramilitares, que por medios ilegales han buscado apoyar ilegítimamente al Estado, tampoco pueden ser considerados delincuentes políticos. Por consiguiente, en nuestro régimen constitucional, ni los agentes del Estado ni los miembros de grupos paramilitares pueden recibir amnistías”. Pág. 218.</p> <p>“...es posible otorgar tratamientos diferenciados para agentes del Estado, que se reflejen en tratamientos</p>
--	---	--	--	---	---

				<p>forma continua, especialmente, en el ámbito de la construcción de la verdad y la memoria histórica”. Pág. 72.</p> <p>“Los agentes del Estado que cometieron delitos y especialmente crímenes internacionales durante el conflicto armado se encuentran en una situación de hecho similar a los otros beneficiarios de la ley, exclusivamente, en lo que atañe a la comisión de estas conductas; sin embargo, se encuentran en una situación distinta en la medida en que los agentes de la Fuerza Pública tienen la función de ejercer el monopolio legítimo de las armas, y son, por lo tanto, garantes de los derechos fundamentales; mientras los integrantes del grupo armado al margen de la ley se hallaban, por definición, al margen</p>	<p>penales simétricos y simultáneos a la amnistía, siempre que dicho tratamiento sea diferenciado, teniendo en cuenta que los agentes del Estado no han cometido delitos políticos y que son garantes de los derechos y de la institucionalidad...la renuncia a la persecución penal para agentes del Estado responsables de delitos en el marco del conflicto armado en los que la obligación de investigar, juzgar y sancionar admite excepciones, es decir, para casos que no constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ...corresponde al tratamiento penal</p>
--	--	--	--	--	--

				del régimen constitucional, de modo que carecían de estas condiciones especiales”. Pág. 230.	simétrico, diferenciado y simultáneo para agentes del Estado”. Pág. 219.
Conductas Amnistiables o de aplicación tratamiento diferenciado	Delitos políticos y conexos que no signifiquen crímenes internacionales.	<p>En el MJP no se contempla amnistías o indultos, sino la renuncia a la persecución penal o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para ser cobijados por estos beneficios se contemplaba tres categorías:</p> <p>“i) Personas que no siendo máximos responsables hayan participado en la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.</p> <p>ii) Personas que hayan cometido delitos que no sean considerados como crímenes de lesa humanidad, genocidio ni crímenes de guerra. Se encuentran en esta</p>	<p>Acto Legislativo establece un régimen especial y diferenciado para la investigación, juzgamiento y sanción de las infracciones cometidas en el marco del conflicto armado, régimen que, en principio, no responde al paradigma de la justicia retributiva, en distintos sentidos: (i) primero, se habilita al Estado para renunciar a la función persecutoria en función de criterios objetivos y subjetivos, pues el Estado se encuentra habilitado para no criminalizar a las personas que no tienen la calidad de máximos responsables (criterio subjetivo), y</p>	<p>“...si bien las conductas menos graves permiten la concesión de amnistías, indultos y renuncia a la persecución penal, los derechos de las víctimas no se anulan. Aunque en estos casos no se sigue un proceso penal y, consecuentemente, no se persigue la verdad individual judicial, el Estado debe asegurar la vigencia de las otras facetas de los bienes de que son titulares las víctimas individuales y la sociedad, siendo el principio democrático participativo un eje fundamental”. Pág. 155.</p> <p>“Sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar caben las siguientes precisiones en el actual contexto de transición:</p>	<p>“Respecto de los hechos en los que la obligación de investigar, juzgar y sancionar se convierte en facultativa en aras de conseguir la paz, cabe la amnistía, el indulto y la renuncia a la persecución penal. En el caso de delitos de responsabilidad de las guerrillas que constituyan delitos políticos, procede la amnistía y el indulto...En aplicación del principio de inescindibilidad y del tratamiento penal especial diferenciado aplicable a los agentes del Estado, se contempló la renuncia a la persecución penal la que, según la Ley 1820 de 2016, solo</p>

		<p>categoría por ejemplo las lesiones personales, el hurto, la extorsión, la falsedad en documento, las falsedades personales, la interceptación de comunicaciones, el allanamiento de domicilio, la utilización de prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, la rebelión, el irrespeto a cadáveres, la estafa, la usurpación (invasión) de inmuebles, la falsedad de moneda, el contrabando, el lavado de activos, las amenazas, el concierto para delinquir, los delitos contra la propiedad intelectual, el apoderamiento de hidrocarburos, el daño en bien ajeno, el incendio, el porte ilegal de armas, el enriquecimiento ilícito, la usurpación de funciones públicas, el encubrimiento, la fuga</p>	<p>para no criminalizar aquellos delitos que no constituyen un delito de lesa humanidad, genocidio o un crimen de guerra (criterio objetivo), universo éste frente a las cual, según el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2017 es procedente la renuncia condicionada a la persecución judicial penal, mediante dispositivos como la amnistía, el indulto o la suspensión total de la ejecución de la pena”. Pág. 369.</p>	<p>(ii) La amnistía, indulto o, la renuncia a la persecución penal constituyen instrumentos válidos, siempre y cuando se sujeten a las exigencias previstas en la Constitución (frente a amnistías e indultos, que se atienda a su procedencia solamente frente a la categoría de delitos políticos y conexos), no se desconozca el mínimo reductible del deber de investigar, juzgar y sancionar, y se garanticen al máximo los derechos interdependientes, inalienables y universales de las víctimas”. Pág. 160.</p> <p>“Las amnistías de <i>iure</i> privilegian entonces la facultad de configuración legislativa; las amnistías de sala, a su turno, favorecen la capacidad del proceso judicial, la especialización de los jueces de la JEP y la</p>	<p>puede ser concedida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP respecto de delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. Pág. 247.</p>
--	--	--	--	--	---

		<p>de presos, el fraude procesal, la traición a la patria, la injuria y calumnia, entre otros.</p> <p>iii) Crímenes de guerra que no sean cometidos de manera sistemática es decir sin un nexo con el conflicto”. Pág. 297.</p>		<p>visión de conjunto del conflicto que persigue el aparato de justicia propio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dado a los operadores del mismo...”. Pág. 227.</p> <p>“No corresponde a la Sala la tarea de adelantar, en abstracto, el estudio acerca de si estas conductas son crímenes no amnistiables, pues ello desconocería las circunstancias fácticas relevantes, que deben ser analizadas caso a caso; y supondría asumir el papel esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz en la calificación de los hechos ocurridos dentro del conflicto. Pero sí considera pertinente advertir que, cuando los órganos competentes para otorgar amnistías de <i>iure</i> observen que los agravantes en mención podrían ser crímenes</p>	
--	--	--	--	--	--

				de guerra o de lesa humanidad, deberán abstenerse de conferir las amnistías de <i>iure</i> , y su procedencia deberá ser definida por la JEP”. Pág. 263.	
Conductas no Amnistiables o de no tratamiento diferenciado	<p>En el análisis de la Corte Constitucional sobre el Estatuto de Roma, es clara en señalar que para los crímenes internacionales no procede posibilidad de amnistía, indulto o perdón judicial alguno. Son competencia de la CPI:</p> <p>Crímenes de genocidio. Crímenes de lesa humanidad, Crímenes de guerra. El crimen de agresión.</p>	<p>“Como se ha afirmado una de las obligaciones derivadas de la garantía de los derechos humanos está constituida por la investigación, el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH y al DIH, por lo cual es fundamental determinar el alcance de estas últimas expresiones”. Pág. 255.</p> <p>“...puede concluirse que el listado definitivo de graves violaciones a los derechos humanos es dinámico y se encuentra en construcción, pues también depende de que su calificación se haya hecho por vía convencional a través</p>	No se pronunció al respecto	<p>“La determinación de los crímenes graves permite, de otro lado, fijar un límite sobre aquello que no puede ser objeto de amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal. Esto es, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio no pueden ser objeto de los referidos beneficios. Entre esta prohibición y aquellas conductas punibles cometidas en el marco del conflicto existe un amplio espectro, que corresponde ser valorado al Legislador, para efectos de determinar las medidas en el tránsito a la paz”. Pág. 155.</p> <p>“Sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar caben las</p>	<p>“En concordancia con dichos parámetros internacionales de derechos humanos –que hacen parte del bloque estricto de constitucionalidad–, el legislador y la jurisprudencia constitucional han definido los hechos que no admiten excepciones a la obligación de investigar, juzgar y sancionar y que, por consiguiente, no son amnistiables ni indultables, ni susceptibles de renuncia incondicionada a la persecución penal. Esos hechos son los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra,</p>

		<p>de tratados internacionales como ha sucedido con las desapariciones forzadas y la tortura.</p> <p>A pesar de este carácter dinámico, esta Corporación considera que son graves violaciones a los Derechos Humanos para este contexto como mínimo las siguientes: a) las ejecuciones extrajudiciales, b) las desapariciones forzadas, c) la tortura; d) el genocidio; e) el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; f) la detención arbitraria y prolongada; g) el desplazamiento forzado; h) la violencia sexual contra las mujeres y i) el reclutamiento forzado de menores...” Pág. 261.</p>		<p>siguientes precisiones en el actual contexto de transición: (i) la obligación de investigar recae de manera innegociable sobre el Estado y frente a las graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que se remiten, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio en los términos del Estatuto de Roma...” Pág. 160.</p> <p>“la fórmula acogida por el Legislador para excluir los crímenes de guerra de los beneficios penales da lugar a ciertas imprecisiones, que resultan inadmisibles en una materia que debe estar rodeada de la mayor certeza y seguridad jurídicas. La referencia a los “graves” crímenes de guerra y la subsiguiente definición</p>	<p>así como otras graves violaciones a los derechos humanos tales como la violencia sexual, el reclutamiento de menores de edad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad y la tortura”. Pág. 217.</p>
--	--	--	--	---	--

		<p>“En virtud del análisis de estas fuentes, esta Corporación ha reconocido que los Estados tienen una serie de obligaciones frente al Derecho Internacional Humanitario mencionadas claramente en la sentencia C-291 de 2007:</p> <p>(2) el deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos en el curso de conflictos armados internos, deber que compete en principio a los Estados por mandato del derecho internacional consuetudinario...”. Pág. 263.</p> <p>“Existe una estrecha relación entre las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional</p>		<p>como “toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de manera sistemática” se aparta de los conceptos ya decantados en el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, generando una indeseable incertidumbre, que puede conducir a la vulneración del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al derecho internacional humanitario”. Pág. 197.</p> <p>“El párrafo del artículo 23, a su vez, refleja los límites de las amnistías, desde dos perspectivas: la improcedencia de estos beneficios de mayor entidad por las conductas más graves para a dignidad humana, y la obligación de que no se extiendan a delitos comunes,</p>	
--	--	--	--	---	--

		Humanitario, pues dentro del listado de conductas constitutivas de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio se abarcan todas las conductas que se han reconocido como graves vulneraciones a los derechos humanos, aunque se requiera a su vez de otra serie de elementos: sistematicidad o generalidad para el caso de los crímenes de lesa humanidad, intención de exterminar un grupo en el caso del genocidio y nexo con el conflicto armado en el caso de los crímenes de guerra”. Pág. 267.		ambas, limitaciones previstas en el DIDH, el DIH, el DPI y la jurisprudencia constitucional”. Pág. 227. “...los límites, garantizan los derechos de las víctimas y aseguran el deber de investigar, juzgar y sancionar. La articulación de ambos mecanismos supone nuevas premisas para el estudio (además del núcleo de lo no amnistiable y de la potestad de configuración del derecho en cabeza del Congreso)”. Pág. 227.	
Beneficiarios	No se pronunció al respecto	“Tratamiento diferenciado a grupos armados al margen de la ley que sean o hayan sido parte en el conflicto armado y para los agentes del Estado”. Pág. 118.	No se pronunció al respecto	Ex miembros de las FARC-EP. Agentes del Estado que son miembros de la Fuerza Pública.	Ex miembros de las FARC-EP. Personas que incurrieron en conductas punibles en el marco de protestas sociales o

				<p>Agentes del Estado distintos a los miembros de la Fuerza Pública.</p> <p>Terceros que tuvieron participación en el conflicto (Colaboradores o financiadores).</p> <p>Personas que incurrieron en conductas punibles en el marco de protestas sociales o en disturbios públicos.</p>	<p>en disturbios públicos.</p> <p>Agentes del Estado miembros de la fuerza pública y distintos a los miembros de la fuerza pública:</p> <p>“...obligatoria y prevalente en el caso de miembros de la Fuerza Pública y voluntaria en el caso de agentes del Estado civiles”. Pág. 239.</p> <p>Terceros</p> <p>“...la JEP tendrá competencia sobre los terceros que hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, y decidan someterse a ella de manera voluntaria”. Pág. 246.</p>
Autoridad competente	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	“Sin perjuicio de lo expuesto, es oportuno indicar que, antes de la	“Por otra parte, la judicialización y beneficios jurídicos

				<p>entrada en funcionamiento de la Sala de Amnistías e Indultos de la JEP, si se trata de procesos adelantados en el marco de la Ley 600 del 2000, será el Fiscal competente el encargado de aplicar este tipo de amnistía, si la actuación se encuentra en investigación previa o instrucción, mientras que si la actuación está en etapa de juzgamiento, la solicitud que se formula al Fiscal debe ser trasladada al juez competente. Por su parte, si se trata de procesos adelantados bajo la Ley 906 de 2004 o la Ley 1098 de 2006, la solicitud que se formula al Fiscal debe ser trasladada al juez competente (de garantías o de conocimiento), dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso, para que aplique el beneficio". Pág. 266.</p>	<p>de miembros de las FARC, se rige principalmente por el procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, así como en el Proyecto de Ley Estatutaria bajo estudio, sin perjuicio de que los jueces ordinarios puedan conceder amnistías y libertades. Adicionalmente, la judicialización de los aforados constitucionales, presuntamente responsables de delitos en el marco del conflicto armado, está a cargo de las autoridades que señala la Constitución Política, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, según</p>
--	--	--	--	---	---

					la Sentencia C-674 de 2017. Y la judicialización de los terceros – servidores públicos o particulares–, presuntamente responsables de delitos en el marco del conflicto armado, es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de que voluntariamente se puedan someter a la JEP, como lo señaló esta Corporación en la Sentencia C-674 de 2017, al estudiar la constitucionalidad del artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017”. Págs. 202-203.
Extradición	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	“La garantía de no extradición hace parte de los tratamientos especiales de justicia dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y

					<p>consiste en la prohibición de concederla u ofrecerla por delitos ocasionados durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta su finalización. Dicha garantía, en el escenario de la justicia transicional, tiene una doble dimensión: de una parte, la seguridad jurídica de los excombatientes...y de la otra, los derechos de la sociedad y de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición respecto de los hechos".</p> <p>Pág. 255.</p>
--	--	--	--	--	---

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES				
CATEGORIA	ESTATUTO	C. Principios ¹⁶⁷	Barrios altos vs Perú	Mozote vs Salvador

¹⁶⁷ Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

<p>Amnistía e Indulto</p>	<p>No se pronunció al respecto</p>	<p>“Incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia se aplicarán dentro de los siguientes límites:</p> <p>a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podrán beneficiarse de esas medidas mientras el Estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del Estado de que se trata.</p> <p>b) La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán en el derecho a saber.</p> <p>c) Como la amnistía puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podrá imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pacífico del derecho a la</p>	<p>“La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma”. Pág. 16.</p>	<p>Sobre las amnistías durante conflictos armados internos:</p> <p>“Según el Derecho Internacional Humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. En efecto, el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 prevé que:</p> <p>A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el</p>
----------------------------------	------------------------------------	---	--	---

		<p>libertad de opinión y de expresión. Cuando esas personas no hayan hecho más que ejercer ese derecho legítimo, garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una ley deberá considerar nula y sin valor respecto de ellas toda decisión judicial o de otro tipo que les concierna; se pondrá fin a su reclusión sin condiciones ni plazos.</p> <p>d) Toda persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado c) del presente principio y que entren en el ámbito de aplicación de la amnistía podrá rechazar la amnistía y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido un juicio imparcial y con las debidas garantías, previstas en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o si ha sido condenada sobre la base de una declaración que, según se haya establecido, ha sido hecha como resultado de interrogatorios</p>	<p>“Las llamadas llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisibles al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25)”. Pág. 2.</p> <p>“Siendo así, las leyes de autoamnistía, además de ser manifiestamente</p>	<p>conflicto armado”. Pág. 117.</p> <p>En un voto concurrente se lee:</p> <p>“...la cuestión de las amnistías y su relación con el deber de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, requiere un análisis que proporcione criterios adecuados para un juicio de ponderación en contextos en los que pudieran surgir tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada en el marco de un conflicto armado no internacional”. Pág. 157.</p>
--	--	---	---	---

		inhumanos o degradantes, especialmente bajo la tortura". Principio 24.	incompatibles con la Convención Americana, y desprovistas, en consecuencia, de efectos jurídicos, no tienen validez jurídica alguna a la luz de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Pág. 4.	
Tratamientos diferenciados	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto
Conductas Amnistiables o de aplicación tratamiento diferenciado	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto
Conductas no Amnistiables o de no tratamiento diferenciado	Los crímenes de competencia de la Corte son los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Para estos crímenes no procede ningún beneficio como amnistía o tratamiento diferenciado: El crimen de genocidio. Los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra. El crimen de agresión. En los artículos 6, 7 y 8 se abordan uno a uno	"A los efectos de estos principios, la frase "delitos graves conforme al derecho internacional" comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que	"Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables	"...incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados. Esto debido a que las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos invocados por algunos Estados para no cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de

<p>estos crímenes y se señala que se entiende por estos, sus características, además de señalar las conductas que integran cada uno de estos 4 grupos de crímenes.</p> <p>La Corte frente a los crímenes de guerra señala en el artículo 8 que:</p> <p>“La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”.</p> <p>Es importante señalar que la Corte señala en el numeral 2 literal c su competencia frente a los crímenes de guerra en el marco de conflictos armados de carácter no internacional:</p> <p>“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las</p>	<p>impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud”. Pág. 6.</p>	<p>reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Pág. 15.</p> <p>“En la base de este razonamiento se halla la convicción, acogida en el Derecho internacional de los derechos humanos y en las más recientes expresiones del Derecho penal internacional, de que es inadmisibles la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela de ambas manifestaciones del Derecho internacional. La tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores --así como de otros participantes-- constituye una obligación de los Estados, que no puede eludirse a través de medidas tales como la amnistía, la prescripción, la admisión de causas excluyentes de incriminación y otras que pudieran llevar a los mismos resultados y determinar la impunidad de actos que ofenden</p>	<p>graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incorporado los estándares mencionados, observando de buena fe sus obligaciones internacionales. De tal modo, a efectos del presente caso, el Tribunal reitera que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las</p>
--	--	---	--

	<p>violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa...”.</p>		<p>gravemente esos bienes jurídicos primordiales. Es así que debe proveerse a la segura y eficaz sanción nacional e internacional de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, el genocidio, la tortura, determinados delitos de lesa humanidad y ciertas infracciones gravísimas del Derecho humanitario”. Pág. 3.</p>	<p>desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Págs. 116-117.</p> <p>Sobre la posibilidad de otorgar amnistías en el marco de un conflicto armado interno, señala la Corte:</p> <p>“Sin embargo, esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, “las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello” no podrán estar cubiertas por una amnistía. Por consiguiente, puede</p>
--	--	--	--	--

				entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de crímenes contra la humanidad". Pág. 118.
Beneficiarios	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto
Autoridad competente	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto
Extradición	No se pronunció al respecto	"Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podrán, para evitar su extradición, ampararse en las disposiciones favorables que suelen aplicarse a los delitos políticos ni al principio de no extradición de los nacionales". Principio 26.	No se pronunció al respecto	No se pronunció al respecto

1.2 Matriz de análisis categorial # 2

PROYECTO: DESARROLLO LEGISLATIVO, JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

OBJETIVOS DE LA MATRIZ:

- Establecer en que consiste el régimen de condicionalidad aplicable a los responsables de conductas no amnistiabiles que comparecen a la jurisdicción especial para la paz.
- Identificar las obligaciones que asumen los responsables de conductas no amnistiabiles que comparecen a la jurisdicción especial para la paz frente a la reparación integral de las víctimas

FECHA: _____ ELABORADOR DE LA MATRIZ: _____

ACTOS LEGISLATIVOS Y LEYES				
CATEGORIA	A.L. 01/17	L. 1820/16	L. 1957/19	Acuerdo de Paz
Condiciones de acceso y permanencia	“Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se	“Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir	“Para el tratamiento especial de la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su	“Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier

	<p>disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”. Art. 5.</p>	<p>ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma”. Art. 14.</p> <p>Para ser cobijado por una medida de amnistía es necesario la dejación de armas o la suscripción de un acta comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente, lo que los deja a disposición de la JEP bajo el régimen de condicionalidad:</p>	<p>comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades”. Art. 20.</p> <p>“En el caso de las FARC-EP el tratamiento especial de la JEP también está condicionado a la verificación del cumplimiento de (a) la dejación de armas, b) obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral y (c) la entrega de menores de edad”. Art. 20.</p> <p>“El incumplimiento intencional de cualquiera de las condiciones del Régimen de Condicionalidad, o de</p>	<p>tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz”. Pág. 130.</p>
--	--	--	---	--

		<p>“la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva a cada una de ellas cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas...Respecto de los integrantes de las FARC-EP que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso”. Art 18.</p> <p>“Si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 31 de esta ley, se rehusaran de manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas de existir la</p>	<p>cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el Acto Legislativo No. 01 de 2017, la pérdida de todos los tratamientos especiales, beneficios, renunciaciones, derechos y garantías”. Art 20.</p> <p>“...la aportación dolosa de información falsa implicará la pérdida de beneficios”. Art. 20.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>obligación de acudir o comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Art. 33.</p> <p>“La Jurisdicción Especial para la Paz podrá revocar la libertad de quienes incumplan alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso”. Art 35.</p> <p>“El Acta de Compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, la obligación de informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz y no salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Art. 36</p>		
Compromiso con la verdad y	“Para acceder al tratamiento especial previsto en el	“La adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 31 de esta ley	“Obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso	“Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente

reconocimiento de responsabilidad	<p>componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es necesario aportar verdad plena... Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición... Quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia". Art. 5.</p> <p>"El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades". Art. 5.</p>	<p>no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad". Art. 33.</p>	<p>octavo del artículo transitorio 5º del artículo 1º del A.L. 01 de 2017. La obligación de aportar verdad plena implica, entre otros, aportar información, cuando se conozca de ella, sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan prestado su nombre para adquirirlos, tenerlos, administrarlos y poseerlos en el marco y el contexto del conflicto armado". Art. 20.</p>	<p>de Justicia del SIVJRNR es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Se entiende por tratamiento especial las sanciones propias y alternativas previstas en el numeral 60". Pág. 146.</p>
--	---	---	---	---

	<p>Frente a la sustitución de la sanción penal:</p> <p>“...siempre y cuando el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva, dependiendo del momento en el que efectúe tal reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema...”. Art. 11.</p>			
Reparación a las víctimas	<p>“...el Estado garantizará el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado. La reparación será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de víctimas del</p>	<p>“La adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 31 de esta ley no exime...de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición”. Art 33.</p>	<p>“Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” del 24 de Noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Art. 7.</p>	<p>“...el Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar y de manera coordinada con los programas de reparación</p>

	<p>conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los sujetos de especial protección constitucional". Art. 18.</p>		<p>"El Estado colombiano tiene el deber de asegurar, por medios razonables dentro de su alcance, la verdad, justicia, reparación, y medidas de no repetición, con respecto a las graves infracciones del DIH y graves violaciones de los derechos humanos". Art. 28.</p> <p>"El Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar y de manera coordinada con los programas de reparación</p>	<p>colectiva territorial cuando sea necesario.</p> <p>En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos. Esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia.</p> <p>En el marco del Sistema Integral, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para promover la participación en distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto, de agentes del Estado, y otros que participaron de manera directa en el conflicto que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos; así como de quienes habiendo</p>
--	---	--	---	---

			<p>colectiva territorial cuando sea necesario". Art. 38.</p>	<p>participado de manera indirecta en el conflicto puedan haber tenido alguna responsabilidad.</p> <p>Por otra parte el Gobierno Nacional adoptará medidas para promover y donde haya lugar asegurar acciones colectivas de reparación de los diferentes entes del Estado que hubieran tenido responsabilidad por daños causados con ocasión del conflicto.</p> <p>Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil, y como parte de dicho proceso, a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir entre otras, la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos</p>
--	--	--	--	--

				<p>improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG), la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación".</p> <p>Págs. 178-179</p>
Sanciones	<p>"Las sanciones que imponga la JEP tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Las sanciones podrán ser propias, alternativas u ordinarias y en todos los casos se impondrán en</p>	No se pronunció al respecto	<p>"Las sanciones que se impongan en la JEP podrán ser propias, alternativas u ordinarias. Las resoluciones y sentencias impuestas conforme a esta ley enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la misma, así como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables, indultables o susceptibles de tratamientos penales</p>	<p>"Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad".</p> <p>Pág. 164.</p>

	los términos previstos en los numerales 60, 61, 62 y en el listado de sanciones del subpunto 5.1.2 del Acuerdo Final”. Art. 13.		especiales equivalentes”. Art. 127.	
Tratamiento especial penitenciario	“Las sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la Fuerza Pública que impliquen la privación efectiva de la libertad se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado”. Art. 25.	“La Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral”. Art. 56.	“La Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral”. Art. 56.	“Fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”. Pág. 165. “Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes del Estado se aplicará el fuero carcelario que les corresponda atendiendo a su condición de civiles o integrantes de la Fuerza Pública, sujeto al monitoreo propio de este sistema”. Pág. 166.
Participación política	“La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Art. 20.	No se pronunció al respecto	“Será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz. Esta	“La imposición de cualquier sanción en el SIVJRN no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las

			incompatibilidad hará efecto de pleno derecho con la imposición de la sanción alternativa u ordinaria, según sea el caso”. Art. 31.	partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Pág. 150.
Responsabilidades disciplinarias y administrativas	<p>“Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos”. Art. 6.</p>	<p>“Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos previstos en esta ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las cobijarán; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes”. Art. 41.</p> <p>“Si por los hechos o conductas objeto de la renuncia a la persecución penal hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, la renuncia las cobijará”. Art 42.</p>	<p>“Respecto a las sanciones o investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas, incluidas las pecuniarias, impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará, bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción penal disciplinaria, fiscal o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado...Las investigaciones en curso y las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y/o administrativas también se extinguirán...”. Art 32.</p>	<p>“Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos”. Pág. 150.</p> <p>“A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o</p>

	<p>“A petición del condenado la JEP podrá revisar las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República”. Art. 10.</p>		<p>“Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos previstos en esta Ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las cobijarán”. Art 41.</p> <p>“La renuncia a la persecución penal también genera los siguientes efectos:</p> <p>1) Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal”. Art. 47.</p>	<p>sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”. Pág. 160.</p>
Inhabilidades	<p>El artículo 2 del Acto Legislativo agrega un párrafo al artículo 122 de la Constitución Política:</p> <p>“Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o</p>	<p>La renuncia a la persecución penal para agentes del Estado genera:</p> <p>“Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal”. Art. 48.</p>	<p>“Las inhabilidades impuestas como penas accesorias en providencias judiciales, así como las inhabilidades constitucionales y legales derivadas de las condenas penales y de las sanciones disciplinarias, están suspendidas”. Art 31.</p>	<p>No se pronunció al respecto</p>

	<p>indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad...y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio.</p>		<p>“Para los efectos previstos en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, que a su vez modifica el artículo 122 de la Constitución Política, se presumirá que la conducta ha sido cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, cuando la persona ha sido acreditada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en caso de acuerdos de paz, o ha sido certificada por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, en caso de desmovilización individual”. Art 32.</p>	
--	--	--	---	--

	La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz”.			
Indemnizaciones	<p>“En los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, no procederán acciones judiciales contra los beneficiarios de tales medidas para la indemnización de las víctimas. En todo caso, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición”. Art. 18.</p>	<p>“La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”. Art. 41.</p> <p>“La renuncia a la persecución penal extingue...la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad</p>	<p>“La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011...”. Art 41.</p>	<p>“La responsabilidad de los destinatarios del SIVJNR no exime al Estado de su deber de respetar y garantizar el pleno goce de los derechos humanos y de sus obligaciones, conforme al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Pág. 146.</p> <p>“La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación”. Pág. 152.</p> <p>“Tomar todas las medidas necesarias para la financiación plena y efectiva de la Política de atención y reparación integral a víctimas, incluyendo el fortalecimiento del Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, la ampliación de sus fuentes de financiación y de los</p>

		derivada de la acción de repetición”. Art. 42.		mecanismos de captación de recursos, así como la promoción de los mecanismos de participación y de veeduría como dispositivo de control de las víctimas sobre el Fondo. El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos”. Pág. 186.
--	--	---	--	---

JURISPRUDENCIA			
CATEGORIA	C-674/17	C-007/18	C-080/18
Condiciones de acceso y permanencia	<p>“A lo largo del acto legislativo se precisan algunos de los alcances de este sistema, a partir de las siguientes reglas: (i) el acceso al tratamiento especial supone contribuciones efectivas en tres frentes: la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición ; (ii) la contribución a la verdad implica suministrar, cuando ello sea posible, información completa y detallada sobre las conductas cometidas, las circunstancias de su realización, y los elementos necesarios para la atribución de responsabilidades ; (iii) el deber de aportar a la verdad</p>	<p>“...el otorgamiento de amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales -incluidos los diferenciales para Agentes del Estado- se somete a condiciones de acceso, y no releva a sus beneficiarios del deber de cumplir con las obligaciones contraídas dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esta conclusión también se soporta en las condiciones que las partes que suscribieron el Acuerdo Final dejaron expresamente pactadas en el documento final”. Pág. 246.</p> <p>“La suscripción del acta de compromiso, en el marco del Sistema</p>	<p>“El incumplimiento del régimen de condicionalidad, en consecuencia, no conlleva necesariamente a la exclusión de la JEP, sino que la jurisdicción graduará la pérdida de los diferentes tratamientos especiales, pues como lo ha dicho esta corporación, “el incumplimiento de las condiciones no solo impide acceder a los tratamientos diferenciales, sino que también implica la pérdida, no de la competencia de la JEP, sino de los tratamientos especiales, con sujeción al principio de gradualidad.” Pág. 270</p>

	<p>no implica la obligación de aceptar responsabilidades ; (iv) el tratamiento especial de justicia se pierde cuando se haya suministrado información falsa de manera dolosa, y cuando se incumpla cualquiera de las condiciones del sistema ; (v) dentro del conjunto de incentivos se encuentra la renuncia la persecución penal y la sustitución de la sanción penal proferida por la justicia ordinaria por las propias y alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz, sustitución que, a su turno, se encuentra sujeta al reconocimiento de la verdad completa, detallada y exhaustiva, al momento en que se efectúa este reconocimiento, y a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición; además, en la sustitución de la sanción penal se puede declarar cumplido su componente retributivo, e imponer únicamente la ejecución del componente restaurativo ; (vi) la ley debe reglamentar el sistema de condicionalidades, que comprende la definición de las condiciones para acceder y mantener el tratamiento especial, así como los criterios para evaluar el incumplimiento y para determinar sus efectos ; (vii) en los casos en que se aplique amnistía, indulto o</p>	<p>Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es un instrumento de gran importancia para la consecución de tales propósitos, en la medida en que contribuye a la certeza sobre la situación de los destinatarios de las medidas y, de otro lado, sirve de criterio para determinar el alcance de las obligaciones que el beneficiario adquiere para con el referido Sistema, tras la obtención de un beneficio; en un marco en el que su otorgamiento no exime del deber de contribuir a la verdad y a la reparación integral”. Pág. 308.</p>	<p>“...la JEP es la autoridad competente para determinar las consecuencias derivadas del incumplimiento de las condiciones, respetando los criterios de integralidad, proporcionalidad y gradualidad, además teniendo en cuenta las características específicas y la distinta responsabilidad de los agentes del Estado y de los miembros de grupos armados ilegales, de una parte; y de los civiles y los combatientes, de otra parte.</p> <p>Cabe aclarar que en ningún caso la JEP podrá otorgar tratamientos incondicionados”. Pág. 271.</p> <p>“En el caso de los miembros de las FARC-EP, la condición esencial de acceso será, en todos los casos, la suscripción del Acuerdo Final, la dejación de las armas y la suscripción del compromiso de sometimiento al SIVJNR...Tratándose de otros responsables que no han suscrito el Acuerdo y que, por sus características no están sometidos a un proceso de dejación de armas, la condición esencial de acceso es el compromiso de <i>aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición</i>”. Pág. 272.</p>
--	--	---	---

	<p>renuncia a la persecución penal, “no proceden las acciones judiciales contra los beneficiarios de las medidas para la indemnización de las víctimas”, aunque se mantiene el deber de contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición ; adicionalmente, en relación con los miembros de la fuerza pública, no proceden la acción de repetición ni el llamamiento en garantía, aunque se mantiene el deber de esclarecer la verdad, de contribuir a la reparación no monetaria de las víctimas y de garantizar la no repetición”. Págs. 335-336.</p> <p>“En esencia, este régimen de condicionalidades apunta a permitir la flexibilización en los estándares regulares y ordinarios de justicia, pero sobre la base de que esto tiene como contrapartida una ganancia en términos de acceso a la verdad, de la reparación integral a las víctimas, y de implementación de garantías de no repetición de los hechos que dieron lugar a la vulneración de derechos. Esta lógica que subyace al acto legislativo se traduce en una regla de condicionalidad, en virtud de la cual el acceso y el mantenimiento de todos los</p>		<p>“...los incumplimientos al régimen de condicionalidad pueden tener consecuencias en (i) el tratamiento penal especial; o (ii) en el tratamiento penitenciario especial; o (iii) en la extinción de la responsabilidad disciplinaria o administrativa; o (iv) en la exención de la obligación de indemnizar los daños causados; (v) en la garantía de no extradición; o (vi) en el tratamiento especial en materia de inhabilidades”. Pág. 273.</p> <p>“la primera obligación para acceder a la Jurisdicción Especial y a los tratamientos especiales de justicia, es el compromiso de terminar el conflicto armado y garantizar su no repetición...En el plano individual, adicionalmente, el compromiso se refrenda a través del sometimiento personal del responsable ante la Jurisdicción Especial para la Paz”. Pág. 274.</p> <p>“...los civiles, en principio y por definición, no participan en las hostilidades, luego su compromiso de terminar su participación en el conflicto armado se traduce en no volver a cometer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario...El compromiso de los miembros de la Fuerza Pública también será el de</p>
--	---	--	--

	<p>componentes del régimen penal especial para el escenario transicional, se encuentran supeditados a la contribución efectiva y proporcional a la reconstrucción de la verdad, a la reparación de las víctimas del conflicto armado, y a la implementación de garantías de no repetición”. Pág. 366.</p> <p>“la condicionalidad se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de todos los elementos del régimen penal especial, de modo que las contribuciones a la verdad, a la reparación integral a las víctimas y a la implementación de garantías de no repetición son necesarias no solo para obtener el tratamiento penal diferenciado, sino también para permanecer en él; y a su turno, el incumplimiento de las condiciones no solo impide acceder a los tratamientos diferenciales, sino que también implica la pérdida, no de la competencia de la JEP, sino de los tratamientos especiales, con sujeción al principio de gradualidad”. Pág. 367.</p>		<p>no volver a cometer en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Pág. 275.</p>
Compromiso con la verdad y reconocimiento de responsabilidad	<p>“la renuncia a la persecución de los delitos, y el acceso y permanencia a los tratamientos penales especiales se encuentra supeditado a que los propios</p>	<p>“...la concesión de los beneficios jurídicos no exime a sus beneficiarios del deber de contribuir decididamente a la materialización de los derechos de las víctimas. Así, cualquier</p>	<p>“La contribución a la verdad es una condición esencial de acceso y permanencia en materia de tratamientos especiales de justicia dentro de la Jurisdicción Especial</p>

	<p>victimarios hagan contribuciones efectivas para la restitución de los derechos de las víctimas a la verdad”. Pág. 397.</p>	<p>beneficio penal que se otorgue con base en la ley bajo revisión, está supeditado a que sus destinatarios realicen aportes sustanciales en verdad, reparación y no repetición”. Pág. 237</p> <p>“las amnistías de iure implican un compromiso por parte de sus beneficiarios de contribuir al esclarecimiento de la verdad, específicamente tras los llamados eventuales que pueda efectuar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y No Repetición o la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas, y a la reparación....hacen parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; por lo tanto, a ellas también son predicables el régimen de condicionalidades a cargo de la JEP”. Pág. 254.</p> <p>“La concesión de los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016, tal como se ha expuesto reiteradamente a lo largo de esta providencia, determina en algunos casos (amnistía, indulto y renuncia a la persecución penal) una flexibilización importante a las exigencias predicables de la satisfacción de los derechos a la justicia (por la vía judicial penal) y a la verdad individual (también judicial) de las víctimas, por</p>	<p>para la Paz. Esta condición está prevista en el inciso quinto del artículo transitorio 66 de la Constitución, y en los artículos transitorios 1 y 5, inciso octavo, del Acto Legislativo 01 de 2017, que establecen que para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia del Sistema, es necesario “aportar verdad plena”. Aportar verdad plena significa “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”. Pág. 276.</p> <p>“la sustitución de la sanción penal proferida por la jurisdicción ordinaria, establece como condición para ello que el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva, precisando que la gradualidad en el beneficio dependerá, entre otras cosas, del momento en el que efectúe tal reconocimiento...la obligación de contribuir al esclarecimiento de la verdad se predica de los amnistiados, los indultados y los</p>
--	--	--	--

		<p>lo que su concesión debe tener un impacto relevante en la consecución de los propósitos del proceso transicional, y en la garantía de los demás derechos de las víctimas, como en la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral”. Pág. 308.</p>	<p>beneficiarios de la renuncia a la persecución penal por delitos amnistiables, cuando quiera que sean requeridos por el SIVJNR”. Pág. 276.</p> <p>“La CEVCNR acreditará ante la JEP el cumplimiento por parte de los beneficiarios de los tratamientos especiales de la obligación de contribuir a la verdad ante este organismo”. Pág. 277.</p> <p>“...la UBPD deberá acreditar ante la JEP si quienes buscan acceder a un tratamiento especial han comparecido y contribuido efectivamente. La falta de comparecencia ante la UBPD, así como la comparecencia y no contribución efectiva o el ofrecimiento de información falsa, especialmente cuando una persona sea requerida por dicha entidad, puede implicar la pérdida de beneficios, derechos y garantías del SIVJNR, dentro de los principios de integralidad, proporcionalidad y gradualidad”. Pág. 278.</p>
Reparación a las víctimas	<p>“La materialización de esta directriz se efectúa a través tres mecanismos fundamentales: (i) por un lado, se establece el deber autónomo del Estado de reparar a las víctimas, tal como se dispone en el artículo transitorio 18 al determinar que “el Estado</p>	<p>“...la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fundamento en los siguientes parámetros:</p>	<p>“Como lo ha establecido la legislación colombiana, la jurisprudencia de esta Corporación, los instrumentos de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral consta de las siguientes medidas: la</p>

	<p>garantizará el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado”; según este mismo artículo, esta debe ser integral, adecuada, diferenciada, efectiva, consistente con el universo de víctimas, equitativa en función de la cantidad de recursos disponibles, y con prelación para los sujetos de especial protección constitucional; (ii) asimismo, al existir una interconexión entre los distintos componentes del sistema transicional, los incentivos punitivos se encuentran condicionados, entre otras cosas, a la reparación a las víctimas ; (iii) y en tercer lugar, la reparación se materializa incorporando a las penas un componente restaurativo que se debe estructurar en función de las víctimas del conflicto”. Pág. 338.</p>	<p>(i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta Ley del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.</p> <p>(ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.</p> <p>(iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a</p>	<p>indemnización, la restitución, la satisfacción y la rehabilitación.</p> <p>Por ello, quienes se someten a la JEP se encuentran obligados a reparar a las víctimas como parte de las condiciones que deben cumplir en el marco del régimen de condicionalidad”. Pág. 278.</p>
--	---	---	--

		la pérdida de beneficios previstos en esta Ley”. Págs. 354-355.	
Sanciones	<p>“...mediante la aplicación de un régimen sancionatorio alternativo que contempla, entre otras cosas, sanciones penales reducidas, la suspensión parcial o total de la ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, las modalidades especiales de cumplimiento de la pena, entre otras; es así como el artículo 13 establece que las sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz tienen por objeto “satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”, y remite al Acuerdo Final para efectos de fijar el esquema de penas, las cuales, a su turno, reducen o suprimen el componente retributivo.</p> <p>Aunque ese modelo difiere del acogido regularmente en el sistema judicial ordinario, no suprime ni elimina las bases del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional</p>	No se pronunció al respecto	<p>“...las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP; las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia; y, por último, las sanciones ordinarias se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad”. Pág. 276.</p> <p>“...la JEP deberá buscar la reparación de las víctimas a través de proyectos restaurativos pero sin dejar de lado la sanción por la gravedad de la ofensa cometida contra las víctimas y contra la sociedad. En consecuencia, la sanción tendrá como objetivo no solo la reparación y la satisfacción de la víctima a través de los proyectos restaurativos, sino también restablecer el equilibrio entre víctima y victimario, es decir, que los responsables sean tratados como tales y la sanción restaurativa sea evidencia de que están bajo la ley y no por encima de ella. Para este fin, la JEP deberán fijar precisas condiciones de cumplimiento de la sanción”. Pág. 290.</p>

	<p>Humanitario, no suprimen ni eliminan las bases del citado principio”. Pág. 369.</p> <p>“...la renuncia a la persecución penal prevista en el Acto Legislativo 01 de 2017 no es incondicionada, sino que se supedita al cumplimiento de las exigencias inherentes al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por ello, el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2017 se refiere a la facultad que tiene el legislador estatutario de autorizar la <i>“la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados”</i>, con lo cual se reitera la integralidad y la universalidad del régimen de condicionalidades. Esto satisface el imperativo derivado del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consistente en supeditar el otorgamiento de tratamientos penales benéficos, al aporte proporcional en materia de verdad, reparación a las víctimas e implementación de garantías de no repetición”. Pág. 370.</p>		<p>“Estas precisiones sobre las condiciones de cumplimiento de la sanción son esenciales también para hacer compatible el cumplimiento de la sanción con la participación en política de excombatientes de las FARC...Adicionalmente el régimen de monitoreo y seguimiento penitenciario será esencial para que los horarios, lugar de residencia y condiciones de cumplimiento de la pena sean estrictamente cumplidos. Este monitoreo deberá tener en cuenta el carácter coercitivo de la restricción de derechos y libertades. Por tal razón, la efectiva supervisión de las sanciones debe garantizar que la restricción efectiva de la libertad y los proyectos restaurativos que se desarrollen en este marco, no sean de cumplimiento simplemente voluntario, sino que se garantice que se cumplen las medidas conforme a las condiciones impuestas en la sentencia...la Jurisdicción Especial para la Paz contempla un régimen penitenciario especial que involucra en su monitoreo no solo al Tribunal para la Paz, sino también a instancias especializadas de las Naciones Unidas, lo cual fue autorizado por el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y declarado</p>
--	---	--	---

			<p>exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017. El control penitenciario debe ser muy estricto y ejercerse por los organismos referidos, que deberán obrar con independencia e imparcialidad en la vigilancia del efectivo cumplimiento de la sanción”. Pág. 291.</p>
<p>Tratamiento especial penitenciario</p>	<p>“con respecto a los tratamientos penales especiales previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017 para los delitos que no son susceptibles de renuncia a la persecución judicial, también se preserva el sustrato básico del deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dado que el acceso y la permanencia en los mismos se encuentra supeditados al cumplimiento de las condiciones relativas a la contribución proporcional a la verdad, a la reparación y a la no repetición, y dado que en cualquier caso, respecto de este grupo de delitos se garantiza la imposición de una sanción efectiva que tenga un componente retributivo. El propio Acuerdo Final al que remite el artículo transitorio 13 establece expresamente que las sanciones propias tienen un componente</p>	<p>“la privación de la libertad en instalaciones de la Fuerza Pública es uno de los beneficios de menor entidad contemplados por la Ley 1820 de 2016 para los agentes del Estado (supra, cuadro 3, D.1). Para la Sala, este tratamiento penal diferenciado para agentes del Estado y, en especial, para miembros de la Fuerza Pública resulta compatible con la Constitución Política, en la medida en que condiciona su otorgamiento al sometimiento de los beneficiarios a la Jurisdicción Especial para la Paz. Con ello, se busca, entre otras cosas, maximizar el espectro de la rendición de cuentas, el esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica, como elementos esenciales de los derechos individuales y colectivos de las víctimas”. Pág. 346.</p>	<p>“...en el caso de los ex combatientes de las FARC-EP, el tiempo de permanencia en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) será considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción “siempre que durante dicha permanencia se hubieran realizado trabajos u obras, o actividades con contenido reparador”. El mencionado texto prevé igualmente que sea considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción la permanencia en otras zonas perfectamente definidas y verificables (por ejemplo, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR), en las que se realicen labores restaurativas”. Pág. 251.</p> <p>“En el caso de los agentes del Estado, y exclusivamente para las sanciones alternativas y ordinarias, aplica el fuero carcelario, atendiendo a su condición de civiles</p>

	<p>retributivo de “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución”, que las sanciones alternativas “tienen una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años”. La Corte entiende, por tanto, que respecto de los máximos responsables de los delitos más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto armado, el Acto Legislativo 01 de 2017 consagra el deber de imponer una sanción efectiva y proporcional, por lo cual, se preserva el sustrato del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Pág. 371.</p>		<p>o integrantes de la Fuerza Pública”. Pág. 251.</p> <p>“En el caso de los terceros, las normas constitucionales aplicables no establecen ninguna regulación particular”. Pág. 251.</p> <p>“...las sanciones alternativas y ordinarias se ejecutan en condiciones ordinarias de pena privativa de la libertad”. Pág. 251.</p>
Participación política	<p>“Esta apertura se ha justificado sobre la base de que la reintegración política permite a los ex combatientes defender sus posturas ideológicas, económicas, sociales y políticas desde la institucionalidad y desde el sistema político, y no desde la ilegalidad y la violencia. Y de hecho, en la historia constitucional colombiana ha existido una apertura democrática en favor de quienes han sido parte en conflictos</p>	No se pronunció al respecto	<p>“la participación en política representa una garantía de tránsito de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil en todos sus aspectos, pues es una consecuencia del carácter de delincuentes políticos que se atribuye a los miembros de dicho grupo rebelde y que, en virtud del acuerdo de paz, se les restablece en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Pág. 438.</p>

	<p>armados, de modo que la suscripción de acuerdos de paz y los procesos de desmovilización tienen como contrapartida necesaria la inserción de los miembros de los grupos armados en la vida política del país, para que las inconformidades que dieron lugar a la ilegalidad y la violencia, sean canalizadas por las vías democráticas. De este modo, la habilitación para participar en política se convierte en una condición ineludible para las negociaciones de paz, en un instrumento para la superación del conflicto, y en una garantía de no repetición para las víctimas”. Pág. 335.</p> <p>Frente a la dicotomía de participación política y penas, la corte la resuelve así:</p> <p>“Primero, debe tenerse en cuenta que dentro de la lógica del Acto Legislativo 01 de 2017, el régimen sancionatorio hace prevalecer los componentes restaurativos y reparativos de las penas, sobre el componente retributivo. Desde esta perspectiva, los señalamientos acerca de la oposición irresoluble entre la habilitación para la reincorporación en política y el cumplimiento de las penas impuestas por la JEP y por</p>		<p>“...por su parte, impone como requisito para la posesión en cargos de elección popular, una certificación de la presidencia de la JEP, en la que conste que el candidato elegido ha iniciado su respectivo trámite ante dicha jurisdicción con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones del SIVJNR.</p> <p>Lo anterior es acorde con la finalidad de garantizar el progresivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad como requisito para la conservación del tratamiento especial en materia de participación política”. Pág. 442.</p>
--	--	--	--

	<p>la justicia ordinaria podrían superarse, porque como estas ya tienen una naturaleza, un contenido y un alcance distinto, podrían cumplirse satisfactoriamente en este nuevo escenario.</p> <p>Segundo, como todos los beneficios, tratamientos penales, derechos y demás efectos jurídicos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2017 están sujetos al régimen de condicionalidades, para la Corte es claro que las medidas previstas en el artículo transitorio 20 y en el artículo 3 para la reincorporación en la vida política, se encuentran supeditadas a este régimen, y en particular, a la dejación de armas, a la contribución efectiva al éxito del proceso de reincorporación a la vida civil, al aporte de verdad, a la implementación de garantías de no repetición, a la contribución a la reparación de las víctimas, y a la entrega de menores de edad, según calificación que debe hacer la propia Jurisdicción Especial para la Paz a partir de criterios objetivos y empíricamente verificables que demuestren que la reincorporación en la vida política ha tenido como contrapartida una ganancia en términos de consecución de la</p>		
--	---	--	--

	<p>verdad, de la reparación a las víctimas y de la construcción de una paz estable y duradera”. Pág. 391.</p> <p>“...la JEP deberá establecer si el cumplimiento de la pena puede ejercerse simultáneamente con el ejercicio de los distintos derechos de participación política, garantizando el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como el de asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”. Pág. 392.</p>		
Responsabilidades disciplinarias y administrativas	No se pronunció al respecto	<p>“La extinción de los efectos de la amnistía (i) a la acción y sanciones penales, principal y accesorias, conforme al inciso primero; y, (ii) a la responsabilidad y sanción disciplinaria o fiscal (administrativa), según el parágrafo, no presenta problemas de constitucionalidad; por el contrario, se aviene a los contenidos previstos en el marco constitucional transitorio avalado por la Corte Constitucional al analizar el Acto Legislativo No. 01 de 2017, enmienda que, en el artículo transitorio 6 del artículo 1, prevé la competencia prevalente de la JEP, incluyendo las sanciones e</p>	<p>“De esta manera, quienes se encuentran bajo la competencia de la JEP podrán acceder a la anulación o extinción de la responsabilidad disciplinaria o administrativa, incluyendo sanciones y multas impuestas. Dicha función será asumida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o la Sección de Revisión del Tribunal, según el caso, de acuerdo con las reglas competenciales fijadas por el constituyente derivado en la mencionada disposición constitucional.</p>

		<p>investigaciones disciplinarias o administrativas. En el mismo sentido, la Ley 1820 de 2016 reitera en varias disposiciones tal alcance, entre otros, en los artículos 4, 6.3 y 7, a cuyo análisis se remite la Sala”. Pág. 316.</p> <p>“Es claro que al agente estatal no le figurarán antecedentes penales ni administrativos (disciplinarios y fiscales) por tal proceso. No obstante, las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sí podrán acceder a los sistemas de información, donde consta que existió un proceso penal en contra del beneficiado por la medida, pues estos datos pueden ser relevantes en la acción de constatación de información que surten las diferentes entidades del citado Sistema Integral”. Pág. 330.</p>	<p>Este es un tratamiento que no es exclusivo para un tipo de responsables sobre otros, sino que se aplica por igual a agentes del Estado, terceros y ex guerrilleros. Sin embargo, por su naturaleza ampara prioritariamente a servidores públicos, pues solo tienen responsabilidad disciplinaria, administrativa y fiscal quienes han desempeñado funciones públicas”. Pág. 252.</p>
Inhabilidades	<p>Frente a la reincorporación política, social y económica, la Corte señala que se:</p> <p>“(i) eliminó la inhabilidad para acceder al desempeño de cargos públicos por razón de condenas penales por delitos distintos a los políticos y culposos; (ii) habilitó a las personas condenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para ejercer sin restricciones todos los derechos de participación política; (iii) habilitó a los miembros</p>	No se pronunció al respecto	<p>“...suspensión temporal de las inhabilidades impuestas como penas accesorias en las respectivas providencias, así como de las inhabilidades constitucionales y legales derivadas de las condenas penales y de las sanciones disciplinarias, entre ellas las inhabilidades para ser elegido, acceder al desempeño de funciones públicas y contratar con el Estado, hasta que dichas condenas sean tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con su</p>

	<p>de grupos armados ilegales que se han desmovilizado individualmente o que han suscrito acuerdos de paz con el Gobierno, para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales así como para suscribir contratos con el Estado, siempre que hayan dejado las armas, no se encuentren privados de la libertad y no hayan sido condenados posteriormente por delitos dolosos, con excepción de las personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos o por graves infracciones al DIH, quienes no pueden hacer parte de organismos de seguridad o de defensa del Estado, de la Rama Judicial, ni de los organismos de control". Pág. 337.</p>		<p>competencia. La suspensión de las inhabilidades, sin embargo, se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo y del Acto Legislativo 01 de 2017, en particular: (i) dejación de las armas; (ii) sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; (iii) atención de las obligaciones ante la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y (iv) compromiso de no volver a delinquir. Se trata de obligaciones cuyo incumplimiento impide que las condenas suspendidas sean tratadas adecuadamente por la Jurisdicción Especial para la Paz". Pág. 265.</p> <p>"Los miembros de la fuerza pública podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 por las situaciones en ella señaladas.</p>
--	---	--	--

			<p>En todo caso, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, “<i>no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control</i>” (inc. 3º del par. del art. 122 C.P.), excepto la participación de los ex integrantes de las FARC-EP en los mecanismos de seguridad para el ejercicio de la política, prevista en el Acuerdo Final”. Pág. 269.</p>
Indemnizaciones	<p>“...las limitaciones dispuestas en los artículos transitorios 18 y 26, en el sentido de que respecto de los destinatarios de las medidas de amnistía, indulto y demás modalidades de renuncia a la persecución penal no son procedentes las acciones judiciales en su contra para la indemnización de las víctimas, y en el sentido de que tampoco procede la acción de repetición y el llamamiento en garantía contra los miembros de la fuerza pública por los delitos que hubieren cometido en el marco del conflicto armado, no configuran una liberación de la responsabilidad de los victimarios frente a las víctimas., teniendo en cuenta los siguientes elementos: (i) primero, que en el caso de los</p>	<p>“...la reparación que debe garantizar el Estado debe ser, tal como se deriva de instrumentos internacionales vinculantes para Colombia y se ha reconocido en la jurisprudencia de este Tribunal, por lo menos integral, adecuada y efectiva. Esto implica, se insiste, que el derecho a la reparación no se reconduce a la mera pretensión indemnizatoria, pues, como se ha reconocido pacíficamente, la reparación cuenta con diferentes medidas, de restitución, de indemnización, de rehabilitación y de satisfacción, que en cualquier caso deben ser observadas en el marco del proceso de justicia transicional”. Pág. 243.</p>	<p>“Como es sabido y lo ha reiterado esta Corporación, la reparación contempla medidas de <i>indemnización, restitución, satisfacción y rehabilitación</i>. No obstante, uno de los tratamientos especiales otorgados es la exención en algunos casos y respecto de algunos responsables, de la obligación de <i>indemnizar</i> los daños causados.</p> <p>Cuando se otorga la amnistía o el indulto a miembros de grupos guerrilleros o la renuncia a la persecución penal a miembros de la Fuerza Pública, se exime a los responsables de la obligación de indemnizar a las víctimas y, por consiguiente, contra ellos no</p>

	<p>miembros de las FARC, la medida se encuentra precedida de la entrega de los bienes del grupo guerrillero, bienes que, a su turno, se encuentran destinados a la reparación; (ii) segundo, la limitación legal se refiere exclusivamente al patrimonio personal de los miembros de los grupos armados que participaron en el conflicto, de modo que si alguno de estos miembros actúa como testaferro del grupo como tal para ocultar sus bienes, no existe ningún título jurídico que impida perseguir los bienes correspondientes para reparar a las víctimas; (iii) por último, aunque efectivamente el Acto Legislativo 01 de 2017 dispone una liberación parcial de la responsabilidad de los victimarios frente a las víctimas, esta liberación opera únicamente frente al componente patrimonial de la reparación y no se extiende a los demás elementos de la misma, por lo cual, la contribución de los victimarios en estos otros frentes deberá aplicarse con mayor rigor". Pág. 402.</p>		<p>proceden acciones judiciales con ese fin.</p> <p>Sin embargo, de acuerdo con el artículo transitorio 18 conservan la obligación general de reparar a las víctimas a través de medidas no indemnizatorias, las cuales pueden consistir en obligaciones de reparación impuestas por la JEP en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición". Pág. 253.</p>
--	---	--	---